

INE/CG782/2022

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO

EXP: UT/SCG/Q/MMAR/JD01/AGS/176/2020

DENUNCIANTES: MADISON MONSERRAT ÁLVAREZ
ROMO Y OTROS

DENUNCIADO: PARTIDO REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, RESPECTO EL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO CON NÚMERO DE EXPEDIENTE UT/SCG/Q/MMAR/JD01/AGS/176/2020, INICIADO CON MOTIVO DE LAS DENUNCIAS PRESENTADAS POR DIVERSAS PERSONAS DENUNCIANTES EN CONTRA DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, POR SUPUESTAS VIOLACIONES A LA NORMATIVA ELECTORAL, CONSISTENTES EN LA VULNERACIÓN A SU DERECHO DE LIBRE AFILIACIÓN Y, EN SU CASO, EL USO NO AUTORIZADO DE SUS DATOS PERSONALES

Ciudad de México, 29 de noviembre de dos mil veintidós.

G L O S A R I O	
<i>Consejo General</i>	Consejo General del Instituto Nacional Electoral
<i>Constitución</i>	Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
<i>Comisión de Quejas</i>	Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral
<i>DEPPP</i>	Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral
<i>DERFE</i>	Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral
<i>INE</i>	Instituto Nacional Electoral
<i>LGIPE</i>	Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
<i>LGPP</i>	Ley General de Partidos Políticos

G L O S A R I O	
LGSMIME	Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral
PRI	Partido Revolucionario Institucional
Reglamento de Quejas	Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral
Sala Superior	Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
Tribunal Electoral	Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación

A N T E C E D E N T E S

I. ACUERDO INE/CG33/2019.¹ El veintitrés de enero de dos mil diecinueve, fue aprobado en sesión extraordinaria del *Consejo General*, el acuerdo por el cual se implementó, de manera excepcional, un procedimiento para la revisión, actualización y sistematización de los padrones de afiliadas y afiliados de los partidos políticos nacionales, en el que se acordó la suspensión de la resolución de diversos procedimientos sancionadores ordinarios, relacionados con presuntas indebidas afiliaciones de ciudadanos de todos los partidos políticos, hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve.

En este sentido, en el Punto de Acuerdo TERCERO del citado Acuerdo, se determinó lo siguiente:

TERCERO. Los PPN darán de baja definitiva de manera inmediata de su padrón de militantes los nombres de aquellas personas que, antes de la aprobación de este Acuerdo, hayan presentado quejas por indebida afiliación o por renunciaciones que no hubieran tramitado. ***En el caso de las quejas por los supuestos antes referidos que se lleguen a presentar con posterioridad a la aprobación de este Acuerdo, los PPN tendrán un plazo de 10 días contado a partir del día siguiente de aquel en el que la UTCE les haga de su conocimiento que se interpuso ésta, para dar de baja de forma definitiva a la persona que presente la queja.***

[Énfasis añadido]

¹Consultable en la liga de internet <https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/101664/Punto%2014%20Acuerdo%20INE-CG33-2019%20CG%20EXT%2023-01-2019.pdf>

CONSEJO GENERAL
UT/SCG/Q/MMAR/JD01/AGS/176/2020

II. DENUNCIAS. En diversas fechas se recibieron sendos escritos de queja signados por las ciudadanas y ciudadanos que a continuación se enlistan, a través de los cuales hicieron del conocimiento de esta autoridad electoral, de manera individual, hechos que a su juicio contravienen la normativa electoral, consistentes en la presunta violación de su derecho de libertad de afiliación y la utilización de sus datos personales, para tal fin.

No.	Ciudadanas (os)	Fecha de recepción	Entidad
1	Madison Monserrat Álvarez Romo ²	11/noviembre/2020	Aguascalientes
2	Selene Guadalupe López Sanz ³	11/noviembre/2020	Sinaloa
3	Sebastián Miguel Martínez Miranda ⁴	11/noviembre/2020	Sinaloa
4	Aldryn Chamú Márquez ⁵	11/noviembre/2020	Guerrero
5	Onivia Mateo Rodríguez ⁶	11/noviembre/2020	Guerrero
6	Omar Alejandro Cervantes Alcalá ⁷	6/noviembre/2020	Michoacán
7	María Antonia Guerrero Ramírez ⁸	6/noviembre/2020	Sinaloa
8	Azalia Francisca Torres Torres ⁹	6/noviembre/2020	Sinaloa
9	Ariznoe Lizdebeth Zazueta Márquez ¹⁰	6/noviembre/2020	Sinaloa
10	Esmima Sumukey Hernández Medina ¹¹	11/noviembre/2020	Coahuila
11	Ángel Jair Macías Padilla ¹²	11/noviembre/2020	Coahuila
12	María Isabel García Ortega ¹³	11/noviembre/2020	Estado de México
13	Griselda Ortiz Ortiz ¹⁴	9/noviembre/2020	Ciudad de México
14	Zaira Brigitt Bernal Arellano ¹⁵	6/noviembre/2020	Guerrero
15	Griselda Malváez García ¹⁶	10/noviembre/2020	Estado de México
16	Brenda Yadira Muñoz Galindo ¹⁷	10/noviembre/2020	Estado de México
17	América Crispín Martínez ¹⁸	10/noviembre/2020	Estado de México
18	Aracely Castillo Hernández ¹⁹	10/noviembre/2020	Estado de México
19	Diana Franco González ²⁰	10/noviembre/2020	Ciudad de México
20	Irving Adán Popoca Guzmán	10/noviembre/2020	Ciudad de México

² Visible a fojas 1 a 6 del expediente

³ Visible a fojas 10 a 16 del expediente.

⁴ Visible a fojas 17 a 23 del expediente.

⁵ Visible a fojas 25 a 33 del expediente.

⁶ Visible a fojas 34 a 42 del expediente.

⁷ Visible a fojas 46 a 52 del expediente.

⁸ Visible a fojas 55 a 58 del expediente.

⁹ Visible a fojas 62 a 69 del expediente.

¹⁰ Visible a fojas 70 a 75 del expediente.

¹¹ Visible a fojas 77 a 83 del expediente.

¹² Visible a fojas 84 a 89 del expediente.

¹³ Visible a fojas 93 a 98 del expediente.

¹⁴ Visible a fojas 100 a 103 del expediente.

¹⁵ Visible a fojas 106 a 111 del expediente.

¹⁶ Visible a fojas 114 a 117 del expediente.

¹⁷ Visible a fojas 118 a 121 del expediente.

¹⁸ Visible a fojas 122 a 125 del expediente

¹⁹ Visible a fojas 126 a 129 del expediente.

²⁰ Visible a fojas 132 a 136 del expediente

III. REGISTRO, ADMISIÓN, RESERVA DE EMPLAZAMIENTO Y DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN.²¹ Mediante acuerdo de veinticuatro de noviembre de dos mil veinte, se ordenó registrar el procedimiento sancionador ordinario bajo el número de expediente **UT/SCG/Q/MMAR/JD01/AGS/176/2020**.

Respecto de María Isabel García Ortega [ciudadana que se encuentra en el numeral **12** de la tabla que antecede], toda vez que su queja había sido remitida únicamente en fotocopia, se determinó requerir a los Vocales Ejecutivo y Secretario de la 24 Junta Distrital Ejecutiva de este Instituto en el Estado de México, a efecto de que remitieran el original del escrito de denuncia.

Asimismo, respecto de los ciudadanos que se encuentran en los numerales **1 al 11 y 13 al 20** de la tabla que antecede se admitió a trámite la denuncia, y se reservó lo conducente respecto al emplazamiento, hasta en tanto se culminara la etapa de investigación.

En ese sentido, con el propósito de allegarse de mayores elementos probatorios tendentes al esclarecimiento de los hechos denunciados, se ordenó la realización de los siguientes requerimientos:

Sujeto	Oficio-Notificación	Respuesta
Vocales Ejecutivo y Secretario de la 24 JDE en el Estado de México	Correo electrónico ²² 02 de diciembre de 2020	Oficio INE-JDE24-MEX/VS/1365/2020 ²³ 04 de diciembre de 2020
<i>PRI</i>	INE-UT/04342/2020 ²⁴ 02 de diciembre de 2020	Oficio PRI/REP-INE/822/2020 ²⁵ 07 de diciembre de 2020 Oficio PRI/REP-INE/921/2020 ²⁶ 06 enero de 2021 Oficio PRI/REP-INE/128/2021 ²⁷ 22 marzo de 2021 Oficio PRI/REP-INE/544/2021 ²⁸ 05 de octubre de 2021

²¹ Visible a fojas 142 a 155 del expediente.

²² Visible a foja 173 del expediente.

²³ Visible a foja 193 del expediente.

²⁴ Visible a foja 176 del expediente.

²⁵ Visible a fojas 222 a 245 del expediente.

²⁶ Visible a fojas 318 a 338 del expediente.

²⁷ Visible a fojas 469 a 481 del expediente.

²⁸ Visible a fojas 607 a 614 del expediente.

CONSEJO GENERAL
UT/SCG/Q/MMAR/JD01/AGS/176/2020

Sujeto	Oficio-Notificación	Respuesta
<i>DEPPP</i>	Correo electrónico ²⁹ 01 de diciembre de 2020	Correo electrónico ³⁰ 09 de diciembre de 2020
Esmima Sumukey Hernández Medina	INE/COAH/JDE05/VE/0441/2022 ³¹ 03 de diciembre de 2022	Sin respuesta
Ángel Jair Macías Padilla	INE/COAH/JDE05/VE/0440/2020 ³² 03/12/2020	Sin respuesta

Finalmente, se ordenó al *PRI* que en acatamiento a la obligación que le impone el artículo 25, párrafo 1, inciso a), de la *LGPP*, así como a lo ordenado en el Acuerdo **INE/CG33/2019**, de manera inmediata, procediera a eliminar a los denunciantes de su padrón de militantes, en el caso de que aún se encontraran inscritos, tanto del Sistema de Verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos de la *DEPPP*, como de su portal de internet y/o cualquier otra base publica en que pudieran encontrarse.

IV. ADMISIÓN RESPECTO MARÍA ISABEL GARCÍA ORTEGA, RESERVA DE EMPLAZAMIENTO, VISTA A DIVERSOS QUEJOSOS Y REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN.³³ Por acuerdo de ocho de febrero de dos mil veintiuno se ordenó admitir a trámite el procedimiento respecto a María Isabel García Ortega, reservar el emplazamiento hasta que concluyera la investigación preliminar y dar vista a las ciudadanas y ciudadanos que enseguida se precisan con las cédulas de afiliación exhibidas por el partido político denunciado, y realizar diversos requerimientos de información:

Sujeto	Oficio-Notificación	Respuesta
<i>PRI</i>	INE-UT/00974/2021 ³⁴ 10/02/2021	PRI/REP-INE/119/2021 ³⁵ 16/02/2022
<i>DEPPP</i>	Correo electrónico ³⁶ 09/02/2022	Por correo electrónico ³⁷ 12/02/2021
Irving Adán Popoca Guzmán	INE/JDE 08-CM/00104/2021 ³⁸ 11/02/2021	No respondió
Onivia Mateo Rodríguez	INE/GRO/JDE-01/VS/0072/2021 ³⁹ 12/02/2021	No respondió

²⁹ Visible a fojas 158 a 160 del expediente.

³⁰ Visible a fojas 252 a 254 del expediente.

³¹ Visible a foja 209 del expediente.

³² Visible a foja 203 del expediente

³³ Visible a fojas 356 a 371 del expediente.

³⁴ Visible a foja 385 del expediente.

³⁵ Visible a fojas 408 a 412 del expediente.

³⁶ Visible a foja 372 del expediente.

³⁷ Visible a fojas 388 y 389 del expediente.

³⁸ Visible a foja 396 del expediente.

³⁹ Visible a foja 405 del expediente.

CONSEJO GENERAL
UT/SCG/Q/MMAR/JD01/AGS/176/2020

Sujeto	Oficio-Notificación	Respuesta
Ángel Jair Macías Padilla	INE/COAH/JDE/05/VE/146/2021 ⁴⁰ 11/02/2021	No respondió
Esmima Sumukey Hernández Medina	INE/COAH/JDE/05/VE/145/2021 ⁴¹ 11/02/2021	No respondió
María Antonia Guerrero Ramírez	INE/SIN/05JDE/VS/0130/2021 ⁴² 11/02/2021	16/02/2021 ⁴³ Por escrito ⁴⁴
Ariznoe Lizdebeth Zazueta Márquez	INE/VS/JDE04-SIN/0177/2021 ⁴⁵ 12/02/2021	17/02/2021 ⁴⁶
Azalia Francisca Torres Torres	INE/VS/JDE04-SIN/0178/2021 ⁴⁷ 12/02/2021	17/02/2021 ⁴⁸
Selene Guadalupe López Sanz	INE/JD07/SIN/0109/2021 ⁴⁹ 12/02/2021	16/02/2021 ⁵⁰
Sebastián Miguel Martínez Miranda	INE/JD07/SIN/0110/2021 ⁵¹ 12/02/2021	No respondió

Finalmente, se ordenó al *PRI* que en acatamiento a la obligación que le impone el artículo 25, párrafo 1, inciso a), de la *LGPP*, así como a lo ordenado en el Acuerdo **INE/CG33/2019**, de manera inmediata, procediera a eliminar a **María Isabel García Ortega** de su padrón de militantes, en el caso de que aún se encontrara inscrita, tanto del Sistema de Verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos de la *DEPPP*, como de su portal de internet y/o cualquier otra base publica en que pudieran encontrarse.

V. REPOSICIÓN DE NOTIFICACIONES, VISTA A DIVERSAS CIUDADANAS Y CIUDADANOS Y ACTA CIRCUNSTANCIADA.⁵² Mediante proveído de veintiocho de mayo de dos mil veintiuno se ordenó reponer las constancias de notificación realizadas a María Antonia Guerrero Ramírez, Ariznoe Lizdebeth Zazueta Márquez y Esmirna Sumukey Hernández Medina del diverso emitido el ocho de febrero de la misma anualidad.

⁴⁰ Visible a fojas 422 a 424 del expediente.

⁴¹ Visible a fojas 428 a 430 del expediente.

⁴² Visible a foja 435 del expediente.

⁴³ Visible a fojas 404 del expediente.

⁴⁴ Visible a foja 438 del expediente.

⁴⁵ Visible a foja 441 del expediente.

⁴⁶ Visible a foja 450 del expediente.

⁴⁷ Visible a fojas 445 y 446 del expediente.

⁴⁸ Visible a foja 451 del expediente.

⁴⁹ Visible a foja 453 del expediente.

⁵⁰ Visible a foja 402 del expediente.

⁵¹ Visible a foja 461 del expediente.

⁵² Visible a fojas 482 a 491 del expediente.

CONSEJO GENERAL
UT/SCG/Q/MMAR/JD01/AGS/176/2020

Sujeto	Oficio-Notificación	Respuesta
Esmima Sumukey Hernández Medina	INE/COAH/JDE/05/VE/458/2021 ⁵³ 03/06/2021	No respondió
Ariznoe Lizdebeth Zazueta Márquez	INE/VS/JDE04-SIN/0923/2021 ⁵⁴ 21/06/2021	No respondió
María Antonia Guerrero Ramírez	INE/SIN/05JDE/VS/04702021 ⁵⁵ 01/06/2021	No respondió

Asimismo, se ordenó dar vista a diversas ciudadanas y ciudadanos con las cédulas de afiliación exhibidas por el partido político denunciado:

Sujeto	Oficio-Notificación	Respuesta
Madison Monserrat Álvarez Romo	INE/01JDE-AGS/VS444/2021 ⁵⁶ 03/06/2021	No respondió
Griselda Malváez García	INE-JDE39-MEX/VS/1235/2021 ⁵⁷ 02/06/2021	No respondió
Aracely Castillo Hernández	INE/JDE04/VS/1233/2021 ⁵⁸ 02/06/2021	No respondió
Brenda Yadira Muñoz Galindo	INE/JDE04/VS/1234/2021 ⁵⁹ 01/06/2021	No respondió
Omar Alejandro Cervantes Alcalá	INE/09JDE-MICH/VS/197/2021 ⁶⁰ 08/06/2021	No respondió
Zaira Brigitt Bernal Arellano	INE/JDE04-GRO/VS/0270/2021 ⁶¹ 04/06/2021	No respondió

De igual manera, se ordenó instrumentar un acta circunstanciada a efecto de confirmar la baja de las y los denunciantes del padrón de afiliados del *PR*I alojado en internet, haciéndose constar en acta circunstanciada levantada ese mismo día que ninguna de las ciudadanas y ciudadanos aparecía en el citado padrón de militantes.

VI. VISTA A LA DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y A DIVERSAS VOCALÍAS DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA.⁶²

Mediante proveído de cuatro de octubre de dos mil veintiuno, se ordenó hacer del

⁵³ Visible a foja 540 del expediente.

⁵⁴ Visible a foja 595 del expediente.

⁵⁵ Visible a fojas 589 del expediente.

⁵⁶ Visible a foja 531 del expediente.

⁵⁷ Visible a foja 548 del expediente.

⁵⁸ Visible a foja 554 del expediente.

⁵⁹ Visible a foja 560 del expediente.

⁶⁰ Visible a foja 566 del expediente.

⁶¹ Visible a foja 586 del expediente.

⁶² Visible a fojas 597 a 605 del expediente.

conocimiento del Director de Capacitación Electoral de la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica, y de diversas Vocalías Distritales de Capacitación Electoral y Educación Cívica, a efecto de que en el ámbito de su competencia determinaran lo que en derecho correspondiera, respecto a la omisiones y desahogos presentados por las ciudadanas y ciudadanos referidos en párrafos precedentes, en atención a las vistas ordenadas mediante acuerdos de ocho de febrero y veintiocho de mayo de dos mil veintiuno.

VII. PREVENCIÓN A DOS CIUDADANAS Y VISTA A DIANA FRANCO GONZÁLEZ, GRISELDA ORTIZ ORTIZ Y AMÉRICA CRISPÍN MARTÍNEZ.⁶³

Mediante proveído de diez de enero de dos mil veintidós se ordenó prevenir a Selene Guadalupe López Sanz y Azalia Francisca Torres Torres a efecto de que remitieran el original de los escritos enviados previamente por correo electrónico, así como dar vista Diana Franco González, Griselda Ortiz Ortiz y América Crispín Martínez, para que manifestaran lo que a su interés conviniera respecto a las cédulas de afiliación exhibidas por el partido político denunciado.

Dichas diligencias fueron desahogadas en los siguientes términos:

Ciudadana (o)	Oficio-Notificación	Respuesta
América Crispín Martínez	INE-JDE39-MEX/VS/0052/2022 ⁶⁴ 13 de enero de 2022	No respondió
Griselda Ortiz Ortiz	INE/CDMX/22JDE/VS/00037/2022 ⁶⁵ 13 de enero de 2022	No respondió
Selene Guadalupe López Sanz	INE7JD07/SIN/0018/2022 ⁶⁶ 18 de enero de 2022	Por escrito ⁶⁷
Azalia Francisca Torres Torres	INE/VS/JDE04-SIN/0099/2022 ⁶⁸ 20 de enero de 2022	Por escrito ⁶⁹
Diana Franco González	INE/JDE 08-CM/00121/2022 ⁷⁰ 03 de febrero de 2022	Por escrito ⁷¹

VIII. SOLICITUD DE RATIFICACIÓN DE DESISTIMIENTO DE MARÍA ISABEL GARCÍA ORTEGA.⁷² Por acuerdo de tres de febrero de dos mil veintidós se ordenó

⁶³ Visible a fojas 639 a 644 del expediente.

⁶⁴ Visible a foja 657 del expediente.

⁶⁵ Visible a foja 666 del expediente.

⁶⁶ Visible a foja 670 del expediente.

⁶⁷ Visible a foja 718 del expediente.

⁶⁸ Visible a foja 681 del expediente.

⁶⁹ Visible a foja 743 del expediente.

⁷⁰ Visible a fojas 700 y 701 del expediente.

⁷¹ Visible a fojas 720 a 728 del expediente.

⁷² Visible a fojas 703 a 707 del expediente.

requerir a la ciudadana en cita a efecto de que ratificara sus escritos de desistimiento.

Ciudadana	Oficio-Notificación	Respuesta
María Isabel García Ortega	INE-JDE24-MEX/VS/1148/2022 ⁷³ 03 de mayo de 2022	No respondió

IX. DESISTIMIENTO DE MARÍA ISABEL GARCÍA ORTEGA Y EMPLAZAMIENTO.⁷⁴ Mediante acuerdo de quince de junio de dos mil veintidós, se tuvo por ratificado el desistimiento de María Isabel García Ortega de la queja que presentó en contra del *PRI*.

Aunado a lo anterior, se ordenó el emplazamiento de dicho partido político para que manifestara lo que a su derecho conviniera respecto a las conductas que se le imputaron y aportara los medios de prueba que considerara pertinentes.

El emplazamiento se diligenció en los siguientes términos:

Sujeto-Oficio	Notificación-Plazo	Respuesta
<i>PRI</i> INE-UT/05755/2022 ⁷⁵	Citatorio: 17 de junio de 2022 Cédula: 20 de junio de 2022 Plazo: 21 al 27 de junio de 2022	Oficio PRI/REP-INE/152/2022 ⁷⁶ 27 de junio de 2022

X. ALEGATOS.⁷⁷ Mediante proveído de treinta y uno de agosto de dos mil veintidós se requirió información al Director Ejecutivo del Registro Federal de Electores de este Instituto, y se ordenó dar vista a las partes, a efecto de que, en vía de alegatos manifestaran lo que a su derecho conviniera.

Dicha diligencia se realizó de la siguiente manera:

Sujeto-Oficio	Notificación-Plazo	Respuesta
<i>PRI</i> INE-UT/07563/2022 ⁷⁸	Citatorio: 02 de septiembre de 2022 Cédula: 05 de septiembre de 2022 Plazo: 06 al 12 de septiembre de 2022	Oficio PRI/REP-INE/214/2021 ⁷⁹ 09 de septiembre de 2022

⁷³ Visible a foja 745 del expediente.

⁷⁴ Visible a foja 751 a 765 del expediente.

⁷⁵ Visible a foja 770 del expediente.

⁷⁶ Visible a fojas 808 a 814 del expediente.

⁷⁷ Visible a fojas 815 a 822 del expediente.

⁷⁸ Visible a foja 853 del expediente.

⁷⁹ Visible a fojas 927 a 930 del expediente.

CONSEJO GENERAL
UT/SCG/Q/MMAR/JD01/AGS/176/2020

Sujeto-Oficio	Notificación-Plazo	Respuesta
Griselda Ortiz Ortiz INE/CDMX/22JDE/VS/00885/2022 ⁸⁰	Cédula: 01 de septiembre de 2022 Plazo: 02 al 08 de septiembre de 2022	Sin respuesta
Zaira Brigitt Bernal Arellano INE/JDE04-GRO/VS/0385/2022 ⁸¹	Cédula: 01 de septiembre de 2022 Plazo: 02 al 08 de septiembre de 2022	Sin respuesta
Irving Adán Apodaca Guzmán INE/08JDE-CM/1076/2022 ⁸²	Cédula: 05 de septiembre de 2022 Plazo: 06 al 12 de septiembre de 2022	Sin respuesta
Diana Franco González INE/08JDE-CM/1077/2022 ⁸³	Cédula: 02 de septiembre de 2022 Plazo: 05 al 09 de septiembre de 2022	Por escrito ⁸⁴
Esmirna Sumukey Hernández Medina INE/COAH/JDE05/VE/0326/2022 ⁸⁵	Citatorio: 01 de septiembre de 2022 Cédula: 02 de septiembre de 2022 Plazo: 05 al 09 de septiembre de 2022	Sin respuesta
Ángel Jair Macías Padilla INE/COAH/JDE05/VE/0327/2022 ⁸⁶	Citatorio: 01 de septiembre de 2022 Cédula: 02 de septiembre de 2022 Plazo: 05 al 09 de septiembre de 2022	Sin respuesta
Aldryn Chamú Márquez INE/GRO/JDE-01/VS/0536/2022 ⁸⁷	Cédula: 01 de septiembre de 2022 Plazo: 02 al 08 de septiembre de 2022	Sin respuesta
Onivia Mateo Rodríguez INE/GRO/JDE-01/VS/0537/2022 ⁸⁸	Cédula: 01 de septiembre de 2022 Plazo: 02 al 08 de septiembre de 2022	Sin respuesta
Aracely Castillo Hernández INE-JDE39-MEX/VS/0968/2022 ⁸⁹	Cédula: 01 de septiembre de 2022 Plazo: 02 al 08 de septiembre de 2022	Sin respuesta
América Crispín Martínez INE-JDE39-MEX/VS/0969/2022 ⁹⁰	Cédula: 01 de septiembre de 2022 Plazo: 02 al 08 de septiembre de 2022	Sin respuesta
Brenda Yadira Muñoz Galindo INE-JDE39-MEX/VS/0970/2022 ⁹¹	Cédula: 01 de septiembre de 2022 Plazo: 02 al 08 de septiembre de 2022	Sin respuesta
Griselda Malvárez García INE-JDE39-MEX/VS/0971/2022 ⁹²	Cédula: 01 de septiembre de 2022 Plazo: 05 al 09 de septiembre de 2022	Sin respuesta
María Antonia Guerrero Ramírez INE/SIN/05JDE/VS/0716/2022 ⁹³	Cédula: 02 de septiembre de 2022 Plazo: 05 al 09 de septiembre de 2022	Sin respuesta
Madison Montserrat Álvarez Romo INE/01JDE-AGS/VS/683/2022 ⁹⁴	Cédula: 02 de septiembre de 2022 Plazo: 05 al 09 de septiembre de 2022	Sin respuesta
Azalia Francisca Torres Torres	Cédula: 02 de septiembre de 2022 Plazo: 05 al 09 de septiembre de 2022	Sin respuesta

⁸⁰ Visible a foja 845 del expediente.

⁸¹ Visible a foja 851 del expediente.

⁸² Visible a fojas 860 y 861 del expediente.

⁸³ Visible a fojas 864 y 865 del expediente.

⁸⁴ Visible a foja 916 a 926 del expediente.

⁸⁵ Visible a foja 871 del expediente.

⁸⁶ Visible a foja 876 del expediente.

⁸⁷ Visible a foja 878 del expediente.

⁸⁸ Visible a foja 881 del expediente.

⁸⁹ Visible a foja 887 del expediente.

⁹⁰ Visible a foja 892 del expediente.

⁹¹ Visible a foja 898 del expediente.

⁹² Visible a foja 902 del expediente.

⁹³ Visible a foja 909 del expediente.

⁹⁴ Visible a foja 912 del expediente.

CONSEJO GENERAL
UT/SCG/Q/MMAR/JD01/AGS/176/2020

Sujeto-Oficio	Notificación-Plazo	Respuesta
INE/VS/JDE04-SIN/01134/2022 ⁹⁵		
Ariznoe Lizdebeth Zazueta Márquez INE/VS/JDE04-SIN/01135/2022 ⁹⁶	Citatorio: 02 de septiembre de 2022 Cédula: 05 de septiembre de 2022 Plazo: 06 al 12 de septiembre de 2022	Sin respuesta
Selene Guadalupe López Sanz INE/JD07/SIN/0499/2022 ⁹⁷	Cédula: 01 de septiembre de 2022 Plazo: 02 al 08 de septiembre de 2022	Sin respuesta
Sebastián Miguel Martínez Miranda INE/JD07/SIN/0500/2022 ⁹⁸	Cédula: 07 de septiembre de 2022 Plazo: 08 al 14 de septiembre de 2022	Sin respuesta
Omar Alejandro Cervantes Alcalá INE-JD09-MICH/VE/307/2022 ⁹⁹	Citatorio: 01 de septiembre de 2022 Cédula: 02 de septiembre de 2022 Plazo: 05 al 09 de septiembre de 2022	Sin respuesta
DERFE Por medios electrónicos ¹⁰⁰	En breve término	Por correo electrónico ¹⁰¹

XI. ESCISIÓN. Mediante diverso proveído, la *UTCE*, en el ámbito de sus atribuciones consideró necesario escindir el escrito de queja y documentación relativa a la ciudadana **Diana Franco González**, a efecto de realizar mayores diligencias de investigación.

XII. VERIFICACIÓN FINAL DE NO REAFILIACIÓN. El veintitrés de noviembre de dos mil veintidós, personal de la *UTCE*, ingresó al Sistema de Verificación del Padrón de Personas Afiliadas a los Partidos Políticos de la *DEPPP*, logrando advertir que la totalidad de personas denunciantes, siguen apareciendo con registro de militancia cancelado, sin que hubiera alguna nueva afiliación.

XIII. ELABORACIÓN DE PROYECTO. En su oportunidad, se ordenó la elaboración del proyecto de resolución correspondiente para someterlo a la consideración de la Comisión de Quejas.

XIV. SESIÓN DE LA COMISIÓN DE QUEJAS. En la Tercera Sesión Extraordinaria de carácter privado, celebrada el veintitrés de noviembre de este año, la *Comisión de Quejas* aprobó el proyecto, por unanimidad de votos de sus integrantes.

⁹⁵ Visible a foja 935 del expediente.

⁹⁶ Visible a foja 945 del expediente.

⁹⁷ Visible a foja 953 del expediente.

⁹⁸ Visible a foja 959 del expediente.

⁹⁹ Visible a foja 966 del expediente.

¹⁰⁰ Visible a fojas 823 a 825 del expediente.

¹⁰¹ Visible a fojas 981 a 987 del expediente.

XV. MANIFESTACIONES DE DESISTIMIENTO DE SEBASTIÁN MIGUEL MARTÍNEZ MIRANDA Y ARIZNOE LIZDEBETH ZAZUETA MÁRQUEZ. Con posterioridad a la aprobación del proyecto de resolución por parte de los integrantes de la Comisión de Quejas y Denuncias, y previo a la sesión del Consejo General para su aprobación definitiva se recibieron escritos de desistimiento de las denuncias hechas contra el *PRI* a nombre de **Sebastián Miguel Martínez Miranda y Ariznoe Lizdebeth Zazueta Márquez.**

Atento a lo anterior, y tomando en consideración la necesidad de emitir el pronunciamiento que en Derecho corresponda, durante la sesión del Consejo General celebrada en esta fecha, la Consejera Electoral Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, propuso escindir el procedimiento respecto a las personas antes señaladas, para dar trámite a la solicitud de desistimiento.

CONSIDERANDO

PRIMERO. COMPETENCIA

El *Consejo General* es competente para resolver los procedimientos sancionadores ordinarios cuyos proyectos le sean turnados por la *Comisión de Quejas*, conforme a lo dispuesto en los artículos 44, párrafo 1, incisos aa) y jj), y 469, párrafo 5, de la *LGIPE*.

En el caso, la conducta objeto de análisis en el presente procedimiento sancionador es la presunta transgresión a lo previsto en los artículos 6, apartado A, fracción II; 16, párrafo segundo; 35, fracción III, y 41, Base I, párrafo segundo, de la *Constitución*; 443, párrafo 1, incisos a) y n), de la *LGIPE*; 2, párrafo 1, inciso b) y 25, párrafo 1, incisos a), e), x) e y), de la *LGPP*, derivado de la probable transgresión al derecho de libertad de afiliación –vertiente positiva- y la presunta utilización indebida de datos personales, por parte del *PRI*, en perjuicio de **Madison Monserrat Álvarez Romo, Selene Guadalupe López Sanz, Sebastián Miguel Martínez Miranda, Aldryn Chamú Márquez, Onivia Mateo Rodríguez, Omar Alejandro Cervantes Alcalá, María Antonia Guerrero Ramírez, Azalia Francisca Torres Torres, Ariznoe Lizdebeth Zazueta Márquez, Esmirna Sumukey Hernández Medina, Ángel Jair Macías Padilla, Griselda Ortiz Ortiz, Zaira Brigitt Bernal Arellano, Aracely Castillo Hernández, América Crispín Martínez, Brenda Yadira Muñoz Galindo, Griselda Malvaez García, María Isabel García Ortega e Irving Adán Popoca Guzmán.**

Ahora bien, conforme al artículo 23 del *COFIPE*, los partidos políticos ajustarán su conducta a las disposiciones establecidas en el citado Código, correspondiendo al Instituto Federal Electoral —hoy *INE*— vigilar que las actividades de éstos se desarrollen con apego a la ley.

Del mismo modo, de conformidad con los artículos 341, párrafo 1, inciso a); 342, párrafo 1, incisos a) y n), y 354, párrafo 1, inciso a), del ordenamiento en consulta, los partidos políticos son sujetos de responsabilidad por infracciones cometidas a las disposiciones contenidas en dicho Código, entre otras, por el incumplimiento de las obligaciones señaladas en el artículo 38 del dispositivo legal en cita, las cuales son sancionables por el *Consejo General*.

Dichos artículos se reproducen en los diversos 442, párrafo 1, inciso a); 443 párrafo 1, incisos a) y n), y 456, párrafo 1, incisos a), de la *LGIPE* y 25 de la *LGPP*, respectivamente.

En consecuencia, siendo atribución del *Consejo General* conocer de las infracciones y, en su caso, imponer las sanciones correspondientes, resulta competente para conocer y resolver respecto de las presuntas infracciones denunciadas en el procedimiento sancionador ordinario, atribuidas al *PRI*, derivado, esencialmente, de la indebida afiliación al citado instituto político de las y los ciudadanos referidos.

Sirve de apoyo a lo anterior, lo sostenido por la *Sala Superior* en la sentencia dictada dentro del expediente SUP-RAP-107/2017,¹⁰² en el sentido de que esta autoridad electoral nacional es competente para resolver los procedimientos ordinarios sancionadores relacionados con la presunta afiliación indebida de ciudadanos a los partidos políticos, esencialmente, por las razones siguientes:

- Porque la tutela de la ley le corresponde de manera directa a las autoridades, no a los partidos.
- Porque, por mandato legal, el *INE* es una autoridad que tiene potestad para imponer sanciones en materia electoral federal por transgresión a la ley.

¹⁰² Consultable en la página de internet del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, o bien en la dirección electrónica: http://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-0107-2017.pdf

- Porque la existencia de un régimen sancionatorio intrapartidista no excluye la responsabilidad de los partidos políticos por transgresión a la ley, ni la competencia del *INE* para atender tal cuestión.
- Porque la *Sala Superior* ya ha reconocido que el *INE* es el órgano competente para atender denuncias por afiliación indebida de ciudadanas y ciudadanos.

Lo anterior, con fundamento en lo previsto en los artículos 443, párrafo 1, incisos a) y n), 459, 464, 467, 468 y 469, de la *LGIPE* —los cuales contienen reglas que ya se encontraban previstas en el *COFIPE*, en los artículos 342, párrafo 1, incisos a) y n); 356, 361, 364, 365 y 366—, relacionados con lo dispuesto en los numerales 35, fracción III y 41, párrafo tercero, Base I, párrafo segundo, de la *Constitución*, es decir con base en el derecho humano a la libre asociación, en su vertiente de afiliación política.

SEGUNDO. SOBRESEIMIENTO POR DESISTIMIENTO DE MARÍA ISABEL GARCÍA ORTEGA.

En el caso, se actualiza la causal de sobreseimiento por desistimiento, prevista en los artículos 466, párrafo 2, inciso c), de la *LGIPE* y 46, párrafo 3, fracción III del *Reglamento de Quejas* que, en lo que interesa, a la letra establecen:

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales

Artículo 466.

...

2. Procederá el sobreseimiento de la queja o denuncia, cuando:

...

c) El denunciante presente escrito de desistimiento, siempre y cuando lo exhiba antes de la aprobación del Proyecto de Resolución por parte de la Secretaría y que, a juicio de la misma, o por el avance de la investigación, no se trate de la imputación de hechos graves, ni se vulneren los principios rectores de la función electoral.

Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral

Artículo 46.

...

3. Procederá el sobreseimiento de la queja o denuncia, cuando:

...

III. El denunciante presente escrito de desistimiento, siempre y cuando lo exhiba antes de la aprobación del proyecto y que, a juicio de la Unidad Técnica, o por el avance de la

CONSEJO GENERAL
UT/SCG/Q/MMAR/JD01/AGS/176/2020

investigación, no se trate de la imputación de hechos graves, ni se vulneren los principios rectores de la función electoral.

Lo anterior, tomando en consideración que obran en autos escritos signados por **María Isabel García Ortega** por medio del cual se **desiste de la queja presentada en contra del PRI** y que además se estima que los hechos denunciados no revisten gravedad, ni tampoco con su comisión pueden verse afectados los principios rectores de la función comicial.

El contenido de los escritos en cuestión es el siguiente:

Escrito 1:

[...]

En este acto acudo a esta autoridad, a efecto de presentar mi formal DESISTIMIENTO de la denuncia hecha contra el Partido Revolucionario Institucional, la cual se investiga dentro del expediente UT/SCG/Q/MMAR/JD01/AGS/176/2020, ya que mi único objetivo era solicitar mi baja como militante de dicho partido.

[...]

Escrito 2:

[...]

En seguimiento a mi escrito promovido ante este Instituto Nacional Electoral, relativo a mi formal DESISTIMIENTO de la denuncia que instauré en contra del Partido Revolucionario Institucional, manifiesto:

La determinación de ya no continuar con el procedimiento de queja, toda vez que mi intención era ya no pertenecer como militante del PRI, en este acto por así convenir a mis intereses personales, ratifico en todas y cada una de sus partes el contenido de mi escrito de desistimiento.

[...]

En virtud de lo anterior, mediante acuerdo de **tres de febrero del año en curso**, el Titular de la *UTCE*, tuvo por recibidos los escritos de desistimiento signados por la referida persona quejosa y, a efecto de tener certeza sobre la autenticidad del contenido de los mismos y de que preservaban su propósito de dar por concluido el procedimiento que iniciaron, ordenó requerirle a dicha ciudadana con el objetivo de que ratificara dichos escritos. Apercebida que, en caso, de no dar contestación dicha omisión tendría como efecto tener por ratificado el contenido de los escritos de desistimiento ya señalados.

En este sentido, de las constancias de autos se advierte que **María Isabel García Ortega** fue omisa en dar contestación al requerimiento referido por tanto se le tiene

por desistida tomando en consideración el apercibimiento que fue hecho de su conocimiento en caso de incurrir en ese supuesto, consistente en que dicha omisión tendría como efecto tener por ratificado el contenido de los escritos de desistimiento que presentó ante la autoridad instructora.

En consecuencia, toda vez que el derecho a la libertad de afiliación, es un derecho personalísimo, al ser decisión de las y los ciudadanos el afiliarse o no a determinada fuerza política, conforme lo prevé tanto la *Constitución* como la normatividad de la materia, que con los hechos denunciados no se afectan los principios rectores de la función comicial y que la persona denunciante, de manera expresa y tácita, manifestó individualmente su intención de desistirse de la acción instaurada en contra del *PRI*, lo procedente **es sobreseer** el presente asunto respecto de la queja presentada por **María Isabel García Ortega**.

Lo anterior, atendiendo a que el desistimiento constituye un acto procesal, mediante el cual se manifiesta el propósito de abandonar una instancia o de no continuar con la secuela del procedimiento administrativo con motivo del ejercicio de una acción, con la reclamación de un derecho o la realización de cualquier otro trámite

Por tanto, esta autoridad nacional estima procedente **sobreseer** el presente asunto, con fundamento en lo establecido en los artículos 466, párrafo 2, inciso c), de la *LGIPE*, y 46, párrafo 3, fracción III, del *Reglamento de Quejas*, únicamente, por lo que hace a los hechos denunciados por **María Isabel García Ortega**.

A similar conclusión arribó este Consejo General al emitir las resoluciones **INE/CG45/2020** e **INE/CG69/2021**, que resolvieron los procedimientos administrativos sancionadores **UT/SCG/Q/SJVS/JD03/TAM/14/2018** y **UT/SCG/Q/CG/160/2019**, respectivamente.

TERCERO. ESCISIÓN DEL PROCEDIMIENTO RESPECTO A SEBASTIÁN MIGUEL MARTÍNEZ MIRANDA Y ARIZNOE LIZDEBETH ZAZUETA MÁRQUEZ.

Como se indicó en el apartado de antecedentes de la presente resolución, en razón de que **Sebastián Miguel Martínez Miranda y Ariznoe Lizdebeth Zazueta Márquez**, presentaron escritos de desistimiento, se determina la escisión del procedimiento respecto de dichos ciudadanos, para que en resolución diversa, y previos los trámites procesales atinentes, se determine lo que en Derecho corresponda, lo anterior en términos de lo dispuesto en el artículo 13, párrafo 4, del *Reglamento de Quejas* en relación con el artículo 466, párrafo 2, inciso c), de la *LGIPE*.

CUARTO. NORMATIVA ELECTORAL APLICABLE AL CASO

Para la resolución del presente asunto se debe subrayar que, para el caso de **Azalia Francisca Torres Torres** la presunta violación a su derecho de libre afiliación se cometió durante la vigencia del *COFIPE*, pues el registro o afiliación de la quejosa al referido instituto político, de acuerdo con lo informado por la *DEPPP* se realizó el **seis de enero de dos mil seis**, fecha en la cual se encontraba vigente dicho cuerpo normativo.

Por tanto, si al momento de la comisión de la presunta falta se encontraba vigente el *COFIPE*, es claro que este ordenamiento legal debe aplicarse para las cuestiones sustantivas del presente procedimiento en dicho caso, al margen que la falta pudiera haber sido advertida por la denunciante mediante la queja que dio origen al presente asunto, una vez que dicha norma fue abrogada por la *LGIPE*.

Respecto a **Griselda Ortiz Ortiz** si bien no se cuenta con datos precisos que permitan determinar su fecha de afiliación, de lo informado por la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos se desprende que el registro de dicha ciudadana fue capturado con anterioridad a la entrada en vigor de los abrogados “Lineamientos para la verificación del padrón de afiliados de los Partidos Políticos Nacionales para la conservación de su registro”; es decir, antes del trece de septiembre de dos mil doce. Por tanto, en dicho caso se tomará como fecha de afiliación el doce de septiembre de dos mil doce.

Lo anterior es así puesto que esta autoridad solo tiene esa fecha —13 de septiembre de 2012— como único dato cierto que puede ser tomado en consideración para estimar la fecha de afiliación, resultando aplicable, *mutatis mutandi* lo resuelto por la *Sala Superior* al resolver el SUP-RAP-18/2018, a través del cual se determinó confirmar el acuerdo INE/CG30/2018, en específico, en lo relativo a la consideración que adujo este Instituto de tomar como fecha de afiliación indebida, en ese caso, la de la presentación de la denuncia, el cual, era el único dato certero con que contaba esta autoridad en ese asunto y con lo cual, de acuerdo con lo resuelto por el máximo órgano jurisdiccional en materia electoral, se dotó de certeza y objetividad a la resolución de este Consejo General.

En tal sentido, para el análisis de la eventual infracción que se atribuye al *PRI*, la legislación comicial sustantiva aplicable para el caso en concreto será el *COFIPE*.

Por otra parte, en cuanto a **Madison Monserrat Álvarez Romo, Selene Guadalupe López Sanz, Aldryn Chamu Márquez, Onivia Mateo Rodríguez, Omar Alejandro Cervantes Alcalá, María Antonia Guerrero Ramírez, Esmirna Sumukey Hernández Medina, Ángel Jair Macías Padilla, Zaira Brigitt Bernal Arellano, Aracely Castillo Hernández, América Crispín Martínez, Brenda Yadira Muñoz Galindo, Griselda Malváez García e Irving Adán Popoca Guzmán**, quienes de conformidad con la información proporcionada por la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Político de este Instituto, fueron afiliados con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, será aplicable dicha normatividad.

Finalmente, será la *LGIPE* y el *Reglamento de Quejas* la normativa aplicable para cuestiones procesales y/o adjetivas.

QUINTO. EFECTOS DEL ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL INE/CG33/2019

Para los efectos de la resolución del asunto que nos ocupa, y con el propósito de conocer las razones que subyacen a la problemática de las indebidas afiliaciones cometidas por los partidos políticos en perjuicio del derecho político electoral de libre afiliación, es necesario mencionar que el veintitrés de enero de dos mil diecinueve, este *Consejo General* aprobó el acuerdo INE/CG33/2019, por el que se implementó un procedimiento para la revisión, actualización y sistematización de los padrones de los partidos políticos nacionales.

Las razones que motivaron la suscripción del mencionado acuerdo fueron las siguientes:

- 1) La imposición de sanciones económicas que se venían aplicando a los partidos políticos por la transgresión al derecho de libre afiliación política fue insuficiente para inhibir esta conducta.
- 2) Los partidos políticos reconocieron la necesidad de iniciar un procedimiento de regularización de sus padrones de afiliados, ya que éstos se conformaban sin el respaldo de la información comprobatoria de la voluntad ciudadana.
- 3) La revisión que el *INE* hizo a los padrones de las y los militantes de los partidos políticos nacionales en dos mil catorce y dos mil diecisiete, se circunscribió a verificar su número mínimo de afiliadas y afiliados para la conservación de su registro y a vigilar que no existiese doble afiliación, a partidos políticos con registro o en formación.

4) Dicha verificación no tuvo como propósito revisar que los partidos políticos efectivamente contasen con el documento comprobatorio de la afiliación de las y los ciudadanos en términos de lo previsto en su normativa interna.

Así, esta autoridad electoral nacional, con la finalidad de dar una solución integral al problema generalizado respecto de la correcta afiliación y desafiliación, y al mismo tiempo garantizar a la ciudadanía el pleno ejercicio de su derecho a la libre afiliación, así como fortalecer el sistema de partidos, estimó necesario implementar, de manera excepcional, un procedimiento para garantizar que, en un breve período, sólo se encuentren inscritas las personas que de manera libre y voluntaria hayan solicitado su afiliación, y respecto de las cuales se cuente con alguno de los documentos que avalen su decisión.

El proceso de actualización se concibió obligatorio y permanente, lo cual es indispensable y necesario para el sano desarrollo del régimen democrático de nuestro país.

Para alcanzar el objetivo propuesto en dicho acuerdo, se estableció una suspensión temporal en la resolución de los procedimientos ordinarios sancionadores, con las excepciones siguientes:

- Aquellos supuestos en los que se actualizara la caducidad de la potestad sancionadora de la autoridad administrativa electoral; o bien,
- Porque se encontraran en la hipótesis de cumplimiento a una ejecutoria dictada por alguna de las Salas que integran el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Asimismo, previó una serie de actividades y obligaciones para los partidos políticos, que debían ser ejecutadas en el plazo comprendido entre el uno de febrero de dos mil diecinueve al treinta y uno de enero de dos mil veinte, y cuyo incumplimiento tendría como efecto anular la suspensión de la resolución de los procedimientos e imponer las sanciones atinentes.

En este sentido, debe destacarse que durante la vigencia del referido acuerdo, se procedió a eliminar de los padrones de militantes el registro de todas y cada una de las personas denunciantes en los procedimientos, tanto en el Sistema de Verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos de la *DEPPP*, como de

sus portales de internet y/o cualquier otra base pública en que pudieran encontrarse, logrando eliminar el registro de más de 9 millones de personas.

Cabe señalar, que los padrones de afiliadas y afiliados son bases de datos variables debido a los movimientos de altas y bajas que llevan a cabo todos los días los partidos políticos nacionales; además de ello, el proceso de verificación permanente de que son objeto los padrones, implica que los nuevos registros se compulsen contra el padrón electoral y entre los padrones de los partidos políticos con registro vigente y en proceso de constitución, para determinar si serán registros válidos, sujetos de aclaración o definitivamente descartados.

En ese sentido, de conformidad con los elementos con que cuenta este *Consejo General* al momento de resolver el presente asunto, es válido concluir que la revisión y seguimiento en el desahogo de las etapas supervisadas de manera particular y puntual por esta autoridad, así como la actitud activa de los partidos políticos en el desarrollo de sus actividades y obligaciones, permitió alcanzar el propósito perseguido con el acuerdo INE/CG33/2019, esto es, atender la problemática de raíz hasta entonces advertida y depurar los padrones de afiliados de los partidos políticos, garantizando con ello el ejercicio del derecho de libertad de afiliación en beneficio de la ciudadanía.

SEXTO. ESTUDIO DE FONDO

1. EXCEPCIONES Y DEFENSAS

Dentro de la etapa de emplazamiento y durante la etapa de alegatos, el *PRI*, por conducto de su representante ante el *Consejo General*, manifestó, lo siguiente:

1. Indica que los quejosos intentan hacer valer sus argumentos basándose únicamente en su dicho y que dicho instituto político ha sido la única parte en presentar pruebas contundentes de la voluntad expresa de las y los quejosos por ejercer su derecho de libre afiliación a favor del Partido Revolucionario Institucional.
2. Realiza las siguientes aclaraciones:
 - Respecto a los procedimientos iniciados por la CC. América Crispín Martínez y Griselda Malváez García señala que en el expediente consta que el Partido Revolucionario Institucional capturó los registros de las quejosas en dos ocasiones, mismos que posteriormente fueron cancelados.

- Señala que de lo anterior se desprende la existencia de registros de afiliación doble, es decir, con dos fechas de afiliación y cancelación, precisando lo siguiente:
 - No obstante, posterior a su baja y cancelación por el citado acuerdo, dicho instituto político recibió de la ciudadana su intención de ser afiliada al PRI, razón por la cual el registro que esa Coordinación (sic) reconoce que es la afiliación de fecha veinticinco de marzo de dos mil veinte (25/03/2020).
 - De las CC. América Crispín Martínez y Griselda Malvárez García el doble registro es consecuencia de la obtención del refrendo de militancia, situación por la cual al ingresar los datos en el Sistema de Verificación del Padrón de Partidos Políticos se ingresaron con la fecha de levantamiento del registro de refrendo.
3. Señala que el argumento que las y los quejosos intentan hacer valer se basa únicamente en su dicho, desconociendo su participación en dicho instituto político.
 4. Refiere que en ningún momento ofrecen pruebas contundentes que demuestren su afiliación indebida de la que supuestamente son partes, por lo que resultan infundadas sus alegaciones.
 5. En aras de salvaguardar el derecho humano a la libre asociación de todos los ciudadanos, se procedió a realizar las gestiones tendientes para reintegrar o en su caso restituir los derechos de los ciudadanos, lo que corrobora la buena fe con que el *PRI* se ha desempeñado.

Ahora bien, por cuestión de método y debido a que las excepciones y defensas guardan estrecha vinculación con el análisis necesario para dilucidar la controversia, se atenderán en el fondo del presente asunto.

2. FIJACIÓN DE LA MATERIA DEL PROCEDIMIENTO

La materia en el presente procedimiento se constriñe a determinar si el *PRI* vulneró el derecho de libertad de afiliación en su vertiente positiva —indebida afiliación— de **Madison Monserrat Álvarez Romo, Selene Guadalupe López Sanz, Aldryn Chamú Márquez, Onivia Mateo Rodríguez, Omar Alejandro Cervantes Alcalá, María Antonia Guerrero Ramírez, Azalia Francisca Torres Torres, Esmirna**

Sumukey Hernández Medina, Ángel Jair Macías Padilla, Griselda Ortiz Ortiz, Zaira Brigitt Bernal Arellano, Aracely Castillo Hernández, América Crispín Martínez, Brenda Yadira Muñoz Galindo, Griselda Malvaez García e Irving Adán Popoca Guzmán, haciendo para ello uso ilegítimo de su información personal, en contravención a lo dispuesto en los artículos 6, apartado A, fracción II; 16, párrafo segundo; 35, fracción III, y 41, Base I, párrafo segundo, de la *Constitución*; 5, párrafo 1; 38, párrafo 1, incisos a), e), t) y u); 44, párrafo 2; 342, párrafo 1, incisos a) y n), del *COFIPE*; disposiciones que se encuentran replicadas en el diverso dispositivo 443, párrafo 1, incisos a) y n), de la *LGIFE*; 2, párrafo 1, inciso b), y 25, párrafo 1, incisos a), e) e y) de la *LGPP*.

3. MARCO NORMATIVO

A) Constitución, tratados internacionales y ley

A efecto de determinar lo conducente respecto a la conducta en estudio, es necesario tener presente la legislación que regula los procedimientos de afiliación de los ciudadanos a los partidos políticos, específicamente por lo que respecta al denunciado, así como las normas relativas al uso y la protección de los datos personales de los particulares.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo 6

...

Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo se observará lo siguiente:

A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases:

...

II. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.

...

Artículo 16.

...

Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de

seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros.

...

Artículo 35. *Son derechos del ciudadano:*

...

III. Asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país;

...

Artículo 41.

...

I.

...

Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, así como las reglas para garantizar la paridad entre los géneros, en candidaturas a legisladores federales y locales. Sólo los ciudadanos podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos; por tanto, quedan prohibidas la intervención de organizaciones gremiales o con objeto social diferente en la creación de partidos y cualquier forma de afiliación corporativa.

El derecho de asociación en materia político-electoral que la *Sala Superior* ha considerado se trata de un **derecho fundamental**, consagrado en el artículo 35, fracción III, de la *Constitución*, propicia el pluralismo político y la participación de la ciudadanía en la formación del gobierno.

En efecto, la libertad de asociación, que subyace en ese derecho, constituye una condición fundamental de todo Estado constitucional democrático de derecho, pues sin la existencia de este derecho fundamental o la falta de garantías constitucionales que lo tutelen, no solo se impediría la formación de partidos y agrupaciones políticas de diversos signos ideológicos, sino que el mismo principio constitucional de sufragio universal, establecido en forma expresa en el artículo 41, fracción I, párrafo segundo, de la *Constitución Federal*, quedaría socavado; por lo tanto, el derecho de asociación en materia político-electoral es la base de la formación de los partidos y agrupaciones políticas.

De esta forma, todo ciudadano mexicano tiene derecho de asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país; específicamente, es potestad de los ciudadanos mexicanos constituir partidos políticos o afiliarse libre e individualmente a ellos, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 9; 35, fracción III; 41, fracciones I, párrafo segundo, *in fine*, y IV; y 99, fracción V, de la *Constitución*.

El ejercicio de la libertad de asociación en materia política prevista en el artículo 9o. constitucional está sujeta a varias limitaciones y una condicionante: las primeras están dadas por el hecho de que su ejercicio sea pacífico y con un objeto lícito, mientras que la última circunscribe su realización a que los sujetos que tengan la calidad de ciudadanos mexicanos, lo cual es acorde con lo previsto en el artículo 33 de la *Constitución*.

Asimismo, si el ejercicio de esa libertad política se realiza a través de los partidos políticos, debe cumplirse con las formas específicas que se regulen legalmente para permitir su intervención en el Proceso Electoral.

En este tenor, el derecho de afiliación político-electoral establecido en el artículo 41, Base I, párrafo segundo, *in fine*, de la *Constitución*, es un derecho fundamental con un contenido normativo más específico que el derecho de asociación en materia política, ya que se refiere expresamente a la prerrogativa de los ciudadanos mexicanos para asociarse libre e individualmente a los partidos políticos; y si bien el derecho de afiliación libre e individual a los partidos podría considerarse como un simple desarrollo del derecho de asociación en materia política, lo cierto es que el derecho de afiliación —en el contexto de un sistema constitucional de partidos como el establecido en el citado artículo 41 constitucional— se ha configurado como un derecho básico con caracteres propios.

Cabe señalar, además, que el derecho de afiliación comprende no sólo la potestad de formar parte de los partidos políticos y de las asociaciones políticas, sino también de conservar o ratificar su afiliación o, incluso, desafiliarse. Del mismo modo, la libertad de afiliación no es un derecho absoluto, ya que su ejercicio está sujeto a una condicionante consistente en que sólo los ciudadanos mexicanos podrán afiliarse libre e individualmente a los partidos políticos. Igualmente, si el ejercicio de la libertad de afiliación se realiza a través de los institutos políticos, debe cumplirse con las formas específicas reguladas por el legislador para permitir su intervención en el Proceso Electoral.

Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 24/2002 emitida por el *Tribunal Electoral*, de rubro **DERECHO DE AFILIACIÓN EN MATERIA POLÍTICO-ELECTORAL. CONTENIDO Y ALCANCES.**¹⁰³

Conviene tener presente que la afiliación libre e individual a los partidos políticos fue elevada a rango constitucional mediante la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación de veintidós de agosto de mil novecientos noventa y seis, cuando se estableció que los partidos políticos, en tanto organizaciones de ciudadanos, tienen como fin hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo a los programas, principios e idearios que postulan; y que únicamente los ciudadanos pueden afiliarse a los institutos políticos, libre e individualmente.

Esta reforma, conforme al contenido de la exposición de motivos correspondiente,¹⁰⁴ tuvo como propósito proteger el derecho constitucional de los mexicanos a la libre afiliación a partidos y asociaciones políticas, garantizando que se ejerza en un ámbito de libertad plena y mediante la decisión voluntaria de cada ciudadano, complementando el artículo 35, fracción III constitucional, que ya preveía, desde mil novecientos noventa —reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación de seis de abril del citado año—, como un derecho público subjetivo de los ciudadanos, asociarse para tomar parte en los asuntos políticos del país; disposición que ha permanecido incólume desde entonces en el texto de la Ley Fundamental.

El derecho de libre asociación —para conformar una asociación— y afiliación —para integrarse a una asociación ya conformada—, como derechos políticos electorales, se encuentran consagrados a nivel internacional en diversos instrumentos suscritos por nuestro país, tal es el caso de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana Sobre Derechos Humanos.

En efecto, la Organización de las Naciones Unidas, a través de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de diez de diciembre de mil novecientos cuarenta y ocho, reconoció en su artículo 20, que toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas, y que nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación.

¹⁰³ Consultable en la página: <http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=24/2002&tpoBusqueda=S&sWord=24/2002>

¹⁰⁴ Consultable en la página: https://www.sitios.scjn.gob.mx/constitucion1917-2017/sites/default/files/CPEUM_1917_CC/procLeg/136%20-%2022%20AGO%201996.pdf

En el mismo sentido, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó el dieciséis de diciembre de mil novecientos sesenta y seis, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, mismo que estableció en su artículo 22, que toda persona tiene derecho de asociarse libremente con otras, incluso el derecho a fundar sindicatos y afiliarse a ellos para la protección de sus intereses.

En congruencia con lo anterior, la Organización de Estados Americanos suscribió en San José de Costa Rica —de ahí que se conozca también con el nombre de Pacto de San José—, en noviembre de mil novecientos sesenta y nueve, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, misma que establece en su artículo 16, en lo que al tema interesa, que todas las personas tienen derecho a asociarse libremente con fines ideológicos, religiosos, políticos, económicos, laborales, sociales, culturales, deportivos o de cualquiera otra índole.

Esto es, la tradición jurídica internacional reconoce el derecho fundamental de asociarse libremente y a no ser obligado a formar parte de una colectividad, hace más de siete décadas, y el de formar grupos organizados y permanentes —asociarse— para tomar parte en los asuntos políticos de su nación, hace más de cinco.

No obstante que el derecho de afiliación libre e individual a los partidos políticos se incorporó al texto fundamental en la década de los noventa del siglo pasado, la legislación secundaria, como sucede con la regulación internacional, tiene una larga tradición en la protección de la voluntad libre de los ciudadanos para ser parte de un partido político.

En efecto, la Ley de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales, publicada el cinco de enero de mil novecientos setenta y tres, estableció en su artículo 23, fracción II, numeral 1, incisos a) y b), un mecanismo de certeza encaminado a dar cuenta de que los ciudadanos afiliados a una agrupación política, como precursor de un partido político, habían consentido ser incorporados al respectivo padrón de militantes, como se advierte enseguida:

***“Artículo 23.** Para que una agrupación pueda constituirse y solicitar posteriormente su registro como partido político nacional, en términos del artículo 24 de esta ley, es necesario que satisfaga los siguientes requisitos:*

I...

***II.** Haber celebrado cuando menos en cada una de las dos terceras partes de las entidades de la República, una asamblea en presencia de un juez, notario público o funcionario que haga sus veces quien certificará:*

1. Que fueron exhibidas listas nominales de afiliados de la entidad respectiva, clasificadas por municipios o delegaciones, las que deberán contener:

a. En cada hoja un encabezado impreso cuyo texto exprese que las personas listadas han quedado plenamente enteradas de la declaración de principios, programa de acción y estatutos, y que suscriben el documento como manifestación formal de afiliación, y

b. El nombre y apellidos, domicilio, ocupación, número de credencial permanente de elector y firma de cada afiliado o huella digital en caso de no saber escribir.”

En términos semejantes, la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales promulgada el veintiocho de diciembre de mil novecientos setenta y siete, estableció en su artículo 27, fracción III, inciso a), que, entre otros requisitos a cubrir para que una organización pudiese constituirse como partido político, debía celebrar un determinado número de asambleas distritales o estatales, en las que un Juez Municipal, de Primera Instancia o de Distrito; notario público o funcionario acreditado por la entonces Comisión Federal Electoral, certificara que los afiliados que asistieron, aprobaron los documentos básicos respectivos y suscribieron el documento de manifestación formal de afiliación.

Esta línea fue continuada por el Código Federal Electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de febrero de mil novecientos ochenta y siete, mismo que también contemplaba en su artículo 34, fracción II, que era un requisito para constituirse como partido político nacional, haber celebrado el número de asambleas en cada una de las entidades federativas o distritos electorales previsto en dicha norma, en las cuales un notario o servidor público autorizado, certificara que los afiliados, además de haber aprobado la declaración de principios, programa de acción y los estatutos, suscribieron el documento de manifestación formal de afiliación.

En esta línea de tiempo, es pertinente destacar el *COFIPE* de mil novecientos noventa.

Dicha norma, para el caso que nos ocupa, guarda una importancia singular, puesto que, en ella, por primera vez, se previó, de manera expresa, lo siguiente:

- Que es derecho de los ciudadanos mexicanos constituir partidos políticos nacionales y agrupaciones políticas y afiliarse a ellos individual y libremente, en su artículo 5, párrafo 1;
- Que los estatutos de los institutos políticos establecerán, entre otras cuestiones, los procedimientos para la afiliación individual, libre y pacífica de sus miembros, en su artículo 27, párrafo 1, inciso b);
- Que era obligación de los partidos políticos nacionales, cumplir sus normas de afiliación, ello en el artículo 38, párrafo 1, inciso e), y
- Que los partidos y agrupaciones políticas podían ser sancionados con amonestación pública, multa de 50 a 5 mil días de salario mínimo, reducción de hasta el 50% de las ministraciones del financiamiento público que les correspondiera, la supresión total de la entrega de las ministraciones del financiamiento, la suspensión de su registro como partido o agrupación política, e incluso con la cancelación de su registro, entre otros supuestos, cuando incumplieran con las obligaciones señaladas en el artículo 38 antes mencionado.

Por otro lado, conviene dejar establecido que este mismo *Código*, en su artículo 38, párrafo 1, inciso c), establecía, como lo hace ahora la *LGIPE*, que es obligación de los partidos políticos nacionales mantener el mínimo de afiliados en las entidades federativas o distritos electorales, requeridos para su constitución y registro.

B) Lineamientos para la verificación de afiliados

En congruencia con lo anterior, para llevar a cabo la verificación del padrón de afiliados de los partidos políticos, la autoridad electoral nacional, el trece de septiembre de dos mil doce, emitió el Acuerdo del *Consejo General* del *IFE* por el que, en acatamiento a la sentencia emitida por la *H. Sala Superior* en el expediente **SUP-RAP-570/2011**, se aprueban los Lineamientos para la verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos Nacionales para la conservación de su Registro (**CG617/2012**).

De ahí que la *DERFE* y la *DEPPP*, en el año de dos mil catorce, iniciaron un procedimiento de verificación de los padrones de afiliados de los partidos políticos nacionales, con la finalidad de comprobar si los mismos contaban con el mínimo de adeptos en las entidades federativas o distritos electorales requeridos para su constitución y registro.

Así, de las disposiciones contenidas en los lineamientos mencionados, se obtienen las siguientes conclusiones respecto al procedimiento para la verificación del padrón de los partidos políticos nacionales:

- La *DEPPP* (en coordinación con la Unidad de Servicios de Informática y la *DERFE*), desarrollará un sistema de cómputo, en el cual los partidos políticos nacionales deben realizar la captura de los datos mínimos y actuales de todos sus afiliados.
- La *DEPPP* informará mediante oficio a la *DERFE* que el padrón de afiliados del partido político que corresponda, se encuentra en condiciones de ser verificado.
- La *DERFE* procederá a realizar la verificación conforme a sus lineamientos, obteniendo un Total preliminar de afiliados, el cual deberá entregar a la *DEPPP*.
- Recibidos los resultados de la verificación por parte de la *DEPPP*, deberá remitir a los partidos políticos, las listas en las que se señalen los datos de los afiliados que se encuentren duplicados en dos o más partidos, para que manifiesten lo que a su derecho convenga.
- Recibida la respuesta de los partidos políticos, la *DEPPP* (en coordinación con la *DERFE*), analizará cuáles registros pueden sumarse al Total preliminar de afiliados, para obtener el número Total de afiliados del partido; asimismo, deberán señalar que en aquellos casos en los que se encuentren afiliados a su vez a algún otro partido político con registro, para que puedan ser sumados al Total de afiliados del partido, éste deberá presentar escrito con firma autógrafa del ciudadano, en el que manifieste su deseo de continuar afiliado al partido político que corresponda y renuncia a cualquier otro.
- En caso de que más de un partido político presentara el documento a que se refiere el párrafo que antecede, la *DEPPP*, con el apoyo de las Juntas Locales y Distritales del Instituto, solicitará por oficio al ciudadano en cuestión, que decida cuál es el partido al que desea continuar afiliado, apercibido de que, en caso de no hacerlo, se eliminará del padrón de afiliados de los partidos en los que se encontró registrado.

En torno a ello, es preciso no perder de vista que el propósito central de los lineamientos analizados consistió en regular el procedimiento para determinar si los partidos políticos con registro nacional cuentan o no con el mínimo de afiliados

exigido por la ley para la conservación de su registro, pero en modo alguno constituyen la fuente de la obligación de los partidos políticos para cumplir la normatividad general y la interna de cada uno de ellos, ni mucho menos para respetar el derecho de libre afiliación de los ciudadanos, pues, como se señaló, tal derecho emana de la Constitución, de los instrumentos internacionales y de la ley.

Esto es, los Lineamientos para la verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos Nacionales para la conservación de su Registro, únicamente constituye el instrumento normativo al que se deberán apegar tanto los partidos políticos como las diversas instancias del *INE* involucradas en la verificación del requisito legal para la conservación del registro de los partidos políticos nacionales, que describe las etapas a que se sujetará el procedimiento de verificación y las áreas de responsabilidad de cada uno de los sujetos que intervienen, pero en modo alguno significa que la obligación de los partidos políticos de respetar el derecho de libre afiliación a sus filas encuentre sustento en dicho instrumento, ni mucho menos que dicha obligación haya nacido a la par de los lineamientos mencionados.

Al respecto, si bien tal ordenamiento contiene distintas previsiones en lo referente a la afiliación de los ciudadanos, la responsabilidad de respetar de manera irrestricta la libertad de los ciudadanos de afiliarse, permanecer afiliados, desafiliarse de un partido político, o bien, no pertenecer a ninguno, proviene directamente de la *Constitución*, instrumentos internacionales y del *COFIPE*, cuyas disposiciones son previas a la emisión de dichos lineamientos y de un rango superior, por lo que resultaría impreciso afirmar que previo a la emisión de la norma reglamentaria, los partidos políticos no tenían la carga de obtener y conservar la documentación idónea para poner en evidencia que la afiliación de un determinado ciudadano estuvo precedida de su libre voluntad, como se desarrollará más adelante.

Así, la operación del procedimiento de verificación puede poner al descubierto la afiliación a uno o varios partidos políticos de un ciudadano determinado, quien, de estimarlo pertinente, podrá cuestionar la o las afiliaciones que considere fueron ilegítimas, correspondiendo al partido en cuestión demostrar que, previo a la incorporación del individuo a sus filas, acató las disposiciones de la *Constitución* y la Ley, mediante los documentos donde conste la libre voluntad del ciudadano de ser afiliado al partido político que lo reportó como militante para demostrar que cuenta con los necesarios para conservar su registro.

De lo anterior, es posible advertir que la línea evolutiva que ha seguido el derecho de libre afiliación para tomar parte en los asuntos políticos del país, ha seguido una tendencia encaminada a garantizar, cada vez de mejor manera, que los ciudadanos

gocen de libertad absoluta para decidir su ideario político y, en congruencia con él, determinar si desean o no afiliarse a un partido político, así como abandonarlo o permanecer al margen de todos, pues la regulación respectiva ha transitado desde la publicación de listas de afiliados, a fin de asegurar que los ciudadanos conozcan su situación respecto de un instituto político en particular, hasta la obligación de éstos de comprobar fehacientemente, a través de documentos idóneos y específicos, que la incorporación de una persona al padrón de militantes de un instituto político fue solicitada por el ciudadano, como expresión de su deseo libre de participar activamente, por ese canal, en la vida pública de la nación.

C) Normativa interna del *PRI*

Como se ha mencionado anteriormente, la obligación de los partidos políticos de garantizar el derecho de libre afiliación de sus agremiados, deviene de las propias disposiciones constitucionales, legales y convencionales a que se ha hecho referencia párrafos arriba, por tanto, su cumplimiento, en modo alguno, se encuentra sujeto a las disposiciones internas que cada instituto tiene en su haber normativo.

No obstante, a efecto de tener claridad acerca del proceso que una persona debe llevar a cabo para convertirse en militante del partido político ahora denunciado, se hace necesario analizar la norma interna del *PRI*, para lo cual, enseguida se transcribe la parte conducente de sus Estatutos y su Reglamento de Afiliación, en los términos siguientes:

Estatutos del PRI

Capítulo IV ***De la Integración del Partido***

Artículo 22. *El Partido Revolucionario Institucional está integrado por ciudadanos mexicanos, hombres y mujeres, que se afilien individual y libremente y suscriban los Documentos Básicos del Partido. Los integrantes individuales del Partido podrán incorporarse libremente a las organizaciones de los sectores, organizaciones nacionales y adherentes.*

Sección 1. De las personas afiliadas.

Artículo 23. *El Partido establece entre sus integrantes las siguientes categorías, conforme a las actividades y las responsabilidades que desarrollen:*

I. Miembros, a las personas ciudadanas, hombres y mujeres, en pleno goce de sus derechos políticos, afiliados al Partido;

II. Militantes, a las y los afiliados que desempeñen en forma sistemática y reglamentada las obligaciones partidarias;

...

Artículo 24. *Independientemente de las categorías a que hace referencia el artículo anterior, el Partido reconoce como simpatizantes a las personas ciudadanas no afiliadas que se interesan y participan en sus programas y actividades.*

Las y los simpatizantes tendrán los siguientes derechos:

I. Solicitar su afiliación como miembros del Partido;

II. Participar de los beneficios sociales, culturales y recreativos derivados de los programas del Partido;

III. Ejercer su derecho a voto, por las y los candidatos o dirigentes del Partido, cuando las convocatorias respectivas así lo consideren; y

IV. Aquéllos que le reconozcan la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados de derechos humanos de los que sea parte el Estado mexicano.

...

Capítulo V

De los Mecanismos de Afiliación

Artículo 56. *Podrán afiliarse al Partido Revolucionario Institucional los hombres y las mujeres con ciudadanía mexicana, que personal, pacífica, libre e individualmente, y en los términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la legislación electoral vigente y estos Estatutos, expresen su voluntad de integrarse al Partido, comprometiéndose con su ideología y haciendo suyos los Documentos Básicos.*

Artículo 57. *La persona que desee afiliarse al Partido podrá hacerlo ante el Comité Seccional, el Comité Municipal o el Comité de la demarcación territorial en el caso de la Ciudad de México, que correspondan a su domicilio. También podrá hacerlo ante el Comité Directivo de la entidad federativa donde resida, o ante el Comité Ejecutivo Nacional. De igual forma podrá afiliarse en los módulos itinerantes o temporales que se establezcan. La instancia del Partido que reciba la afiliación lo notificará al órgano superior competente para la inclusión del nuevo miembro en el Registro Partidario y, en su caso, referirá a la afiliada o el afiliado al Comité Seccional de su domicilio, como ámbito para el desarrollo de sus actividades políticas y electorales.*

El Partido establecerá el servicio de reafiliación en su página electrónica, que el solicitante deberá completar en cualquiera de los Comités referidos en el párrafo anterior.

Una vez cumplido lo anterior, el Partido otorgará la credencial y documento que acredite su afiliación.

Tratándose de la reafiliación de quienes hayan salido del Partido en forma voluntaria o de afiliación al mismo de quien provenga de otro partido político, se seguirá el procedimiento previsto por el Código de Ética Partidaria.

La dirigencia del Partido, en todos sus niveles, mantendrá programas permanentes de afiliación y credencialización.

Artículo 93. La Secretaría de Organización, tendrá las atribuciones siguientes:

VII. Formular y promover los programas nacionales de afiliación individual de militantes;

Reglamento para la Afiliación y del Registro Partidario

“Artículo 4. En materia de Afiliación y Registro Partidario los Comités Directivos Estatales, las organizaciones nacionales y las adherentes del Partido, la Fundación Colosio A.C., el Instituto de Capacitación y Desarrollo Político A. C., y el Movimiento PRI.mx, entregarán todos los archivos e información a la Secretaría de Organización del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional, misma que será validada por ésta, a través de la instancia correspondiente debiendo integrar y organizar dicha información a efecto de constituir y mantener actualizado el Registro Partidario.

Artículo 5. Para los efectos de este Reglamento, se entenderá por:

...

Militantes, a los afiliados que desempeñen en forma sistemática y reglamentada las obligaciones partidarias.

...

Ciudadano Solicitante, a cualquier ciudadano mexicano en pleno goce de sus derechos político electorales, que cuente con credencial para votar vigente expedida por el Instituto Federal Electoral y que solicite de manera voluntaria individual y personal su afiliación al Partido en los términos de este Reglamento.

Capítulo I

De los procedimientos de afiliación

Artículo 11.- *Podrán afiliarse al Partido Revolucionario Institucional los ciudadanos mexicanos, hombres y mujeres, que libre, individual, personal y pacíficamente, en los términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la legislación electoral vigente, los Estatutos y el presente Reglamento, expresen su voluntad de integrarse al Partido, comprometiéndose con su ideología y haciendo suyos los documentos básicos del mismo.*

Artículo 12.- *Todo ciudadano que desee afiliarse al Partido, deberá hacerlo ante la sección en cuya demarcación se encuentre el domicilio del solicitante o el Comité Municipal o Delegacional, Estatal o Nacional correspondiente.*

Una vez afiliado, el Partido otorgará el documento que acredite su calidad de miembro y previo pago de cuota de recuperación la credencial de militante de nuestro instituto político a través de los mecanismos que la Secretaría de Organización del Comité Ejecutivo Nacional establezca para este fin.

Artículo 13. *Las Secretarías de Organización Estatales y del Distrito Federal a través de la instancia correspondiente de Afiliación y Registro Partidario serán las responsables del Registro Partidario en su entidad.*

Artículo 14. *Los requisitos y documentos para obtener la afiliación al Partido, son:*

I. De los requisitos:

- a) Ser ciudadano mexicano.*
- b) Expresar su voluntad libre, individual y pacífica de afiliarse al Partido, comprometiéndose con su ideología y haciendo suyos los documentos básicos del mismo.*

II. De los documentos:

- a) Copia simple y original para su cotejo, de la credencial para votar expedida por el Instituto Federal Electoral actualizada.*
- b) Copia simple del comprobante de domicilio, en caso de manifestar domicilio distinto al que aparece en la credencial para votar.*
- c) Formato de afiliación al partido, mismo que deberá ser proporcionado por la instancia correspondiente que conozca de la afiliación.*

Capítulo II

De la afiliación o reafiliación al Partido

Artículo 15. *Las Secretarías de Organización de los Comités Directivos Estatales, del Distrito Federal y Nacional a través de sus instancias correspondientes de Afiliación y Registro Partidario llevarán el control del*

registro de todos y cada uno de los solicitantes de afiliación al Partido. Se llevará un folio consecutivo para las solicitudes de afiliación, que será el mismo en los documentos entregados a los solicitantes y será proporcionado automáticamente por el sistema que contiene la base de datos.

El folio consecutivo que deberá constar en el documento con que se acredita la afiliación del solicitante al Partido, estará conformado por las siglas del Comité Ejecutivo Nacional, seguidas de un guion medio las siglas SO de Secretaría de Organización, seguidas de una diagonal, las letras RP de Registro Partidario, seguidas de un guion medio, la letra de tipología de categoría (M para miembro, MI de militante, C para cuadro o D para dirigente) seguido de una diagonal, el número de la entidad a la que corresponda el registro y deberá ser a dos dígitos seguido de una diagonal, el número del municipio de la entidad a tres dígitos, seguido de una diagonal, el folio consecutivo del registro a nueve dígitos, seguido de una diagonal, el año a cuatro dígitos, seguido de una diagonal, el mes a dos dígitos, seguido de una diagonal y el día de la afiliación a dos dígitos.

Artículo 16. *Se solicitará la afiliación al Partido mediante el formato Único de Afiliación al Registro Partidario que autorice la Secretaría de Organización del Comité Ejecutivo Nacional, o mediante escrito, en español, señalando domicilio para recibir correspondencia con todos los datos contenidos en el artículo 14 del presente Reglamento, manifestando bajo protesta de decir verdad su voluntad de pertenecer al Partido, de suscribirse, cumplir y hacer cumplir los documentos básicos del mismo, sus Estatutos y reglamentos que de éstos emanen, debiendo anexar que no pertenece a otro Partido Político ni que son dirigentes, candidatos o militantes de éstos, o en su caso, acompañar documento idóneo que acredite su renuncia o baja de otros institutos políticos, debiendo llevar el nombre completo y firma autógrafa o huella dactilar en original del ciudadano solicitante.*

...

Capítulo I **Del acceso a la información del Registro Partidario**

“Artículo 41. *La información contenida en el Registro Partidario no podrá ser utilizada para otro fin que el establecido en los Estatutos del Partido, sus documentos básicos y reglamentos expedidos por el Consejo Político Nacional.*

Los órganos partidarios podrán solicitar la información, cuando se requiera en los términos de los ordenamientos antes descritos. La información que sea requerida en términos distintos a los señalados, será atendida de acuerdo a las disposiciones del Partido en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

En caso de que la solicitud de información sobre el registro partidario que sea formulada por militantes o ciudadanos deberá ser tramitada de conformidad con lo dispuesto por el Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Partido Revolucionario Institucional.

Artículo 42. *Los interesados, por sí mismos o por medio de sus representantes legales, previa acreditación, tendrán derecho a solicitar el acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos personales contenidos en el Registro Partidario, en términos de lo dispuesto por el Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Partido Revolucionario Institucional.”*

...

D) Acuerdo INE/CG33/2019

Ahora bien, resulta importante precisar la determinación que respecto de las afiliaciones y los padrones de militantes de los partidos políticos asumió el órgano máximo de dirección del *INE*, al emitir el Acuerdo registrado con la clave INE/CG33/2019, por el cual se aprobó “*la implementación de manera excepcional de un procedimiento para la revisión, actualización y sistematización de los padrones de afiliadas y afiliados de los Partidos Políticos Nacionales*” ello derivado de la vinculación que tiene con la materia de la probable infracción que se analiza en el procedimiento al rubro indicado.

C O N S I D E R A N D O

...

10. Justificación del Acuerdo.

...

Con la información anterior, tenemos que derivado de la publicación de los padrones de afiliadas y afiliados a los partidos políticos, desde 2014 a la fecha, el INE ha recibido diversas quejas presentadas por la ciudadanía por indebida afiliación en todos y cada uno de los PPN , toda vez que las personas ciudadanas pueden revisar si están o no afiliadas a algún partido político y puede darse el caso de ciudadanas y ciudadanos que, por algún interés particular, se vean afectados al encontrarse registrados como militantes de estos, tal es el caso de las personas interesadas para ser contratadas como Capacitadores Asistentes Electorales o cuando se convoca para ser designados como Consejeras y Consejeros de los Consejos Locales y Distritales del INE, o para integrar los OPLE.

Así, se puede evidenciar que, en distintos periodos, todos y cada uno de los partidos políticos que han tenido registro a nivel nacional, han sido sancionados por indebidas afiliaciones.

Ello evidencia que los padrones de militantes de los PPN no están lo suficientemente actualizados ni sistematizados con la documentación que acredite la afiliación. Lo cual genera que resulten fundados los casos de indebidas afiliaciones, debido a que los partidos políticos no acreditan en forma fehaciente que las y los ciudadanos efectivamente se afiliaron a determinado partido, o bien, porque los partidos políticos no tramitan las renunciaciones que presentan sus afiliadas y afiliados y, por tanto, no los excluyen del padrón de militantes.

Ahora bien, esta autoridad considera que la imposición de sanciones económicas ha sido insuficiente para inhibir la indebida afiliación de personas a los PPN, ya que ésta continúa presentándose. Incluso, los propios PPN reconocen que es necesario iniciar un procedimiento de regularización de sus padrones de afiliación ya que la falta de documentos se debe a diversas circunstancias; es decir, el hecho de que el INE sancione a los PPN no ha servido para solucionar el problema de fondo, que consiste en la falta de rigor en los procedimientos de afiliación y administración de los padrones de militantes de todos los PPN, en tanto que la mayoría de ellos no cuentan con las respectivas cédulas de afiliación.

...

Así las cosas, con la finalidad de atender el problema de fondo y al mismo tiempo garantizar a la ciudadanía el pleno ejercicio de su derecho a la libre afiliación, aunado a que en el mes de enero de dos mil diecinueve inició el procedimiento para la constitución de nuevos PPN (lo que implica que la o el ciudadano que aparece registrado como militante de algún PPN, no puede apoyar la constitución de algún nuevo partido) y en aras de proteger el derecho de libre afiliación de la ciudadanía en general, la que milita y la que no y fortalecer el sistema de partidos, **se estima necesario aprobar la implementación de manera excepcional de un procedimiento de revisión, actualización y sistematización de los padrones de militantes de los PPN que garantice que, en un breve período, solamente aparezcan en éstos las y los ciudadanos que en realidad hayan solicitado su afiliación, y respecto de los cuales se cuente con alguno de los documentos referidos en el considerando 12, numeral 3. En el entendido de que el proceso de actualización debe ser obligatorio y permanente conforme a los Lineamientos referidos en los Antecedentes I y II.**

Con ello, no sólo se protegen y garantizan los derechos político electorales de las personas, sino se fortalece el sistema de partidos, el cual es indispensable y necesario para el sano desarrollo del régimen democrático de nuestro país.

...

ACUERDO

PRIMERO. *Se ordena el inicio del procedimiento de revisión, actualización y sistematización de los padrones de las personas afiliadas a los PPN, el cual tendrá vigencia del uno de febrero de dos mil diecinueve al treinta y uno de enero de dos mil veinte, y se aprueba el Formato para solicitar la baja del padrón de militantes del PPN que corresponda, mismo que forma parte integral del presente Acuerdo como Anexo Único.*

SEGUNDO. *Las Direcciones Ejecutivas del Registro Federal de Electores y de Prerrogativas y Partidos Políticos llevarán a cabo los trabajos necesarios y pertinentes que permitan implementar el servicio a la ciudadanía de solicitar su baja del padrón de afiliadas y afiliados a un PPN, en cualquier oficina de este Instituto.*

TERCERO. *Los PPN darán de baja definitiva de manera inmediata de su padrón de militantes los nombres de aquellas personas que, antes de la aprobación de este Acuerdo, hayan presentado quejas por indebida afiliación o por renunciadas que no hubieran tramitado. En el caso de las quejas por los supuestos antes referidos que se lleguen a presentar con posterioridad a la aprobación de este Acuerdo, los PPN tendrán un plazo de 10 días contado a partir del día siguiente de aquel en el que la UTCE les haga de su conocimiento que se interpuso ésta, para dar de baja de forma definitiva a la persona que presente la queja.*

CUARTO. *Los PPN deberán cancelar el registro de las y los ciudadanos que hubieren presentado la solicitud de baja del padrón, con independencia de que cuenten o no con el documento que acredite la afiliación, para garantizar el cumplimiento de la última voluntad manifestada.*

QUINTO. *Los PPN cancelarán los registros de aquellas personas respecto de las cuales no cuenten con la cédula de afiliación, refrendo o actualización una vez concluida la etapa de ratificación de voluntad de la ciudadanía. La baja no podrá darse en contra de la voluntad de la o el afiliado.*

[Énfasis añadido]

E) Protección de datos personales

De los artículos 6o., Apartado A, fracción II, y 16, párrafo segundo, de la Constitución, se desprende el derecho de toda persona, a que en nuestro país se proteja su información privada y sus datos personales, y de igual manera, a manifestar su oposición a la utilización no autorizada de su información personal.

Lo anterior, se robustece con el criterio sostenido por la *Sala Superior*, al resolver el recurso de apelación identificado con la clave SUP-RAP-141/2018, en el que determinó, entre otras cuestiones, lo siguiente:

“...los datos personales de los militantes de los partidos políticos se consideran públicos si son precedidos de la voluntad del ciudadano para afiliarse; por tanto, si es deseo de un ciudadano pertenecer a un partido político, no puede alegar que existe uso indebido de sus datos personales porque se consideran públicos.

En cambio, si no existe una libre y voluntaria afiliación del ciudadano de pertenecer al partido político, el uso de datos personales al integrar el padrón de militantes es indebido, porque la información ahí contenida deja de ser pública respecto de quienes no tenían ese deseo de afiliarse al partido y, se insiste, aparecer en un padrón al cual no deseaban pertenecer....”

Así, de lo transcrito, se obtiene medularmente lo siguiente:

- El derecho de afiliación en materia política-electoral consiste, fundamentalmente, en la prerrogativa de los ciudadanos mexicanos para decidir libre e individualmente si desean formar parte de los partidos y agrupaciones políticas.
- Afiliado o Militante es el ciudadano que libre, voluntaria e individualmente, acude a un partido político para solicitar su incorporación al padrón de militantes respectivo, a través de los documentos aprobados por los órganos partidistas correspondientes.
- Al *PRI* podrán afiliarse los ciudadanos mexicanos, hombres y mujeres, que, libre, individual, personal y pacíficamente, en los términos de la *Constitución* expresen su voluntad de integrarse al partido.
- Todo ciudadano que desee afiliarse al Partido, deberá hacerlo mediante el formato de afiliación correspondiente, ante la sección en cuya demarcación se encuentre el domicilio del solicitante o el Comité Municipal o Delegacional, Estatal o Nacional correspondiente.

- La información que sea requerida en términos distintos a los señalados en su normativa interna, será atendida de acuerdo a las disposiciones del Partido en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
- La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.
- Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y a su cancelación, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger derechos de terceros.
- Los partidos políticos, como sujetos obligados por la ley, deberán contemplar en sus Estatutos la forma de garantizar la protección de los datos personales de sus militantes, así como los derechos al acceso, rectificación, cancelación y oposición de estos.
- Ante la problemática advertida por esta autoridad electoral nacional, respecto de la falta de actualización y depuración de la documentación soporte que avalen las afiliaciones ciudadanas a los partidos políticos, este Consejo General, emitió el Acuerdo INE/CG33/2019, por el cual instauró, de manera excepcional, un procedimiento de revisión, actualización y sistematización de los padrones de militantes de los Partidos Políticos Nacionales, para garantizar que únicamente aparezcan en éstos las y los ciudadanos que en realidad hayan solicitado su afiliación.

4. CARGA Y ESTÁNDAR PROBATORIO SOBRE INDEBIDA AFILIACIÓN A UN PARTIDO POLÍTICO

De conformidad con lo expuesto en el punto inmediato anterior, es válido concluir que cuando una persona pretenda, libre y voluntariamente, ser registrada como militante de un partido político, por regla general debe acudir a las instancias partidistas competentes, suscribir una solicitud de afiliación y proporcionar la información necesaria para su afiliación, a fin de ser registrada en el padrón respectivo.

En consecuencia, por regla general, los partidos políticos (en el caso el *PRI*), tienen la carga de conservar y resguardar, con el debido cuidado, los elementos o la documentación en la cual conste que la o el ciudadano en cuestión acudió a solicitar su afiliación y que la misma fue libre y voluntaria, puesto que —se insiste— le corresponde la verificación de dichos requisitos y, por tanto, el resguardo de las constancias atinentes, a fin de proteger, garantizar y tutelar el ejercicio de ese derecho fundamental y, en su caso, probar que las personas afiliadas al mismo cumplieron con los requisitos constitucionales, legales y partidarios.

Esta conclusión es armónica con la obligación de mantener el mínimo de militantes requerido por las leyes para su constitución y registro, de acuerdo con lo establecido en el artículo 38, párrafo 1, inciso c), del *COFIPE*, precepto que, derivado de la reforma constitucional en materia política electoral de diez de febrero de dos mil catorce, se reproduce en el diverso 25, párrafo 1, inciso c), de la *LGPP*.

En suma, los partidos políticos, en tanto entidades de interés público que sirven de vehículo para el acceso de la ciudadanía al poder y espacio para el ejercicio del derecho humano de afiliación en materia política-electoral, están compelidos a respetar, proteger y garantizar el ejercicio de ese derecho fundamental, para lo cual deben verificar y revisar, en todo momento, que la afiliación se realiza de manera libre, voluntaria y personal y, consecuentemente, conservar y resguardar los elementos o documentación en donde conste esa situación, a fin de estar en condiciones de probar ese hecho y de cumplir con sus obligaciones legales en materia de constitución y registro partidario.

Por tanto, es dable sostener que, en principio, corresponde al partido político demostrar que sus militantes y afiliados manifestaron su consentimiento, libre y voluntario para formar parte de su padrón, a través de los documentos y constancias respectivas que son los medios de prueba idóneos para ese fin, y que además los titulares de los datos personales le proporcionaron los mismos para esa finalidad, incluso tratándose de aquellas afiliaciones realizadas con anterioridad a la entrada en vigor de cualquier instrumento administrativo, emitido con el objeto de verificar la obligación de mantener el mínimo de militantes requerido por las leyes para conservar su registro, porque, se insiste:

- El derecho humano de libre afiliación política está previsto y reconocido en la *Constitución*, tratados internacionales y leyes secundarias, desde décadas atrás y tienen un rango superior a cualquier instrumento administrativo.

- Los partidos políticos sirven de espacio para el ejercicio de este derecho fundamental y, consecuentemente, a éstos corresponde demostrar que las personas que lo integran fue producto de una decisión individual, libre y voluntaria.
- La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.
- Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y a su cancelación, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger derechos de terceros.
- La emisión y operación de Lineamientos para la verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos Nacionales tiene como objeto principal revisar el mantenimiento de un número mínimo de afiliados que exige la ley, pero no es un instrumento del que nazca la obligación de los partidos políticos de garantizar la libre afiliación, ni mucho menos para marcar el tiempo a partir del cual los institutos políticos deben conservar los elementos para demostrar lo anterior.

Esta conclusión es acorde con lo sostenido por la *Sala Superior*, al resolver el expediente SUP-RAP-107/2017,¹⁰⁵ donde estableció que la presunción de inocencia es un principio que debe observarse en los procedimientos sancionadores, conforme a su Tesis de Jurisprudencia **21/2013**, de rubro **PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE OBSERVARSE EN LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES ELECTORALES**,¹⁰⁶ el cual tiene distintas vertientes, entre las que destacan, por su trascendencia para el caso que nos ocupa, como regla probatoria¹⁰⁷ y como estándar probatorio.¹⁰⁸

¹⁰⁵ Consultable en la página de internet del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, o bien en la dirección electrónica: http://www.te.gob.mx/Informacion_judiccial/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-0107-2017.pdf

¹⁰⁶ Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 6, Número 13, 2013, páginas 59 y 60.

¹⁰⁷ Tesis de Jurisprudencia: “**PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO REGLA PROBATORIA**”. 10ª Época; Primera Sala, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Libro 5, abril de 2014, Tomo I, página 478, número de registro 2006093.

¹⁰⁸ Véase la Tesis de jurisprudencia de rubro: “**PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO ESTÁNDAR DE PRUEBA**”. 10ª Época; Primera Sala, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Libro 5, abril de 2014, Tomo I, página 476, número de registro 2006091. Véase la nota 35.

En el primer aspecto —**regla probatoria**— implica destacadamente quién debe aportar los medios de prueba en un procedimiento de carácter sancionador, esto es, envuelve las reglas referentes a la actividad probatoria, principalmente las correspondientes a la carga de la prueba, a la validez de los medios de convicción y a la valoración de pruebas.

En el segundo matiz —**estándar probatorio**— es un criterio para concluir cuándo se ha conseguido la prueba de un hecho, lo que en materia de sanciones se traduce en definir las condiciones que debe reunir la prueba de cargo para considerarse suficiente para condenar.

Al respecto, la sentencia en análisis refiere que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación¹⁰⁹ ha estimado que es posible derrotar la presunción de inocencia cuando las pruebas de cargo desvirtúen la hipótesis de inocencia alegada por el presunto responsable, así como las pruebas de descargo y los indicios que puedan generar una duda razonable sobre la hipótesis de culpabilidad sustentada por la parte acusadora.

Mutatis mutandis, en la materia sancionadora electoral, la *Sala Superior* consideró en la sentencia referida que, para superar la presunción de inocencia, en su vertiente de estándar probatorio, es necesario efectuar un análisis de las probanzas integradas en el expediente a fin de corroborar que:

- La hipótesis de culpabilidad alegada por los denunciante sea capaz de explicar los datos disponibles en el expediente, integrándolos de manera coherente.
- Se refuten las demás hipótesis admisibles de inocencia del acusado.

Así, cuando la acusación del quejoso versa sobre la afiliación indebida a un partido político, por no haber mediado el consentimiento del ciudadano, la acusación implica dos elementos:

- Que existió una afiliación al partido.
- Que no medió la voluntad del ciudadano en el proceso de afiliación.

¹⁰⁹ Véanse las tesis **PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO ESTÁNDAR DE PRUEBA. CONDICIONES PARA ESTIMAR QUE EXISTE PRUEBA DE CARGO SUFICIENTE PARA DESVIRTUARLA, PRESUNCIÓN DE INOCENCIA**, así como **DUDA RAZONABLE. FORMA EN LA QUE DEBE VALORARSE EL MATERIAL PROBATORIO PARA SATISFACER EL ESTÁNDAR DE PRUEBA PARA CONDENAR CUANDO COEXISTEN PRUEBAS DE CARGO Y DE DESCARGO**.

En cuanto al primer aspecto, opera la regla general relativa a que “el que afirma está obligado a probar” misma que, aun cuando no aparece expresa en la ley sustantiva electoral, se obtiene de la aplicación supletoria del artículo 15, párrafo 2, de la *LGSMIME*, con fundamento en el diverso 441 de la *LGIPE*, lo que implica, que el denunciante tiene en principio la carga de justificar que fue afiliado al partido que denuncia.

Respecto al segundo elemento, la prueba directa y que de manera idónea demuestra que una persona está **afiliada voluntariamente** a un partido es la **constancia de inscripción respectiva**, esto es, el documento donde se asienta la expresión manifiesta de que una persona desea pertenecer a un instituto político determinado.

Así, cuando en las quejas que dieron lugar al procedimiento ordinario sancionador una persona alega que **no dio su consentimiento** para pertenecer a un partido, sostiene también que no existe la constancia de afiliación atinente, de manera que la parte denunciante no está obligada a probar un hecho negativo (la ausencia de voluntad) o la inexistencia de una documental, pues en términos de carga de la prueba, no son objeto de demostración los hechos negativos, sino conducen a que quien afirme que la incorporación al padrón de militantes estuvo precedida de la manifestación de voluntad de la o del ciudadano, demuestre su dicho.

Esto es, la presunción de inocencia no libera al denunciado de la carga de presentar los medios de convicción idóneos para evidenciar la verdad de sus afirmaciones y, consecuentemente, desvirtuar la hipótesis de culpabilidad, sino que lo constriñe a demostrar que la solicitud de ingreso al partido **fue voluntaria**, debiendo acompañar, por ejemplo, la constancia de afiliación respectiva, si desea evitar alguna responsabilidad.

De esta forma, la Sala Superior sostuvo que si el partido denunciado alega que la afiliación se llevó a cabo previo consentimiento de la persona denunciante, será ineficaz cualquier alegato en el sentido de que no tiene el deber de presentar las pruebas que justifiquen su dicho, sobre la base de que no tenía obligación legal de archivar o conservar las documentales correspondientes, pues, por una parte, las cargas probatorias son independientes de otros deberes legales que no guardan relación con el juicio o procedimiento respectivo; y por otra, la ausencia de un deber legal de archivar o resguardar las constancias de afiliación de militantes, no implica que de manera insuperable el partido se encuentre imposibilitado para presentar pruebas que respalden su afirmación.

En efecto, aunque el partido no tuviera el mencionado deber, sí podía contar con la prueba de la afiliación de una persona, teniendo en cuenta que es un documento que respalda el cumplimiento de otros deberes legales, además de que resulta viable probar la afiliación conforme al marco convencional, constitucional y legal concerniente a la libertad de afiliación a través de otros medios de prueba que justifiquen la participación voluntaria de una persona en la vida interna del partido con carácter de militante, como por ejemplo, documentales sobre el pago de cuotas partidistas, la participación en actos del partido, la intervención en asambleas internas o el desempeño de funciones o comisiones partidistas, entre otras.

En suma, que el partido no tuviera el cuidado de conservar una constancia que documentara la libertad con que se condujo una persona previo a su afiliación que dice se llevó a cabo, o que deliberada (o incluso accidentalmente) la haya desechado, no lo libera de la carga de probar su dicho, teniendo en cuenta la máxima jurídica que establece que, en juicio, nadie puede alegar su propio error en su beneficio.

Lo anterior incide directamente en el derecho de presunción de inocencia en su vertiente de **estándar probatorio**, porque obliga a la autoridad del conocimiento a justificar que los datos derivados del material probatorio que obra en el expediente son consistentes con la acusación, permitiendo integrar toda la información que se genera de manera coherente, refutando la hipótesis de inocencia que hubiere presentado la defensa.

Esto es, la presunción de inocencia no significa que el acusado no tenga que desplegar actividad probatoria alguna, sino que en su defensa se deben presentar los elementos suficientes para generar duda en la hipótesis de culpabilidad que presenta la parte acusadora. En cambio, para la autoridad, la presunción de inocencia significa que no sólo debe presentar una hipótesis de culpabilidad plausible y consistente, sino que tiene que descartar hipótesis alternativas compatibles con la inocencia del acusado.

Otro aspecto importante a tomar en consideración radica en que, si el partido político cumple con la carga probatoria que corresponde a su afirmación en el sentido de que la afiliación cuestionada estuvo precedida del consentimiento del quejoso, es decir, si exhibe prueba suficiente sobre la legitimidad de la afiliación motivo de queja, debe considerarse que prevalece el principio de presunción de inocencia, en su vertiente de estándar probatorio.

Al respecto, cabe destacar que, si la autenticidad o el contenido de dicho documento es cuestionado por la parte quejosa, se debe estar a las disposiciones contenidas en la *LGIPE* y el *Reglamento de Quejas*, las cuales aluden a las reglas que deben observarse tratándose de la objeción de documentos, como parte del derecho contradictorio que les asiste a las partes, de oponerse o refutar las pruebas que ofrezcan o que se allegue la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral durante la secuela de un procedimiento ordinario sancionador.

Así, el artículo 24 del citado cuerpo normativo establece que:

*1. Las partes podrán objetar las pruebas ofrecidas durante la sustanciación de los procedimientos administrativos sancionadores **ordinario** y especial, siempre y cuando se realice antes de la audiencia de desahogo.*

*2. Para los efectos de lo señalado en el párrafo que antecede, las partes podrán objetar la autenticidad de la prueba o bien su alcance y valor probatorio **debiendo indicar** cuál es el aspecto que no se reconoce de la prueba o por qué no puede ser valorado positivamente por la autoridad, esto es, el motivo por el que a su juicio no resulta idóneo para resolver un punto de hecho.*

*3. Para desvirtuar la existencia o verosimilitud de los medios probatorios ofrecidos, no basta la simple objeción formal de dichas pruebas, sino que es necesario señalar las razones correctas en que se apoya la objeción **y aportar elementos idóneos para acreditarlas, mismos que tenderán a invalidar la fuerza probatoria de la prueba objetada.***

[Énfasis añadido]

Esto es, de conformidad con el precepto reglamentario previamente transcrito, **no basta con objetar de manera formal el medio de prueba ofrecido por el partido político para desvirtuar la existencia o verosimilitud de la constancia de afiliación, sino que es necesario señalar las razones correctas en que se apoya la objeción y, también, aportar en el momento procesal oportuno, los elementos idóneos para acreditar su objeción.**

Resulta aplicable al caso, la Jurisprudencia **4/2005**¹¹⁰ de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son los siguientes:

DOCUMENTOS PRIVADOS PROVENIENTES DE LAS PARTES. LA CARGA PROBATORIA DE LA OBJECIÓN DE FIRMA CORRESPONDE A QUIEN LA PLANTEA (LEGISLACIONES DE CHIAPAS Y PUEBLA, ESTA ÚLTIMA ANTES DE

¹¹⁰ Jurisprudencia 1a./J. 4/2005, Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Abril de 2005, Página 266.

LA REFORMA PUBLICADA EL 14 DE SEPTIEMBRE DE 1998). En términos de lo dispuesto por los artículos 324 del Código de Procedimientos Civiles de Chiapas y 330 del Código de Procedimientos Civiles de Puebla, los documentos privados provenientes de las partes deben ser reconocidos expresa o tácitamente para que adquieran el valor probatorio que las propias legislaciones les otorgan. Ahora bien, **esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio reiterado de que no basta decir que se objeta un documento privado para que éste carezca de valor probatorio, sino que es necesario probar las causas o motivos en que se funde la objeción.** Debido a que en las legislaciones adjetivas en cuestión no se establece ninguna regla específica sobre la carga probatoria en la hipótesis apuntada, para saber a quién corresponde dicha carga de la prueba sobre la objeción formulada, deben atenderse los hechos en que se funde la misma, aplicándose las reglas genéricas establecidas en los artículos 289 del Código de Procedimientos Civiles de Chiapas y 263 del Código de Procedimientos Civiles de Puebla, en cuanto a que **a cada parte corresponde probar los hechos de sus pretensiones. Por tanto, si la objeción de un documento privado proveniente de los interesados base de sus pretensiones se funda en la circunstancia de no haber suscrito el documento el objetante, a él corresponde la carga de la prueba.** Dicho de otra forma, **quien invoca una situación jurídica está obligado a probar los hechos fundatorios en que aquélla descansa; por lo contrario, quien sólo quiere que las cosas se mantengan en el estado que existen en el momento en que se inicia el juicio, no tiene la carga de la prueba, pues desde el punto de vista racional y de la lógica es evidente que quien pretende innovar y cambiar una situación actual, debe soportar la carga de la prueba.**

[Énfasis añadido]

Bajo ese contexto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación advirtió, en concordancia con los preceptos invocados en líneas que anteceden, que no basta decir que se objeta un documento privado para que éste carezca de valor probatorio, sino que debe ser necesario probar las causas o motivos en que se funde la objeción, es decir, que al objetante corresponde la carga de la prueba.

A efecto de robustecer lo anterior, se citan criterios de diversos Tribunales Colegiados de Circuito, en los que se han pronunciado en tal sentido sobre el tema:

- **DOCUMENTOS PRIVADOS. OBJECCIÓN A LOS.**¹¹¹
- **DOCUMENTOS PRIVADOS PROVENIENTES DE LAS PARTES. CONFORME AL ARTÍCULO 277 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, LA CARGA**

¹¹¹ Jurisprudencia I.30c. J/8, Tercer Tribunal Colegiado en materia Civil del Primer Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, Agosto de 1996, Página 423.

PROBATORIA DE LA OBJECCIÓN DE FIRMA CORRESPONDE A QUIEN LA PLANTEA.¹¹²

- **DOCUMENTOS PRIVADOS. PARA NEGARLES VALOR PROBATORIO, NO BASTA LA SIMPLE OBJECCIÓN, SINO QUE DEBEN SEÑALARSE LAS CAUSAS EN QUE LA FUNDE Y DEMOSTRARLAS.**¹¹³
- **DOCUMENTOS PRIVADOS, CARGA DE LA PRUEBA EN CASO DE OBJECCIÓN A LOS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO)**¹¹⁴
- **DOCUMENTOS PRIVADOS. CARGA DE LA PRUEBA PARA ACREDITAR LA OBJECCIÓN RESPECTO DE LA AUTENTICIDAD DE LA FIRMA CONTENIDA EN ELLOS**¹¹⁵
- **DOCUMENTOS PRIVADOS PROVENIENTES DE LAS PARTES, LA CARGA PROBATORIA DE LA OBJECCIÓN DE FIRMA CORRESPONDE A QUIEN LA PLANTEA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO)**¹¹⁶

De igual forma, resulta aplicable la Jurisprudencia **I.3o.C. J/11**,¹¹⁷ dictada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, cuyo rubro y texto son los siguientes:

DOCUMENTOS PRIVADOS INSUFICIENTEMENTE OBJETADOS POR EL PROPIO FIRMANTE, VALOR PROBATORIO DE LOS. *En tratándose de documentos privados, debe hacerse la distinción entre aquellos que provienen de terceras personas y los que se atribuyen a las partes litigantes en la controversia. Respecto de los primeros, basta la objeción del instrumento privado, debidamente razonada, para que pierda su valor probatorio, quedando a cargo del oferente la carga de la prueba y apoyar su contenido aportando otros elementos de convicción, y en relación con el segundo supuesto, para tener por satisfecho lo dispuesto por el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, es menester que la parte a quien perjudique realice en tiempo, forma y suficiencia la objeción, para que pierda su alcance probatorio dicho instrumento. De esta manera, se tiene que si en un caso la contraparte del oferente, al dársele vista con el documento exhibido, se limitó a manifestar que no lo había firmado, tal aseveración no pudo constituir la causa suficiente de objeción que demeritara el alcance de esa probanza, ya que para tal efecto resulta indispensable que existan causas motivadoras de la invalidez de la prueba y que se aportaran las pruebas idóneas para tal fin, como pudieron ser las periciales*

¹¹² Tesis Aislada XV.4o.12 C, Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, Septiembre de 2009, Página 3128.

¹¹³ Jurisprudencia III. 1Oc. J/17, Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, Semanario Judicial de la Federación, Número 63, Marzo de 1993, Página 46.

¹¹⁴ Tesis Aislada, Semanario Judicial de la Federación, Tomo XII, Agosto de 1993, Página 422.

¹¹⁵ Tesis XXXI.3º 8 L, Tercer Tribunal Colegiado de Vigésimo Primer Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Abril de 2002, Página 1254.

¹¹⁶ Tesis II. o C, 495 C, Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, Septiembre de 2005, Página 1454.

¹¹⁷ Tesis I.3o. C J/11, Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Octubre de 1997, Página 615.

grafoscópicas, grafológicas y caligráficas; elementos que no se rindieron para acreditar la impugnación, como lo dispone el artículo 341 del código citado.

[Énfasis añadido]

En igual sentido, el Primer Tribunal Colegiado en materia civil del Tercer Circuito en la Jurisprudencia **III.1o.C. J/29**,¹¹⁸ sostuvo el referido criterio en el siguiente sentido:

DOCUMENTOS PRIVADOS, PRUEBA DE LA FALSEDAD DE LA FIRMA DE LOS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO). *Una interpretación armónica de los artículos 342, 343, 344, 345, 346 y 351 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Jalisco, lleva a concluir que cuando se objeta la autenticidad de la firma de un documento privado es necesario pedir el cotejo de la misma con una señalada como indubitable; además, debe ofrecerse la prueba pericial respectiva, dado que la falsificación de la firma es un punto que sólo puede ser determinado por una persona con conocimientos especiales en la materia, es decir, por un perito grafoscopista, aun cuando exista diferencia notoria entre las firmas cuestionadas, porque tal circunstancia, por sí sola, no revela lo apócrifo de una de ellas, sino únicamente la diferencia entre ambas.*

[Énfasis añadido]

Lo anterior, en suma, significa que para destruir la presunción de inocencia que surge en favor del denunciado cuando aporta elementos de prueba idóneos para demostrar que la afiliación cuestionada estuvo precedida de la manifestación de voluntad de la persona, tal como las constancias de afiliación correspondientes, o bien, elementos que pongan de manifiesto que la parte quejosa realizó hechos positivos derivados de su militancia, no basta que, de manera abstracta y genérica, la persona denunciante afirme que dichos medios de convicción no son veraces o auténticos.

Lo anterior, atento que, conforme a la normatividad que rige los procedimientos sancionadores electorales y que inexcusablemente está obligado a seguir este *Consejo General*, resulta imperativo que quien objeta un medio de prueba, señale específicamente cuál es la parte que cuestiona, y al efecto aporte, o cuando menos señale, conforme a la regla general relativa a que a quien afirma le corresponde probar —vigente en los procedimientos sancionadores electorales conforme a lo establecido por la *Sala Superior*—, los elementos objetivos y ciertos que puedan conducir a destruir la eficacia probatoria de los elementos aportados por el denunciado en su defensa, pues de otra manera, el principio de presunción de

¹¹⁸ Jurisprudencia III.1o.C. J/29, Primer Tribunal Colegiado en materia Civil del Tercer Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Febrero de 2002, Página 680.

inocencia deberá prevalecer apoyado en las evidencias allegadas al procedimiento por el presunto responsable.

5. HECHOS ACREDITADOS

Como se ha mencionado, las denuncias presentadas por **Madison Monserrat Álvarez Romo, Selene Guadalupe López Sanz, Aldryn Chamú Márquez, Onivia Mateo Rodríguez, Omar Alejandro Cervantes Alcalá, María Antonia Guerrero Ramírez, Azalia Francisca Torres Torres, Esmirna Sumukey Hernández Medina, Ángel Jair Macías Padilla, Griselda Ortiz Ortiz, Zaira Brigitt Bernal Arellano, Aracely Castillo Hernández, América Crispín Martínez, Brenda Yadira Muñoz Galindo, Griselda Malvaez García e Irving Adán Popoca Guzmán**, versan sobre la supuesta violación a su derecho de libertad de afiliación, al ser incorporados al padrón del *PRI*, sin su consentimiento, así como la utilización de sus datos personales por dicho partido político para sustentar tal afiliación.

Ahora bien, es preciso señalar que, toda vez que el *PRI* informó que los datos para la afiliación de **Aldryn Chamú Márquez**, se recabaron mediante el uso de la aplicación móvil denominada “Apoyo ciudadano-INE” la UTCE solicitó a la DERFE que informara si esa Dirección contaba con el expediente electrónico de afiliación y, de ser el caso, remitiera el mismo

En tal virtud, mediante oficio INE/DERFE/STN/21943/2022, la *DERFE* informó, en lo que interesa, lo siguiente:

En ese sentido, y con la finalidad de dar atención al requerimiento de mérito, en cuanto al inciso a) del mismo, hago de su conocimiento que el pasado 08 de octubre de 2019, el Instituto Nacional Electoral suscribió con el Partido Revolucionario Institucional, un Convenio de Apoyo y Colaboración y su correspondiente Anexo Técnico, a fin de fijar las bases de colaboración para que el Instituto pusiera a su disposición el uso de la Aplicación Móvil, para las afiliaciones, ratificaciones o refrendo de sus afiliados, mismos que obran en posesión del área normativa de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores.

En virtud de lo anterior, y por lo que respecta al inciso b) de su solicitud, le informo que el Partido Revolucionario Institucional utilizó la Aplicación Móvil para la afiliación, ratificación o refrendo de sus militantes.

Ahora bien, y por lo que se refiere al inciso c) de su solicitud, le informo que derivado de la búsqueda realizada por la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores a través de la Coordinación de Procesos Tecnológicos en el respaldo de la base de

CONSEJO GENERAL
UT/SCG/Q/MMAR/JD01/AGS/176/2020

*datos del Sistema de Captación de Datos para Procesos de Participación Ciudadana y Actores Políticos, a fin de identificar si la afiliación, ratificación o refrendo del ciudadano solicitado por esa Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, fue captada mediante el uso de la Aplicación Móvil “Apoyo Ciudadano-INE”, se localizó un registro con el nombre de iniciales **A.C.M.**, en el Padrón de personas afiliadas al **Partido Revolucionario Institucional**.*

*Asimismo, y en cuanto al inciso **d)**, relativo a informar si actualmente se cuenta con el expediente electrónico del ciudadano **A.C.M.**, le comento que el Área Técnica de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, identificó que se cuenta con el expediente electrónico del referido ciudadano, el cual está conformado por las imágenes del anverso y reverso de la Credencial para Votar original, fotografía viva y la firma manuscrita digitalizada.*

Precisado lo anterior, en torno a la demostración de los hechos constitutivos de la infracción denunciada, en el cuadro siguiente se resumirá, por cada una de las partes denunciadas, la información derivada de la investigación preliminar implementada, así como las conclusiones que, en cada caso, fueron advertidas:

No.	Ciudadano	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del partido político
1	Madison Montserrat Álvarez Romo	<p>Fecha de afiliación: 21/05/2019</p> <p>Fecha de baja: 01/12/2020</p> <p>Fecha de cancelación: 03/12/2020</p>	<p>Mediante los siguientes oficios el representante del PRI manifestó lo siguiente:</p> <p style="text-align: center;">Oficio PRI/REP-INE/822/2020</p> <p>Informó que la ciudadana de referencia fue parte del citado instituto político y que ya había sido dada de baja de su padrón de afiliados, señalando como fecha de afiliación el 21/05/2019 y como fecha de baja el 03/12/2020.</p> <p>Adjunta capturas de pantalla para acreditar la baja y refiere que derivado de la pandemia provocada por el virus SARS-COV-2, las actividades dentro de las oficinas se encuentran restringidas por lo que se encuentran imposibilitados para buscar los formatos de afiliación y solicitan una prórroga para dar cumplimiento a lo requerido.</p> <p style="text-align: center;">Oficio PRI/REP-INE/128/2021</p> <p>Aportó el Formato Único de Afiliación o Refrendo a nombre de Madison Montserrat Álvarez Romo, de</p>

CONSEJO GENERAL
UT/SCG/Q/MMAR/JD01/AGS/176/2020

No.	Ciudadano	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del partido político
			fecha 07/02/2019 y copia de su credencial de elector, por ambos lados.
Conclusiones			
A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que:			
1. No existe controversia respecto que dicha ciudadana fue registrada como afiliada del <i>PRI</i> en atención a lo informado por la <i>DEPPP</i> y el partido político denunciado.			
2. El <i>PRI</i> aportó el original del Formato Único de Afiliación o Refrendo con los datos y firma de la persona denunciante.			
3. Mediante acuerdo de veintiocho de mayo de dos mil veintiuno se dio vista a la persona quejosa con el Formato Único de Afiliación o Refrendo y mediante proveído de treinta y uno de agosto se le dio vista de alegatos para que manifestara lo que a su derecho conviniera, sin que se hubiera pronunciado al respecto.			
Por lo que, al no ser controvertida la documental aportada por el <i>PRI</i> , permite colegir su validez.			
En consecuencia, se debe concluir que la afiliación de dicha persona se realizó conforme a las disposiciones legales y estatutarias del <i>PRI</i> , por lo que, NO existe afiliación indebida y, en su caso, uso indebido de datos personales.			

No.	Ciudadano	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del partido político
2	Selene Guadalupe López Sanz	<p>Fecha de afiliación: 08/06/2019</p> <p>Fecha de baja: 01/12/2020</p> <p>Fecha de cancelación: 03/12/2020</p>	<p>Mediante los siguientes oficios el representante del <i>PRI</i> manifestó lo siguiente:</p> <p style="text-align: center;">Oficio PRI/REP-INE/822/2020</p> <p>Informó que la ciudadana de referencia fue parte del citado instituto político y que ya había sido dada de baja de su padrón de afiliados, señalando como fecha de afiliación el 08/06/2019 y como fecha de baja el 03/12/2020.</p> <p>Adjunta capturas de pantalla para acreditar la baja y refiere que derivado de la pandemia provocada por el virus SARS-COV-2, las actividades dentro de las oficinas se encuentran restringidas por lo que se encuentran imposibilitados para buscar los formatos de afiliación y solicitan una prórroga para dar cumplimiento a lo requerido.</p>

CONSEJO GENERAL
UT/SCG/Q/MMAR/JD01/AGS/176/2020

No.	Ciudadano	Información proporcionada por la <i>DEPPP</i>	Manifestaciones del partido político
			<p style="text-align: center;">Oficio PRI/REP-INE/921/2020</p> <p>Aportó el Formato Único de Afiliación o Refrendo a nombre de Selene Guadalupe López Sanz, sin fecha y copia de su credencial de elector, por ambos lados.</p>
<p style="text-align: center;">Conclusiones</p> <p>A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. No existe controversia respecto que dicha ciudadana fue registrada como afiliada del <i>PRI</i> en atención a lo informado por la <i>DEPPP</i> y el partido político denunciado. 2. El <i>PRI</i> aportó el original del Formato Único de Afiliación o Refrendo con los datos y firma de la persona denunciante. 3. Mediante acuerdo de ocho de febrero de dos mil veintiuno se dio vista a la persona quejosa con el Formato Único de Afiliación o Refrendo, para que manifestara lo que a su derecho conviniera, aduciendo que si bien reconocía que era la persona que aparecía en la foto y firma, desconocía el concepto bajo el cual lo realizó ya que en realidad no lo recordaba. 4. Mediante proveído de treinta y uno de agosto del año en curso se le dio vista de alegatos para que manifestara lo que a su derecho conviniera. 5. La quejosa no realizó manifestación alguna en alegatos. <p>No obstante que la quejosa refiere desconocer el concepto bajo el cual realizó la firma de la cédula, se considera que sus manifestaciones resultan insuficientes para desvirtuar los elementos que obran en el expediente, pues no aporta elementos para restar o nulificar el valor probatorio de la cédula aportada por el denunciado, por lo que se debe concluir que NO se trata de una afiliación indebida.</p>			

CONSEJO GENERAL
UT/SCG/Q/MMAR/JD01/AGS/176/2020

No.	Ciudadano	Información proporcionada por la <i>DEPPP</i>	Manifestaciones del partido político
3	Aldryn Chamu Márquez	Fecha de afiliación: 19/11/2019 Fecha de baja: 12/11/2020 Fecha de cancelación: 12/11/2020	Mediante los siguientes oficios el representante del <i>PRI</i> manifestó lo siguiente: Oficio PRI/REP-INE/822/2020 Informó que el ciudadano de referencia fue parte del citado instituto político y que ya había sido dado de baja de su padrón de afiliados, señalando como fecha de afiliación el 19/11/2019 y como fecha de baja el 12/11/2020. Adjunta capturas de pantalla para acreditar la baja y refiere que derivado de la pandemia provocada por el virus SARS-COV-2, las actividades dentro de las oficinas se encuentran restringidas por lo que se encuentran imposibilitados para buscar los formatos de afiliación y solicitan una prórroga para dar cumplimiento a lo requerido. Oficio PRI/REP-INE/152/2021 Aportó la Cédula del Expediente Electrónico de Afiliación, Refrendo o Ratificación de la ciudadanía como Militante de un Partido Político de Aldryn Chamú Márquez, de 19/11/2019, que incluye la firma manuscrita digitalizada, fotografía viva y copia de su credencial de elector, por ambos lados.
		Información proporcionada por la <i>DERFE</i>	
		Cédula del Expediente Electrónico de Afiliación, Refrendo o Ratificación de la ciudadanía como Militante de un Partido Político: 19/11/2019	
Conclusiones			
A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que:			
1. No existe controversia respecto que dicho ciudadano fue registrado como afiliado del <i>PRI</i> en atención a lo informado por la <i>DEPPP</i> y el partido político denunciado.			
2. El <i>PRI</i> aportó el original de la Cédula del Expediente Electrónico de Afiliación, Refrendo o Ratificación de la ciudadanía como Militante de un Partido Político con los datos de la persona denunciante, documento que también fue proporcionado por la <i>DERFE</i> , en el que se aprecian elementos como son: imagen viva de la persona, imagen de la credencial para votar (anverso y reverso) y firma manuscrita digitalizada a través de la aplicación móvil.			
3. Mediante acuerdo de treinta y uno de agosto de mil veintidós, esto es, durante la vista de alegatos, se dio vista a la persona quejosa con la Cédula del Expediente Electrónico de Afiliación, Refrendo o Ratificación de la ciudadanía como Militante de un Partido Político para que manifestara lo que a su derecho conviniera, sin que se hubiera pronunciado al respecto.			

CONSEJO GENERAL
UT/SCG/Q/MMAR/JD01/AGS/176/2020

No.	Ciudadano	Información proporcionada por la <i>DEPPP</i>	Manifestaciones del partido político
<p>Por lo que, al no ser controvertida la documental aportada por el <i>PRI</i> y la <i>DERFE</i> permite colegir su validez.</p> <p>En consecuencia, se debe concluir que la afiliación de dicha persona se realizó conforme a las disposiciones legales y estatutarias del <i>PRI</i>, por lo que, NO existe afiliación indebida y, en su caso, uso indebido de datos personales.</p>			

No.	Ciudadano	Información proporcionada por la <i>DEPPP</i>	Manifestaciones del partido político
4	Onivia Mateo Rodríguez	<p>Fecha de afiliación: 03/04/2019</p> <p>Fecha de baja: 01/12/2020</p> <p>Fecha de cancelación: 03/12/2020</p>	<p>Mediante los siguientes oficios el representante del <i>PRI</i> manifestó lo siguiente:</p> <p style="text-align: center;">Oficio PRI/REP-INE/822/2020</p> <p>Informó que la ciudadana de referencia fue parte del citado instituto político y que ya había sido dada de baja de su padrón de afiliados, señalando como fecha de afiliación el 03/04/2019 y como fecha de baja el 03/12/2020.</p> <p>Adjunta capturas de pantalla para acreditar la baja y refiere que derivado de la pandemia provocada por el virus SARS-COV-2, las actividades dentro de las oficinas se encuentran restringidas por lo que se encuentran imposibilitados para buscar los formatos de afiliación y solicitan una prórroga para dar cumplimiento a lo requerido.</p> <p style="text-align: center;">Oficio PRI/REP-INE/921/2020</p> <p>Aportó el Formato Único de Afiliación o Refrendo a nombre de Onivia Mateo Rodríguez, de fecha 03/04/2019 y copia de su credencial de elector, por ambos lados.</p>
<p style="text-align: center;">Conclusiones</p> <p>A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que:</p> <p>1. No existe controversia respecto que dicha ciudadana fue registrada como afiliada del <i>PRI</i> en atención a lo informado por la <i>DEPPP</i> y el partido político denunciado.</p>			

CONSEJO GENERAL
UT/SCG/Q/MMAR/JD01/AGS/176/2020

No.	Ciudadano	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del partido político
			<p>2. El <i>PRI</i> aportó el original del Formato Único de Afiliación o Refrendo con los datos y firma de la persona denunciante.</p> <p>3. Mediante acuerdo de ocho de febrero de dos mil veintiuno se dio vista a la persona quejosa con el Formato Único de Afiliación o Refrendo, y mediante proveído de treinta y uno de agosto del año en curso, se le dio vista de alegatos para que manifestara lo que a su derecho conviniera, sin que se hubiera pronunciado al respecto.</p> <p>Por lo que, al no ser controvertida la documental aportada por el <i>PRI</i>, permite colegir su validez.</p> <p>En consecuencia, se debe concluir que la afiliación de dicha persona se realizó conforme a las disposiciones legales y estatutarias del <i>PRI</i>, por lo que, NO existe afiliación indebida y, en su caso, uso indebido de datos personales.</p>

No.	Ciudadano	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del partido político
5	Omar Alejandro Cervantes Alcalá	<p>Fecha de afiliación: 24/05/2019</p> <p>Fecha de baja: 01/12/2020</p> <p>Fecha de cancelación: 03/12/2020</p>	<p>Mediante los siguientes oficios el representante del <i>PRI</i> manifestó lo siguiente:</p> <p style="text-align: center;">Oficio PRI/REP-INE/822/2020</p> <p>Informó que el ciudadano de referencia fue parte del citado instituto político y que ya había sido dado de baja de su padrón de afiliados, señalando como fecha de afiliación el 24/05/2019 y como fecha de baja el 03/12/2020.</p> <p>Adjunta capturas de pantalla para acreditar la baja y refiere que derivado de la pandemia provocada por el virus SARS-COV-2, las actividades dentro de las oficinas se encuentran restringidas por lo que se encuentran imposibilitados para buscar los formatos de afiliación y solicitan una prórroga para dar cumplimiento a lo requerido.</p> <p style="text-align: center;">Oficio PRI/REP-INE/128/2021</p> <p>Aportó el Formato Único de Afiliación o Refrendo a nombre de Omar Alejandro Cervantes Alcalá, de fecha 07/06/2019 y copia de su credencial de elector, por ambos lados.</p>

CONSEJO GENERAL
UT/SCG/Q/MMAR/JD01/AGS/176/2020

No.	Ciudadano	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del partido político
Conclusiones			
A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que:			
1. No existe controversia respecto que dicho ciudadano fue registrado como afiliado del <i>PRI</i> en atención a lo informado por la <i>DEPPP</i> y el partido político denunciado.			
2. El <i>PRI</i> aportó el original del Formato Único de Afiliación o Refrendo con los datos y firma de la persona denunciante.			
3. Mediante acuerdo de veintiocho de mayo de dos mil veintiuno se dio vista a la persona quejosa con el Formato Único de Afiliación o Refrendo y mediante proveído de treinta y uno de agosto se le dio vista de alegatos para que manifestara lo que a su derecho conviniera, sin que se hubiera pronunciado al respecto.			
Al respecto, es de tener en cuenta que la cédula aportada por el <i>PRI</i> es posterior al registro realizado ante la <i>DEPPP</i> , en ese sentido el documento exhibido por el partido, al ser posterior, no es válido para acreditar la legal afiliación del denunciado, por lo que, SÍ existe una afiliación indebida y, en su caso, uso indebido de datos personales.			

No.	Ciudadano	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del partido político
6	María Antonia Guerrero Ramírez	Fecha de afiliación: 28/10/2019 Fecha de baja: 01/12/2020 Fecha de cancelación: 03/12/2020	<p>Mediante los siguientes oficios el representante del <i>PRI</i> manifestó lo siguiente:</p> <p style="text-align: center;">Oficio PRI/REP-INE/822/2020</p> <p>Informó que la ciudadana de referencia fue parte del citado instituto político y que ya había sido dada de baja de su padrón de afiliados, señalando como fecha de afiliación el 28/10/2019 y como fecha de baja el 03/12/2020.</p> <p>Adjunta capturas de pantalla para acreditar la baja y refiere que derivado de la pandemia provocada por el virus SARS-COV-2, las actividades dentro de las oficinas se encuentran restringidas por lo que se encuentran imposibilitados para buscar los formatos de afiliación y solicitan una prórroga para dar cumplimiento a lo requerido.</p> <p style="text-align: center;">Oficio PRI/REP-INE/921/2020</p>

CONSEJO GENERAL
UT/SCG/Q/MMAR/JD01/AGS/176/2020

No.	Ciudadano	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del partido político
			Aportó el Formato Único de Afiliación o Refrendo a nombre de María Antonia Guerrero Ramírez, de fecha 24/04/2019 y copia de su credencial de elector, por ambos lados.
Conclusiones			
A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que:			
1. No existe controversia respecto que dicha ciudadana fue registrada como afiliada del <i>PRI</i> en atención a lo informado por la <i>DEPPP</i> y el partido político denunciado.			
2. El <i>PRI</i> aportó el original del Formato Único de Afiliación o Refrendo con los datos y firma de la persona denunciante.			
3. Mediante acuerdo de ocho de febrero y veintiocho de mayo de dos mil veintiuno [reposición de notificación] se dio vista a la persona quejosa con el Formato Único de Afiliación o Refrendo para que manifestara lo que a su derecho conviniera, aduciendo que nunca dio su consentimiento o autorización para que se realizara su afiliación, y que dicha acción la hicieron con engaños.			
4. Mediante proveído de treinta y uno de agosto del año en curso se le dio vista de alegatos para que manifestara lo que a su derecho conviniera.			
5. La quejosa no realizó manifestación alguna en alegatos.			
No obstante que la quejosa refiere que su consentimiento para ser afiliada se obtuvo con engaños, se considera que sus manifestaciones resultan insuficientes para desvirtuar los elementos que obran en el expediente, pues no aporta elementos para restar o nulificar el valor probatorio de la cédula aportada por el denunciado, por lo que se debe concluir que NO se trata de una afiliación indebida.			

No.	Ciudadano	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del partido político
7	Azalia Francisca Torres Torres	Fecha de afiliación: 06/01/2006 Fecha de baja: 01/12/2020 Fecha de cancelación: 03/12/2020	Mediante los siguientes oficios el representante del <i>PRI</i> manifestó lo siguiente: <p style="text-align: center;">Oficio PRI/REP-INE/822/2020</p> Informó que la ciudadana de referencia fue parte del citado instituto político y que ya había sido dada de baja de su padrón de afiliados, señalando como fecha de afiliación el 06/01/2006 y como fecha de baja el 03/12/2020.

CONSEJO GENERAL
UT/SCG/Q/MMAR/JD01/AGS/176/2020

No.	Ciudadano	Información proporcionada por la <i>DEPPP</i>	Manifestaciones del partido político
			<p>Adjunta capturas de pantalla para acreditar la baja y refiere que derivado de la pandemia provocada por el virus SARS-COV-2, las actividades dentro de las oficinas se encuentran restringidas por lo que se encuentran imposibilitados para buscar los formatos de afiliación y solicitan una prórroga para dar cumplimiento a lo requerido.</p> <p style="text-align: center;">Oficio PRI/REP-INE/921/2020</p> <p>Aportó el Formato Único de Afiliación o Refrendo a nombre de Azalia Francisca Torres Torres, de fecha 05/06/2019 y copia de su credencial de elector, por ambos lados.</p>
<p style="text-align: center;">Conclusiones</p> <p>A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. No existe controversia respecto que dicha ciudadana fue registrada como afiliada del <i>PRI</i> en atención a lo informado por la <i>DEPPP</i> y el partido político denunciado. 2. El <i>PRI</i> aportó el original del Formato Único de Afiliación o Refrendo con los datos y firma de la persona denunciante. 3. Mediante acuerdo de ocho de febrero de dos mil veintiuno se dio vista a la persona quejosa con el Formato Único de Afiliación o Refrendo para que manifestara lo que a su derecho conviniera, aduciendo que desconocía el manejo y uso de su firma ya que la misma había sido falsificada. 4. Mediante acuerdo de treinta y uno de agosto del año en curso se le dio vista de alegatos para que manifestara lo que a su derecho conviniera 5. La quejosa fue omisa en desahogar la vista de alegatos. <p>No obstante que la quejosa refiere no haber firmado el Formato Único de Afiliación o Refrendo, se considera que sus manifestaciones resultan insuficientes para desvirtuar los elementos que obran en el expediente, pues no aporta elementos para restar o nulificar el valor probatorio de la cédula aportada por el denunciado por lo que se debe concluir que NO se trata de una afiliación indebida.</p>			

CONSEJO GENERAL
UT/SCG/Q/MMAR/JD01/AGS/176/2020

No.	Ciudadano	Información proporcionada por la <i>DEPPP</i>	Manifestaciones del partido político
8	Esmirna Sumukey Hernández Medina	<p>Fecha de afiliación: 22/03/2019</p> <p>Fecha de baja: 11/11/2020</p> <p>Fecha de cancelación: 11/11/2020</p>	<p>Mediante los siguientes oficios el representante del <i>PRI</i> manifestó lo siguiente:</p> <p style="text-align: center;">Oficio PRI/REP-INE/822/2020</p> <p>Informó que la ciudadana de referencia fue parte del citado instituto político y que ya había sido dada de baja de su padrón de afiliados, señalando como fecha de afiliación el 22/03/2019 y como fecha de baja el 12/11/2020.</p> <p>Adjunta capturas de pantalla para acreditar la baja y refiere que derivado de la pandemia provocada por el virus SARS-COV-2, las actividades dentro de las oficinas se encuentran restringidas por lo que se encuentran imposibilitados para buscar los formatos de afiliación y solicitan una prórroga para dar cumplimiento a lo requerido.</p> <p style="text-align: center;">Oficio PRI/REP-INE/921/2020</p> <p>Aportó el Formato Único de Afiliación o Refrendo del Sistema de Afiliación y Registro Partidario a nombre de Esmirna Sumukey Hernández Medina, de fecha 22/03/2019 y copia de su credencial de elector, por el anverso.</p>
<p style="text-align: center;">Conclusiones</p> <p>A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. No existe controversia respecto que dicha ciudadana fue registrada como afiliada del <i>PRI</i> en atención a lo informado por la <i>DEPPP</i> y el partido político denunciado. 2. El <i>PRI</i> aportó el original del Formato Único de Afiliación o Refrendo del Sistema de Afiliación y Registro Partidario con los datos y firma de la persona denunciante. 3. Mediante acuerdo de ocho de febrero y veintiocho de mayo de dos mil veintiuno [reposición de notificación] se dio vista a la persona quejosa con el Formato Único de Afiliación o Refrendo, del Sistema de Afiliación y Registro Partidario y mediante proveído de treinta y uno de agosto del año en curso, se le dio vista de alegatos para que manifestara lo que a su derecho conviniera, sin que se hubiera pronunciado al respecto. <p>Por lo que, al no ser controvertida la documental aportada por el <i>PRI</i>, permite colegir su validez.</p>			

CONSEJO GENERAL
UT/SCG/Q/MMAR/JD01/AGS/176/2020

No.	Ciudadano	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del partido político
En consecuencia, se debe concluir que la afiliación de dicha persona se realizó conforme a las disposiciones legales y estatutarias del <i>PRI</i> , por lo que, NO existe afiliación indebida y, en su caso, uso indebido de datos personales.			

No.	Ciudadano	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del partido político
9	Ángel Jair Macías Padilla	<p>Fecha de afiliación: 21/04/2019</p> <p>Fecha de baja: 01/12/2020</p> <p>Fecha de cancelación: 03/12/2020</p>	<p>Mediante los siguientes oficios el representante del <i>PRI</i> manifestó lo siguiente:</p> <p style="text-align: center;">Oficio PRI/REP-INE/822/2020</p> <p>Informó que el ciudadano de referencia fue parte del citado instituto político y que ya había sido dado de baja de su padrón de afiliados, señalando como fecha de afiliación el 21/04/2019 y como fecha de baja el 03/12/2020.</p> <p>Adjunta capturas de pantalla para acreditar la baja y refiere que derivado de la pandemia provocada por el virus SARS-COV-2, las actividades dentro de las oficinas se encuentran restringidas por lo que se encuentran imposibilitados para buscar los formatos de afiliación y solicitan una prórroga para dar cumplimiento a lo requerido.</p> <p style="text-align: center;">Oficio PRI/REP-INE/921/2020</p> <p>Aportó el Formato Único de Afiliación o Refrendo del Sistema de Afiliación y Registro Partidario a nombre de Ángel Jair Macías Padilla, de fecha 21/04/2019 y copia de su credencial de elector, por ambos lados.</p>

Conclusiones

A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que:

1. No existe controversia respecto que dicho ciudadano fue registrado como afiliado del *PRI* en atención a lo informado por la *DEPPP* y el partido político denunciado.
2. El *PRI* aportó el original del Formato Único de Afiliación o Refrendo con los datos y firma de la persona denunciante.
3. Mediante acuerdo de ocho de febrero de dos mil veintiuno se dio vista a la persona quejosa con el Formato Único de Afiliación o Refrendo del Sistema de Afiliación y Registro Partidario y

CONSEJO GENERAL
UT/SCG/Q/MMAR/JD01/AGS/176/2020

No.	Ciudadano	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del partido político
			<p>mediante acuerdo de treinta y uno de agosto del año en curso, se le dio vista de alegatos para que manifestara lo que a su derecho conviniera, sin que se hubiera pronunciado al respecto.</p> <p>Por lo que, al no ser controvertida la documental aportada por el <i>PRI</i>, permite colegir su validez.</p> <p>En consecuencia, se debe concluir que la afiliación de dicha persona se realizó conforme a las disposiciones legales y estatutarias del <i>PRI</i>, por lo que, NO existe afiliación indebida y, en su caso, uso indebido de datos personales.</p>

No.	Ciudadano	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del partido político
10	Griselda Ortiz Ortiz	<p>Fecha de afiliación: ** 12/09/2012¹¹⁹</p> <p>Fecha de baja: 11/11/2020</p> <p>Fecha de cancelación: 11/11/2020</p>	<p>Mediante los siguientes oficios el representante del <i>PRI</i> manifestó lo siguiente:</p> <p style="text-align: center;">Oficio PRI/REP-INE/822/2020</p> <p>Informó que la ciudadana de referencia fue parte del citado instituto político y que ya había sido dada de baja de su padrón de afiliados, señalando como fecha de afiliación “histórico” y como fecha de baja el 12/11/2020.</p> <p>Adjunta capturas de pantalla para acreditar la baja y refiere que derivado de la pandemia provocada por el virus SARS-COV-2, las actividades dentro de las oficinas se encuentran restringidas por lo que se encuentran imposibilitados para buscar los formatos de afiliación y solicitan una prórroga para dar cumplimiento a lo requerido.</p> <p style="text-align: center;">Oficio PRI/REP-INE/544/2021</p> <p>Aportó el Formato Único de Afiliación al Registro Partidario de Griselda Ortiz Ortiz, sin fecha, y copia de su credencial de elector, por ambos lados.</p>
Conclusiones			
A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que:			

¹¹⁹ Si bien no se cuenta con datos precisos que permitan determinar su fecha de afiliación, de lo informado por la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos se desprende que el registro de dicha ciudadana fue capturado con anterioridad a la entrada en vigor de los abrogados “Lineamientos para la verificación del padrón de afiliados de los Partidos Políticos Nacionales para la conservación de su registro”, es decir, antes del trece de septiembre de dos mil doce. Por tanto, en dicho caso se tomará como fecha de afiliación el doce de septiembre de dos mil doce.

CONSEJO GENERAL
UT/SCG/Q/MMAR/JD01/AGS/176/2020

No.	Ciudadano	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del partido político
			<p>1. No existe controversia respecto que dicha ciudadana fue registrada como afiliada del <i>PRI</i> en atención a lo informado por la <i>DEPPP</i> y el partido político denunciado.</p> <p>2. El <i>PRI</i> aportó el original del Formato Único de Afiliación al Registro Partidario con los datos y firma de la persona denunciante.</p> <p>3. Mediante acuerdo de diez de enero de dos mil veintidós se dio vista a la persona quejosa con el Formato Único de Afiliación al Registro Partidario y mediante acuerdo de treinta y uno de agosto del año en curso, se le dio vista de alegatos, para que manifestara lo que a su derecho conviniera, sin que se hubiera pronunciado al respecto.</p> <p>Por lo que, al no ser controvertida la documental aportada por el <i>PRI</i>, permite colegir su validez.</p> <p>En consecuencia, se debe concluir que la afiliación de dicha persona se realizó conforme a las disposiciones legales y estatutarias del <i>PRI</i>, por lo que, NO existe afiliación indebida y, en su caso, uso indebido de datos personales.</p>

No.	Ciudadano	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del partido político
11	Zaira Brigitt Bernal Arellano	<p>Fecha de afiliación: 08/10/2019</p> <p>Fecha de baja: 01/12/2020</p> <p>Fecha de cancelación: 03/12/2020</p>	<p>Mediante los siguientes oficios el representante del <i>PRI</i> manifestó lo siguiente:</p> <p style="text-align: center;">Oficio PRI/REP-INE/822/2020</p> <p>Informó que la ciudadana de referencia fue parte del citado instituto político y que ya había sido dada de baja de su padrón de afiliados, señalando como fecha de afiliación el 08/10/2019 y como fecha de baja el 03/12/2020.</p> <p>Adjunta capturas de pantalla para acreditar la baja y refiere que derivado de la pandemia provocada por el virus SARS-COV-2, las actividades dentro de las oficinas se encuentran restringidas por lo que se encuentran imposibilitados para buscar los formatos de afiliación y solicitan una prórroga para dar cumplimiento a lo requerido.</p> <p style="text-align: center;">Oficio PRI/REP-INE/128/2021</p> <p>Aportó el Formato Único de Afiliación o Refrendo a nombre de Zaira Brigitt Bernal Arellano, de fecha</p>

CONSEJO GENERAL
UT/SCG/Q/MMAR/JD01/AGS/176/2020

No.	Ciudadano	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del partido político
			08/05/2019 y copia de su credencial de elector, por ambos lados.
Conclusiones			
A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que:			
1. No existe controversia respecto que dicha ciudadana fue registrada como afiliada del <i>PRI</i> en atención a lo informado por la <i>DEPPP</i> y el partido político denunciado.			
2. El <i>PRI</i> aportó el original del Formato Único de Afiliación o Refrendo con los datos y firma de la persona denunciante.			
3. Mediante acuerdo de veintiocho de mayo de dos mil veintiuno se dio vista a la persona quejosa con el Formato Único de Afiliación o Refrendo y mediante acuerdo de treinta y uno de agosto del año en curso, se le dio vista de alegatos para que manifestara lo que a su derecho conviniera, sin que se hubiera pronunciado al respecto.			
Por lo que, al no ser controvertida la documental aportada por el <i>PRI</i> , permite colegir su validez.			
En consecuencia, se debe concluir que la afiliación de dicha persona se realizó conforme a las disposiciones legales y estatutarias del <i>PRI</i> , por lo que, NO existe afiliación indebida y, en su caso, uso indebido de datos personales.			

No.	Ciudadano	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del partido político
12	Griselda Malváez García	Primera fecha de afiliación: 15/07/2016 Primera fecha de baja: 13/12/2019 Primera fecha de cancelación: 14/12/2019 Segunda fecha de afiliación: 06/05/2019	Mediante los siguientes oficios el representante del <i>PRI</i> manifestó lo siguiente: <p style="text-align: center;">Oficio PRI/REP-INE/822/2020</p> Informó que la ciudadana de referencia fue parte del citado instituto político y que ya había sido dada de baja de su padrón de afiliados, señalando como fecha de afiliación el 06/05/2019 y como fecha de baja el 17/11/2020. Adjunta capturas de pantalla para acreditar la baja y refiere que derivado de la pandemia provocada por el virus SARS-COV-2, las actividades dentro de las oficinas se encuentran restringidas por lo que se encuentran imposibilitados para buscar los formatos de afiliación y solicitan una prórroga para dar cumplimiento a lo requerido.

CONSEJO GENERAL
UT/SCG/Q/MMAR/JD01/AGS/176/2020

No.	Ciudadano	Información proporcionada por la <i>DEPPP</i>	Manifestaciones del partido político
		Segunda fecha de baja: 30/10/2020 Segunda fecha de cancelación: 30/10/2020	Oficio PRI/REP-INE/128/2021 Aportó el Formato Único de Afiliación y Actualización de Registro Partidario a nombre de Griselda Malvárez García, de fecha 06/05/2019 y copia de su credencial de elector, por ambos lados.

Conclusiones

A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que:

1. No existe controversia respecto que dicha ciudadana fue registrada como afiliada del *PRI* en atención a lo informado por la *DEPPP* y el partido político denunciado.
2. El *PRI* aportó el original del Formato Único de Afiliación y Actualización de Registro Partidario con los datos y firma de la persona denunciante.
3. Mediante acuerdo de veintiocho de mayo de dos mil veintiuno se dio vista a la persona quejosa con el Formato Único de Afiliación y Actualización de Registro Partidario y mediante acuerdo de treinta y uno de agosto se le dio vista de alegatos, para que manifestara lo que a su derecho conviniera, sin que se hubiera pronunciado al respecto.

Por lo que, al no ser controvertida la documental aportada por el *PRI*, permite colegir su validez.

En consecuencia, se debe concluir que la afiliación de dicha persona se realizó conforme a las disposiciones legales y estatutarias del *PRI*, por lo que, **NO** existe afiliación indebida y, en su caso, uso indebido de datos personales.

No.	Ciudadano	Información proporcionada por la <i>DEPPP</i>	Manifestaciones del partido político
13	Brenda Yadira Muñoz Galindo	Fecha de afiliación: 19/11/2019 Fecha de baja: 30/10/2020 Fecha de cancelación: 30/10/2020	Mediante los siguientes oficios el representante del <i>PRI</i> manifestó lo siguiente: Oficio PRI/REP-INE/822/2020 Informó que la ciudadana de referencia fue parte del citado instituto político y que ya había sido dada de baja de su padrón de afiliados, señalando como fecha de afiliación el 19/11/2019 y como fecha de baja el 17/11/2020.

CONSEJO GENERAL
UT/SCG/Q/MMAR/JD01/AGS/176/2020

No.	Ciudadano	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del partido político
			<p>Adjunta capturas de pantalla para acreditar la baja y refiere que derivado de la pandemia provocada por el virus SARS-COV-2, las actividades dentro de las oficinas se encuentran restringidas por lo que se encuentran imposibilitados para buscar los formatos de afiliación y solicitan una prórroga para dar cumplimiento a lo requerido.</p> <p style="text-align: center;">Oficio PRI/REP-INE/128/2021</p> <p>Aportó el Formato Único de Afiliación y Actualización al Registro Partidario a nombre de Brenda Yadira Muñoz Galindo, de fecha 19/11/2019 y copia de su credencial de elector, por ambos lados.</p>

Conclusiones

A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que:

1. No existe controversia respecto que dicha ciudadana fue registrada como afiliada del *PRI* en atención a lo informado por la *DEPPP* y el partido político denunciado.
2. El *PRI* aportó el original del Formato Único de Afiliación y Actualización al Registro Partidario con los datos y firma de la persona denunciante.
3. Mediante acuerdo de veintiocho de mayo de dos mil veintiuno se dio vista a la persona quejosa con el Formato Único de Afiliación y Actualización al Registro Partidario y mediante proveído de treinta y uno de agosto se le dio vista de alegatos para que manifestara lo que a su derecho conviniera, sin que se hubiera pronunciado al respecto.

Por lo que, al no ser controvertida la documental aportada por el *PRI*, permite colegir su validez.

En consecuencia, se debe concluir que la afiliación de dicha persona se realizó conforme a las disposiciones legales y estatutarias del *PRI*, por lo que, **NO** existe afiliación indebida y, en su caso, uso indebido de datos personales.

No.	Ciudadano	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del partido político
14	América Crispín Martínez	Primera fecha de afiliación: 27/07/2010	<p>Mediante los siguientes oficios el representante del <i>PRI</i> manifestó lo siguiente:</p> <p style="text-align: center;">Oficio PRI/REP-INE/822/2020</p>

CONSEJO GENERAL
UT/SCG/Q/MMAR/JD01/AGS/176/2020

No.	Ciudadano	Información proporcionada por la <i>DEPPP</i>	Manifestaciones del partido político
		Primera fecha de baja: 21/11/2018 Primera fecha de cancelación: 06/12/2018 Segunda fecha de afiliación: 01/12/2019 Segunda fecha de baja: 30/10/2020 Segunda fecha de cancelación: 30/10/2020	<p>Informó que la ciudadana de referencia fue parte del citado instituto político y que ya había sido dada de baja de su padrón de afiliados, señalando como fecha de afiliación el 01/12/2019 y como fecha de baja el 17/11/2020.</p> <p>Adjunta capturas de pantalla para acreditar la baja y refiere que derivado de la pandemia provocada por el virus SARS-COV-2, las actividades dentro de las oficinas se encuentran restringidas por lo que se encuentran imposibilitados para buscar los formatos de afiliación y solicitan una prórroga para dar cumplimiento a lo requerido.</p> <p style="text-align: center;">Oficio PRI/REP-INE/544/2021</p> <p>Aportó el Formato Único de Afiliación y Actualización al Registro Partidario de América Crispín Martínez, de 02/02/2018 (con corrector) y copia de su credencial de elector, por ambos lados.</p>
<p style="text-align: center;">Conclusiones</p> <p>A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. No existe controversia respecto que dicha ciudadana fue registrada como afiliada del <i>PRI</i> en atención a lo informado por la <i>DEPPP</i> y el partido político denunciado. 2. El <i>PRI</i> aportó el original del Formato Único de Afiliación y Actualización al Registro Partidario con los datos y firma de la persona denunciante. 3. Mediante acuerdo de diez de enero de dos mil veintidós se dio vista a la persona quejosa con el Formato Único de Afiliación o Refrendo, y mediante proveído de treinta y uno de agosto del año en curso se le dio vista de alegatos para que manifestara lo que a su derecho conviniera, sin que se hubiera pronunciado al respecto. <p>En este caso, si bien la quejosa no objetó, se debe tener en cuenta que la persona quejosa fue afiliada dos veces por el <i>PRI</i>, que dicha persona se dolió de la segunda afiliación, es decir, la realizada el 01 de diciembre de 2019 y que la cédula de afiliación exhibida por el partido político denunciado data el 2018, de ahí que, si la persona quejosa fue dada de baja, respecto a la primera afiliación, el 21 de noviembre de 2018, se debe concluir que el <i>PRI</i> no aportó documento alguno para acreditar que la segunda afiliación de la quejosa se realizó conforme a las disposiciones legales y estatutarias del <i>PRI</i>, por lo que, SÍ existe una afiliación indebida y, en su caso, uso indebido de datos personales.</p>			

CONSEJO GENERAL
UT/SCG/Q/MMAR/JD01/AGS/176/2020

No.	Ciudadano	Información proporcionada por la <i>DEPPP</i>	Manifestaciones del partido político
15	Aracely Castillo Hernández	<p>Fecha de afiliación: 01/12/2019</p> <p>Fecha de baja: 30/10/2020</p> <p>Fecha de cancelación: 30/10/2020</p>	<p>Mediante los siguientes oficios el representante del <i>PRI</i> manifestó lo siguiente:</p> <p style="text-align: center;">Oficio PRI/REP-INE/822/2020</p> <p>Informó que la ciudadana de referencia fue parte del citado instituto político y que ya había sido dada de baja de su padrón de afiliados, señalando como fecha de afiliación el 01/12/2019 y como fecha de baja el 17/11/2020.</p> <p>Adjunta capturas de pantalla para acreditar la baja y refiere que derivado de la pandemia provocada por el virus SARS-COV-2, las actividades dentro de las oficinas se encuentran restringidas por lo que se encuentran imposibilitados para buscar los formatos de afiliación y solicitan una prórroga para dar cumplimiento a lo requerido.</p> <p style="text-align: center;">Oficio PRI/REP-INE/128/2021</p> <p>Aportó el Formato Único de Afiliación y Actualización al Registro Partidario a nombre de Aracely Castillo Hernández, de fecha 19/10/2016 y copia de su credencial de elector, por ambos lados.</p>

Conclusiones

A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que:

1. No existe controversia respecto que dicha ciudadana fue registrada como afiliada del *PRI* en atención a lo informado por la *DEPPP* y el partido político denunciado.
2. El *PRI* aportó el original del Formato Único de Afiliación y Actualización al Registro Partidario con los datos y firma de la persona denunciante.
3. Mediante acuerdo de veintiocho de mayo de dos mil veintiuno se dio vista a la persona quejosa con el Formato Único de Afiliación y Actualización al Registro Partidario y mediante acuerdo de treinta y uno de agosto del año en curso se le dio vista de alegatos para que manifestara lo que a su derecho conviniera, sin que se hubiera pronunciado al respecto.

Por lo que, al no ser controvertida la documental aportada por el *PRI*, permite colegir su validez.

En consecuencia, se debe concluir que la afiliación de dicha persona se realizó conforme a las disposiciones legales y estatutarias del *PRI*, por lo que, **NO** existe afiliación indebida y, en su caso, uso indebido de datos personales.

CONSEJO GENERAL
UT/SCG/Q/MMAR/JD01/AGS/176/2020

No.	Ciudadano	Información proporcionada por la <i>DEPPP</i>	Manifestaciones del partido político
16	Irving Adán Popoca Guzmán	<p>Fecha de afiliación: 23/12/2014</p> <p>Fecha de baja: 01/12/2020</p> <p>Fecha de cancelación: 03/12/2020</p>	<p>Mediante los siguientes oficios el representante del <i>PRI</i> manifestó lo siguiente:</p> <p style="text-align: center;">Oficio PRI/REP-INE/822/2020</p> <p>Informó que el ciudadano de referencia fue parte del citado instituto político y que ya había sido dado de baja de su padrón de afiliados, señalando como fecha de afiliación el 23/12/2014 y como fecha de baja el 03/12/2020.</p> <p>Adjunta capturas de pantalla para acreditar la baja y refiere que derivado de la pandemia provocada por el virus SARS-COV-2, las actividades dentro de las oficinas se encuentran restringidas por lo que se encuentran imposibilitados para buscar los formatos de afiliación y solicitan una prórroga para dar cumplimiento a lo requerido.</p> <p style="text-align: center;">Oficio PRI/REP-INE/921/2020</p> <p>Aportó el Formato Único de Afiliación y Actualización del Registro Partidario a nombre de Irving Adán Popoca Guzmán, de fecha 23/12/2014 y copia de su credencial de elector, por ambos lados.</p>
<p style="text-align: center;">Conclusiones</p> <p>A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. No existe controversia respecto que dicho ciudadano fue registrado como afiliado del <i>PRI</i> en atención a lo informado por la <i>DEPPP</i> y el partido político denunciado. 2. El <i>PRI</i> aportó el original del Formato Único de Afiliación y Actualización del Registro Partidario con los datos y firma de la persona denunciante. 3. Mediante acuerdo de ocho de febrero de dos mil veintiuno se dio vista a la persona quejosa con el Formato Único de Afiliación y Actualización del Registro Partidario, y mediante acuerdo de treinta y uno de agosto del año en curso, se le dio vista de alegatos para que manifestara lo que a su derecho conviniera, sin que se hubiera pronunciado al respecto. <p>Por lo que, al no ser controvertida la documental aportada por el <i>PRI</i>, permite colegir su validez.</p>			

No.	Ciudadano	Información proporcionada por la <i>DEPPP</i>	Manifestaciones del partido político
En consecuencia, se debe concluir que la afiliación de dicha persona se realizó conforme a las disposiciones legales y estatutarias del <i>PR</i> , por lo que, NO existe afiliación indebida y, en su caso, uso indebido de datos personales.			

Las constancias aportadas por la *DEPPP*, al ser documentos generados por una autoridad en ejercicio de sus atribuciones se consideran pruebas documentales públicas, de conformidad con el artículo 22, párrafo 1, del *Reglamento de Quejas*, mismas que, conforme a lo previsto en los artículos 462, párrafo 2 de la *LGIPE* y 27, párrafo 2 del Reglamento citado tienen valor probatorio pleno, ya que no se encuentran controvertidas ni desvirtuadas respecto de su autenticidad o contenido.

En el mismo tenor, las documentales allegadas al expediente por el partido político denunciado, constituyen documentales privadas, conforme a lo dispuesto en el artículo 22, numeral 1, fracción II, del *Reglamento de Quejas*; por lo que, por sí mismas, carecen de valor probatorio pleno, y sólo alcanzarán ese grado cuando, al concatenarse con los demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio, generen convicción en este *Consejo General* sobre la veracidad de los hechos a que se refieren, ello al tenor de lo preceptuado en los artículos 462, párrafo 3, de la *LGIPE*, y 27, párrafo 3, del Reglamento en mención.

6. CASO CONCRETO

Previo al análisis detallado de la infracción aducida por los quejosos, es preciso subrayar que de lo previsto en el artículo 458, párrafo 5, de la *LGIPE*, es posible advertir los elementos que se deben actualizar para que la autoridad electoral esté en posibilidad de imponer alguna sanción en materia electoral.

En primer lugar, se debe acreditar la existencia de alguna infracción, esto es, que objetivamente esté demostrada mediante pruebas una situación antijurídica electoral.

Posteriormente, verificar que esta situación sea imputable a algún sujeto de Derecho en específico; esto es, **partido político**, candidato o inclusive cualquier persona física o moral, es decir, la atribuibilidad de la conducta objetiva a un sujeto en particular.

De tal forma que, para la configuración de una infracción administrativa electoral se requiere de la actualización de dos elementos esenciales, por una parte, el hecho ilícito (elemento objetivo) y por otra su imputación o atribución directa o indirecta (elemento subjetivo), lo cual puede dar lugar a responsabilidad directa o incumplimiento al deber de cuidado.

A partir de la actualización de estos dos elementos esenciales, la autoridad electoral, podrá imponer alguna sanción, para lo cual deberá valorar las circunstancias que rodearon la comisión de la conducta.

En tal sentido, por cuanto hace a la existencia del supuesto normativo, debe reiterarse, como se estableció en apartados previos, que desde hace décadas está reconocido en la legislación de este país, la libertad de las y los ciudadanos de afiliarse, permanecer afiliados, desafiliarse de un partido político, o bien, no pertenecer a ninguno, y de igual manera, que las personas en este país tienen el derecho de que se proteja su información privada y sus datos personales, todo lo cual está previsto desde el nivel constitucional.

En el caso, si bien en el marco normativo se hace referencia a los *Lineamientos para la verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos Nacionales para la conservación de su Registro*, identificados con el número de resolución CG617/2012 y, de igual manera se transcribe la parte de disposiciones estatutarias del partido político denunciado, relacionada con el procedimiento de afiliación, lo cierto es que, por el carácter constitucional de tales derechos, la existencia de los mismos —y las obligaciones correlativas a éstos—, no está condicionada al reconocimiento por parte de los sujetos obligados, en este caso, de los partidos políticos.

En otras palabras, si la libertad de afiliación política, en todas sus vertientes, es un derecho de las y los ciudadanos de este país desde hace varios decenios, resulta por demás evidente que las obligaciones de los partidos políticos que deriven de esta garantía —respetar la libertad de afiliación o, en su caso, la decisión de no pertenecer más a un partido, así como acreditar fehacientemente el consentimiento de la persona para cualquier caso— no debe estar sujeta o condicionada a que éstos establezcan en sus normas internas disposiciones encaminadas a su protección, es decir, esta carga que se les impone no depende del momento en el que los partidos políticos hayan incluido en sus normas internas la obligación de que la afiliación sea voluntaria.

Por cuanto hace al elemento subjetivo señalado líneas arriba, debe destacarse que, la autoridad, para estar en aptitud de conocer la verdad de los hechos y su atribución a las personas involucradas en un procedimiento sancionador, debe contar con elementos suficientes que generen convicción para arribar a tal conclusión, y, de ser el caso, determinar responsabilidad y la sanción respectiva.

Para ello, la autoridad, analizará y ponderará el caudal probatorio que obre en el expediente, del cual es posible obtener indicios, entendidos como el conocimiento de un hecho desconocido a partir de uno conocido, o bien, prueba plena para el descubrimiento de la verdad.

Como se precisó con anterioridad, en principio, corresponde a los promoventes demostrar con pruebas suficientes la comisión de la conducta ilícita, así como el señalamiento que formula en contra de la parte denunciada (atribuibilidad), es decir, la carga de la prueba corresponde a la parte quejosa.

Lo anterior, es acorde al principio general del Derecho "el que afirma está obligado a probar", recogido en el artículo 15, párrafo 2, de la *LGSMIME*, de aplicación supletoria al presente caso, en términos de lo dispuesto por el diverso 441 de la *LGIPE*.

En tanto que al que niega se le releva de esa carga, salvo cuando su negación envuelva la afirmación expresa de un hecho; supuesto en el que estará obligado también a demostrarlo en el procedimiento.

Así, esta autoridad electoral considera, en consonancia con lo resuelto por la *Sala Superior*, en el expediente SUP-RAP-107/2017, analizado previamente, que la carga de la prueba corresponde al partido político que afirma que contaba con el consentimiento de los quejosos para afiliarlos a su partido político, y no a los ciudadanos que negaron haber solicitado su inclusión en el padrón de militantes de dicho instituto político.

Por lo que, en el caso concreto, y contrario a lo sostenido por el denunciado, la carga de la prueba corresponde al denunciado, en tanto que el dicho de los denunciantes consiste en que no dieron su consentimiento para ser militantes del *PRI*, es decir, se trata de un hecho negativo, que en principio no es objeto de prueba.

Ahora bien, de conformidad con lo señalado por la *Sala Superior* al emitir la Jurisprudencia **3/2019**, de rubro **DERECHO DE AFILIACIÓN. LA OBLIGACIÓN DE PROBAR LA MILITANCIA CORRESPONDE AL PARTIDO POLÍTICO**, en la que

estableció que, si una persona denuncia una afiliación sin su consentimiento, corresponde a los partidos políticos probar que ese individuo expresó su voluntad de afiliarse, **debiendo exhibir la constancia de inscripción respectiva, esto es, el documento donde se asienta la expresión manifiesta del ciudadano de pertenecer al partido político.**

Así, como vimos, en el apartado *ACREDITACIÓN DE HECHOS* está demostrado, a partir de la información proporcionada por la *DEPPP*, el propio instituto político denunciado y, en su caso, la *DERFE*, que las y los quejosos se encontraron, en algún momento afiliados al *PRI*.

En ese contexto, para determinar si el *PRI* incurrió o no en una posible infracción a la normativa electoral, el análisis correspondiente se dividirá en DOS apartados:

- 1. Apartado relativo a las personas denunciantes a las que el *PRI* NO les conculcó su derecho de libre afiliación.**
- 2. Apartado relativo a las personas denunciantes a quienes el *PRI* SÍ les conculcó su derecho de libre afiliación.**

1. Apartado relativo a las personas denunciantes a las que el *PRI* NO les conculcó su derecho de libre afiliación.

A partir de los razonamientos establecidos en el apartado previo, esta autoridad considera que la afiliación de **Madison Monserrat Álvarez Romo, Selene Guadalupe López Sanz, Aldryn Chamú Márquez, Onivia Mateo Rodríguez, María Antonia Guerrero Ramírez, Azalia Francisca Torres Torres, Esmirna Sumukey Hernández Medina, Ángel Jair Macías Padilla, Griselda Ortiz Ortiz, Zaira Brigitt Bernal Arellano, Griselda Malvaez García, Aracely Castillo Hernández, Brenda Yadira Muñoz Galindo, e Irving Adán Popoca Guzmán** conforme a las pruebas que obran en autos, en específico la información proporcionada por la *DEPPP*, la *DERFE* [en el caso de *Aldryn Chamú Márquez*] así como por lo manifestado por el *PRI* y las documentales que éste aportó, fueron apegadas a derecho.

Ahora bien, el análisis correspondiente se dividirá en dos subapartados:

- A. Subapartado relativo a las personas denunciantes que no objetaron los formatos aportados por el *PRI***
- B. Subapartado relativo a las personas denunciantes que objetaron los formatos aportados por el *PRI***

A. Subapartado relativo a las personas denunciantes que no objetaron los formatos aportados por el PRI

Como se precisó previamente, el documento idóneo para acreditar que un ciudadano expresó su voluntad de afiliarse a un partido político, es la constancia de inscripción respectiva.

En el caso, como quedó establecido en el apartado *ACREDITACIÓN DE HECHOS*, la *DERFE* [en el caso de **Aldryn Chamú Márquez**] y el *PRI* aportaron las pruebas idóneas para acreditar la debida afiliación de **Madison Monserrat Álvarez Romo, Aldryn Chamú Márquez, Onivia Mateo Rodríguez, Esmirna Sumukey Hernández Medina, Ángel Jair Macías Padilla, Griselda Ortiz Ortiz, Zaira Brigitt Bernal Arellano, Griselda Malvaez García, Brenda Yadira Muñoz Galindo, Aracely Castillo Hernández e Irving Adán Popoca Guzmán**

Respecto al formato de afiliación relativo a **Aldryn Chamú Márquez** es importante precisar que si bien dicho documento fue remitido por una autoridad electoral en ejercicio de sus funciones, lo cierto es que se trata de una documental privada, toda vez que los datos que lo integran (imagen viva de la persona, imagen de la credencial para votar (frente y vuelta) y firma manuscrita digitalizada a través de la aplicación móvil) fueron recabados por el propio partido político; los cuales, *per se* no tiene una eficacia demostrativa plena, pero, apreciadas en su contexto y concatenadas con el acervo probatorio que obra en autos, de conformidad con los principios de la lógica y la sana crítica, así como las máximas de la experiencia, permiten a esta autoridad electoral concluir la licitud de la afiliación discutida, ya que se advierte que ésta fue el resultado de la manifestación libre y voluntaria de la persona denunciante, la cual quedó constatada con la firma autógrafa que se asentó en la citada aplicación móvil.

Por lo anterior, se considera, respecto a las ciudadanas y ciudadanos que enseguida se precisan, que el *PRI* cumplió con la carga probatoria que corresponde a su afirmación en el sentido de que las afiliaciones cuestionadas estuvieron precedidas del consentimiento de las personas denunciantes referidas en el presente apartado, pues se aportó:

1. Para el caso de **Aldryn Chamú Márquez** el expediente electrónico ya precisado, en el que aparecen datos como son: el nombre del denunciante, su clave de elector, su sección y domicilio; del mismo modo aparece una

imagen, en anverso y reverso, de la credencial para votar, así como la fotografía viva y firma del ciudadano que brinda su afiliación.

2. Y para los casos de **Madison Monserrat Álvarez Romo, Onivia Mateo Rodríguez, Esmirna Sumukey Hernández Medina, Ángel Jair Macías Padilla, Griselda Ortiz Ortiz, Zaira Brigitt Bernal Arellano, Aracely Castillo Hernández, Brenda Yadira Muñoz Galindo, Griselda Malvaez García e Irving Adán Popoca Guzmán** aportó cédula de afiliación con firma autógrafa y datos personales de los denunciantes.

Ahora bien, con la finalidad de respetar el principio de contradicción y la respectiva garantía de audiencia de las y los quejosos involucrados, durante la sustanciación del procedimiento se ordenó dar vista a los referidos ciudadanos con las respectivas cédulas de afiliación, a efecto de que manifestaran lo que a su derecho conviniera.

De las constancias de autos se advierte que las personas denunciantes fueron omisas en responder a la vista formulada, mediante la que se les corrió traslado de las constancias de afiliación aportadas por el denunciado, así como la vista de alegatos respectiva, por lo que hicieron nulo su derecho de desvirtuar los medios de prueba exhibidos.

En ese sentido, si los referidos quejosos no controvirtieron la respectiva documental exhibida por el *PRI*, para acreditar su afiliación, es válido colegir que existe un reconocimiento tácito de haber suscrito y firmado dicho formato, lo que de suyo permite concluir que sí existió su voluntad para ser afiliados al partido denunciado y por tanto, debe considerarse que prevalece el principio de presunción de inocencia, en su vertiente de estándar probatorio, por tanto, se le debe dar validez a los referidos formatos de afiliación.

En suma, al engazar la cadena de indicios a partir de diversos hechos que se tuvieron como demostrados, en la especie: i) las manifestaciones de las partes y la *DEPPP* respecto a la existencia de las afiliaciones; ii) las documentales privadas, consistentes en las cédulas de afiliación de las partes denunciantes, en cuyo contenido aparece la manifestación de su voluntad (firma autógrafa) y; iii) la falta de objeción a ese formato, esta autoridad resolutoria considera que no existe evidencia objetiva que haga suponer que la afiliación de las y los quejosos referidos, haya sido producto de una acción ilegal por parte del *PRI*.


Ahora bien, no pasa desapercibido para esta autoridad que en el formato de afiliación de **Griselda Ortiz Ortiz** no se aprecia la fecha en la cual la persona

CONSEJO GENERAL
UT/SCG/Q/MMAR/JD01/AGS/176/2020

denunciante fue incorporada al partido denunciado; no obstante, a juicio de este órgano resolutor, dicha circunstancia no es un impedimento para tener por acreditada la debida afiliación de la quejosa.

Lo anterior, pues la cédula contiene elementos que sin lugar a dudas permitían a la ciudadana tener conocimiento de que se trataba de una afiliación, como se advierte de la siguiente imagen:

611
Anexo 2



COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL
SECRETARÍA DE ORGANIZACIÓN
APRIL 2018

FORMATO ÚNICO DE AFILIACIÓN AL REGISTRO PARTIDARIO

EL PRESENTE FORMATO DEBERÁ SER LLENADO CON LETRA DE MOLDE, ESCRIBIENDO LOS DATOS QUE SE SOLICITAN EN CADA CAMPO DE MANERA LEGIBLE Y CLARA.

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
ACTUALIZACIÓN	AFILIACIÓN	DÍA / MES / AÑO FECHA	FOLIO

CLAVE DE ELECTOR

SECCIÓN ELECTORAL

No DE FOLIO DE CREDENCIAL DE ELECTOR

FECHA DE NACIMIENTO

GÉNERO

DATOS GENERALES

Gonzalez

NOMBRE (S)

Ortiz

APELLIDO PATERNO

Ortiz

APELLIDO MATERNO

DIRECCIÓN: LLENE CORRECTAMENTE LOS CAMPOS CON LOS DATOS SOLICITADOS

CALLE

MANZANA

NUM. EXT.

NUM. INTERIOR

C.P.

COLONIA/BARRIO/PUEBLO

LOCALIDAD

DELEGACIÓN/MUNICIPIO

ESTADO

TELÉFONO

CELULAR

CORREO ELECTRONICO

CORREO

DATOS PARTIDISTAS: ES IMPORTANTE QUE ESCRIBA SU FECHA DE AFILIACIÓN AL PARTIDO. EN CASO DE NO PONER FECHA SE ENTENDERÁ QUE LA FECHA DE AFILIACIÓN ES EL DÍA DE ALTA EN EL SISTEMA.

DÍA / MES / AÑO
FECHA DE AFILIACIÓN AL PRI

CNOP

SECTOR / ORGANIZACIÓN

FIRMA

MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE ES LE VOLUNTAD PERTENECER AL PARTIDO, SUSCRIBIRME, CUMPLIR Y HACER CUMPLIR LOS DOCUMENTOS BÁSICOS DEL MISMO, SUS ESTATUTOS Y REGLAMENTOS QUE DE ÉSTOS EMANEN Y QUE NO PERTENEZCO A OTRO PARTIDO POLÍTICO

Del cual, además se advierte una leyenda que señala *DATOS PARTIDISTAS: ES IMPORTANTE QUE ESCRIBA SU FECHA DE AFILIACIÓN AL PARTIDO. EN CASO DE NO PONER FECHA SE ENTENDERÁ QUE LA FECHA DE AFILIACIÓN ES EL DÍA DE ALTA EN SISTEMA*, una firma, así como datos que resultan coincidentes con dicha persona, los cuales no fueron objetados por la quejosa, a pesar de haber tenido la oportunidad procesal de controvertir dichos datos, lo cual conduce a esta autoridad a la conclusión de que **la cédula de Griselda Ortiz Ortiz aportada por el denunciado debe tenerse como suficiente para acreditar la legalidad de la afiliación de la persona denunciante.**

Criterio similar sostuvo este Consejo General en las resoluciones INE/CG81/2022 e INE/CG432/2022 de cuatro de febrero y veinte de julio de dos mil veintidós, dictadas en los procedimientos UT/SCG/Q/MAS/JD32/MEX/194/2020 y UT/SCG/Q/LOMG/JD01/COAH/280/2020.

En suma, al no acreditarse uno de los extremos en que se finca el procedimiento sancionador, específicamente la falta de voluntad de afiliarse al partido denunciado, se concluye la inexistencia del tipo administrativo, por lo que no procede imponer al *PRI* sanción alguna.

Ahora bien, más allá de que no se acreditó la infracción denunciada en el presente procedimiento, en el caso, es importante precisar que las personas denunciantes que se analizaron en el presente apartado alcanzaron su pretensión inicial, que consistía en ser dados de baja del registro del padrón de afiliados del *PRI*, pues de lo manifestado por el propio instituto político, de lo señalado por la *DEPPP* y del acta circunstanciada levantada por la *UTCE* se advierte que los mismos fueron dados de baja del padrón de afiliados del partido denunciado.

B. Subapartado relativo a las personas denunciantes que objetaron los formatos aportados por el *PRI*

Dentro de este supuesto se encuentran **Selene Guadalupe López Sanz, María Antonia Guerreño Ramírez Azalia Francisca Torres Torres** respecto de quienes tanto el *PRI*, como la *DEPPP* informaron que se encontraban afiliados a dicho instituto político.

Ahora bien, con las constancias aportadas por el *PRI*, se dio vista a las personas denunciantes materia del presente procedimiento para que manifestaran lo que a

su derecho conviniera, recibiendo pronunciamientos por parte de dichas personas denunciantes.

Selene Guadalupe López Sanz mencionó:¹²⁰

[...]

Para manifestar directamente mi situación como militante del partido político Partido Revolucionario Institucional (PRI), que en su momento declaré no pertenecer a dicho partido, porque estaba segura de que así era, no recuerdo haberlo hecho, sin embargo, al recibir la notificación con las pruebas del formato, reconozco que sí soy la persona que aparece con foto y firma, aún así confirmo desconocer bajo el concepto (sic) lo realicé en realidad no lo recuerdo.

Por lo tanto, me dirijo a ustedes para pedir la baja definitiva del partido, ya que en realidad nunca he colaborado en ese ni en ningún otro partido. Me mantendré atenta para cualquier aclaración al respecto ya que manifiesto abiertamente cuál fue la razón por la cual me registré como militante, es mi deseo no pertenecer más a ese partido.

[...]

En atención a la vista formulada, **María Antonia Guerreño Ramírez** manifestó:¹²¹

[...] manifiesto que acudí algunas veces al Comité Directivo Estatal del PRI por consulta médica o medicamentos gratuitos, ya que yo iba al DIF, por medicinas también o alguna dispensa, pero una vez que no tenían la medicina me mandaron a varias partes como: Caritas, Beneficencia Pública y al PRI en el Comité Directivo Estatal del PRI, al llegar a consulta o medicinas. Me recibió una persona que está junto a la doctora, su recepcionista, me pidió la credencial para poder pasar a consulta o para que la doctora me entregara medicinas.

Yo no sabía que ellos, el PRI, me afiliaron, nunca di mi consentimiento o autorización para tal acto.

La verdad, cuando me enteré de tal afiliación a este partido me sorprendí muchísimo, me quedé pensando cuándo, cómo fue, me molesta mucho esta acción tan vil, ya que necesito trabajar para mantener a mis niñas, ya que soy madre soltera, sin ayuda de nadie y esta acción de afiliarme como lo hicieron con engaños me está afectando, en caso de haber firmado algún papel fue con engaños para poder entregarme medicamentos.

[...]

Por último, **Azalia Francisca Torres Torres** señaló:

En respuesta a la vista formulada con la cédula de afiliación, mediante escrito de 17/02/2021 indicó¹²²:

¹²⁰ Visible a fojas 718 del expediente.

¹²¹ Visible a foja 438 del expediente.

¹²² Visible a foja 451 del expediente

...

*Le hago saber que desconozco totalmente la afiliación al **Partido Revolucionario Institucional** con mis datos personales, así como también niego y desconozco rotundamente el consentimiento para el uso y manejo de mi firma dando por hecho que mi firma fue falsificada en el documento de militancia, con todo lo anterior descrito y por mi propio derecho, le notificó que deseo continuar con el procedimiento para la baja definitiva de militancia dentro del partido revolucionario institucional.*

...

Mediante escrito de 20/01/2022, por el cual dio respuesta al requerimiento formulado por la autoridad instructora de remitir el original de su escrito de 17/02/2021 precisó:¹²³

[...]

MANIFIESTO QUE EL ESCRITO DE FECHA 17-FEBRERO-2021 FUE FIRMADO CON MI FIRMA AUTÓGRAFA Y POR LA COMPLEJIDAD DE TRASLADO Y LA DISTANCIA QUE HAY DE MI DOMICILIO A LA 04 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA EN SINALOA (GUASAVE) ENVIÉ MI ESCRITO EN ESE MOMENTO VÍA CORREO ELECTRÓNICO, PARA DAR RESPUESTA DENTRO DEL PLAZO AL OFICIO RECIBIDO EL DÍA 12 DE FEBRERO DEL 2021 INE/VS/JD04-SIN/0178/2021.

SOLICITO SE CONTINÚE CON EL PROCEDIMIENTO PARA ELIMINAR MIS DATOS DEL PADRÓN DE AFILIADOS DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, YA QUE DESONZOZO CÓMO MI FIRMA APARECE EN EL DOCUMENTO DE MILITANCIA DE DICHO PARTIDO, YA QUE NO LO FIRMÉ.

[...]

Al respecto, debe precisarse que las manifestaciones realizadas por las personas denunciadas referidas son insuficientes para desvirtuar las pruebas aportadas por el denunciado en razón de lo siguiente:

La Sala Superior al emitir la Jurisprudencia **3/2019**, de rubro **DERECHO DE AFILIACIÓN. LA OBLIGACIÓN DE PROBAR LA MILITANCIA CORRESPONDE AL PARTIDO POLÍTICO**, estableció que, si una persona denuncia una afiliación sin su consentimiento, corresponde a los partidos políticos probar que ese individuo expresó su voluntad de afiliarse, **debiendo exhibir la constancia de inscripción respectiva, esto es, el documento donde se asienta la expresión manifiesta del ciudadano de pertenecer al partido político.**

¹²³ Visible a foja 743 del expediente.

Por ende, de conformidad con lo sostenido por el máximo órgano jurisdiccional en la materia, el documento idóneo para acreditar que un ciudadano expresó su voluntad de afiliarse a un partido político, es la constancia de inscripción respectiva.

En el caso, como ya se señaló, el *PRJ* aportó los originales de las cédulas de afiliación de las personas denunciantes en comento, esto es, cumplió con la carga probatoria que corresponde a su afirmación en el sentido de que las afiliaciones cuestionadas estuvieron precedidas del consentimiento de las personas quejasas.

Pues como se ha manifestado, si el partido político cumple con la carga probatoria que corresponde a su afirmación en el sentido de que la afiliación cuestionada estuvo precedida del consentimiento de las personas quejasas, es decir, si exhibe prueba suficiente sobre la legitimidad de la afiliación motivo de queja, debe considerarse que prevalece el principio de presunción de inocencia, en su vertiente de estándar probatorio.

De ahí que **María Antonia Guerreño Ramírez, Selene Guadalupe López Sanz y Azalia Francisca Torres Torres** debieron aportar, al momento de contestar la vista que se les dio con las documentales ofrecidas por el partido político, un medio de prueba idóneo o suficiente para sustentar su alegación; no obstante, la carga probatoria derivada de su afirmación no fue soportada en medio idóneo de prueba, toda vez que la sola manifestación de que no es su firma, o bien, que estampó su firma con engaños o que no recuerda haberlo hecho, no es suficiente para variar el alcance y valor probatorio del documento ofrecido por el partido político, en términos de lo dispuesto en el artículo 24 del *Reglamento*.

En tal sentido, la idoneidad de un elemento probatorio dependerá del valor de convicción que éste genere para acreditar lo que se pretende. En el caso, esta autoridad no se encuentra en posibilidad de otorgar valor probatorio a las declaraciones vertidas en sus respectivos escritos por las personas denunciantes, pues éstas generan simples indicios de lo que se pretende acreditar, y por sí solas no son susceptibles de producir convicción plena sobre la veracidad de su contenido, al tener que ser administradas necesariamente con otros medios de prueba.

Por tanto, se obtiene que, las pruebas idóneas para acreditar la objeción hecha valer por Azalia Francisca Torres Torres en el sentido de desconocer su firma, pudieron ser las periciales en grafoscopia, grafología y caligrafía que debieron realizarse en tiempo, forma y suficiencia a efecto de que dicha cédula perdiera su alcance probatorio, o en su caso, algún otro medio de convicción idóneo a efecto de que

esta autoridad electoral estuviera en condiciones de llevar a cabo el desahogo del mismo y, en su caso, los objetantes pudieran probar el hecho que pretendían demostrar.

Situación que en el presente caso no aconteció, pues las personas denunciantes no ofrecieron pruebas idóneas y, por tanto, su dicho es insuficiente para objetar el alcance y valor probatorio del documento ofrecido por el partido político, en términos de lo dispuesto en el artículo 24 del *Reglamento de Quejas*.

Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia **1a./J. 12/2012 (10a.)** de rubro y contenido siguientes:¹²⁴

OBJECCIÓN DE DOCUMENTOS PRIVADOS PROVENIENTES DE TERCEROS. LA NECESIDAD DE EXPRESAR EL O LOS MOTIVOS EN QUE SE SUSTENTA, DEPENDERÁ DE LA PRETENSIÓN DE QUIEN OBJETA (CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES). *Tratándose de la objeción de documentos provenientes de terceros, el artículo 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, no exige determinada formalidad para formular la oposición respectiva; sin embargo, se considera que, -atendiendo a la naturaleza de la prueba-, si lo que se pretende con la sola objeción de un documento privado proveniente de un tercero, es que no se produzca la presunción del reconocimiento tácito del documento por no haberlo objetado, bastará con que exprese su objeción de manera genérica a fin de que el juzgador tome en consideración este dato al momento de valorar la prueba, -ello con independencia del valor probatorio que se le otorgue, derivado del hecho de que se perfeccione o no la documental-. En cambio, si lo que se pretende con la objeción es controvertir, -entre otras causas-, la autenticidad de la firma o del contenido del documento, se estima que sí constituye un presupuesto necesario para tener por hecha la objeción, que se expresen las razones conducentes, dado que la objeción no es una cuestión de capricho, sino que se compone precisamente de los argumentos o motivos por los que el interesado se opone al documento respectivo. Dichas razones permiten que la parte oferente tenga la oportunidad de saber en qué sentido tiene que perfeccionar su documento, más aún cuando proviene de un tercero, ya que de lo contrario, el cumplimiento de esa carga procesal estará al arbitrio de quien simplemente objeta un documento sin exponer ninguna razón. Además, tal información también resulta importante para que el juzgador, teniendo esos elementos, le otorgue el valor y alcance probatorio en su justa dimensión.*

[Énfasis añadido]

De igual forma, resulta aplicable la Jurisprudencia **I.3o.C. J/11**,¹²⁵ dictada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, cuyo rubro y texto son los siguientes:

¹²⁴ Consultable en la liga electrónica <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2000608>

¹²⁵ Consultable en <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/197531>

DOCUMENTOS PRIVADOS INSUFICIENTEMENTE OBJETADOS POR EL PROPIO FIRMANTE, VALOR PROBATORIO DE LOS. *En tratándose de documentos privados, debe hacerse la distinción entre aquellos que provienen de terceras personas y los que se atribuyen a las partes litigantes en la controversia. Respecto de los primeros, basta la objeción del instrumento privado, debidamente razonada, para que pierda su valor probatorio, quedando a cargo del oferente la carga de la prueba y apoyar su contenido aportando otros elementos de convicción, y en relación con el segundo supuesto, para tener por satisfecho lo dispuesto por el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, es menester que la parte a quien perjudique realice en tiempo, forma y suficiencia la objeción, para que pierda su alcance probatorio dicho instrumento. De esta manera, se tiene que si en un caso la contraparte del oferente, al dársele vista con el documento exhibido, se limitó a manifestar que no lo había firmado, tal aseveración no pudo constituir la causa suficiente de objeción que demeritara el alcance de esa probanza, ya que para tal efecto resulta indispensable que existan causas motivadoras de la invalidez de la prueba y que se aportaran las pruebas idóneas para tal fin, como pudieron ser las periciales grafoscópicas, grafológicas y caligráficas; elementos que no se rindieron para acreditar la impugnación, como lo dispone el artículo 341 del código citado.*

[Énfasis añadido]

Bajo esta óptica, si las referidas personas denunciantes sostuvieron la falsedad de la firma contenida en la cédula de afiliación que respaldaba su incorporación a las filas del *PRI*, o que firmaron con engaños, asumieron una carga probatoria para demostrar ese aserto, no sólo por la carga genérica que asumen las partes de probar cualquier afirmación que realicen, sino porque la falsificación de un hecho jurídico, *lato sensu*, (en el caso la firma cuestionada), o su ejecución bajo engaños, resulta un evento extraordinario que debe justificarse por quien lo afirma, ya que implica un estado de cosas anormal que genera una duda razonable sobre su realización, máxime, si se consideran las inferencias a las que arribó esta autoridad electoral a partir de la cadena de indicios y del material probatorio que obra en autos.

En conclusión, si el *PRI* cumplió su carga de demostrar que las afiliaciones se realizaron voluntariamente y las personas denunciantes no cumplieron esa carga al no ofrecer medio de prueba idóneo, resulta dable tener por lícitas las afiliaciones de la que se duelen las quejas.

No pasa desapercibido para esta autoridad que en el formato de afiliación de **Selene Guadalupe López Sanz** no se aprecia la fecha en la cual la persona denunciante fue incorporada al partido denunciado; no obstante, como se precisó previamente, a juicio de este órgano resolutor, dicha circunstancia no es un impedimento para tener por acreditada la debida afiliación de la queja.

**CONSEJO GENERAL
UT/SCG/Q/MMAR/JD01/AGS/176/2020**

Lo anterior, pues la cédula contiene elementos que sin lugar a dudas permitían a la ciudadana tener conocimiento de que se trataba de una afiliación, como se advierte de la siguiente imagen:

FORMATO ÚNICO DE AFILIACIÓN O REFRENDO

0124006012366
FOLIO ESTADAL

DÍA MES AÑO
FECHA

☒ ☐
AFILIACIÓN REFRENDO

CATEGORÍA: ☒ ☐ ☐
MULTANTE CUADRO DIRIGENTE

DATOS GENERALES

NOMBRE (S) Selene Guadalupe APELLIDO PATERNO López APELLIDO MATERNO Sanz

CORREO DEL ELECTOR [REDACTED] SECCIÓN ELECTORAL [REDACTED] ZONA [REDACTED]

OCUPACIÓN [REDACTED] DÍA MES AÑO [REDACTED] GÉNERO [REDACTED]

CALLE [REDACTED] MANZANA [REDACTED] FECHA DE NACIMIENTO [REDACTED]

COLUMA / BARRIO / PUEBLO [REDACTED] NÚM. EXTERIOR E INTERIOR [REDACTED] CÓDIGO POSTAL [REDACTED]

ESTADO [REDACTED] DELGACIÓN / MUNICIPIO [REDACTED]

TELÉFONO Fijo [REDACTED] DELGADO [REDACTED]

DATOS PARTIDISTAS

FECHA DE AFILIACIÓN [REDACTED] SECTOR / ORGANIZACIÓN ICH ÚLTIMO CARGO PARTIDISTA [REDACTED]

FECHA DE INICIO DEL CARGO [REDACTED] FECHA DE TÉRMINO DEL CARGO [REDACTED]

REDES SOCIALES

WHATSAPP [REDACTED] CORREO ELECTRÓNICO [REDACTED]

FACEBOOK [REDACTED] TWITTER [REDACTED]

Antes de PREVENIR: El Partido Revolucionario Institucional, a través de su Comité Ejecutivo Nacional y sus 32 Comités Directivos de unidades territoriales, en el cumplimiento de los deberes que le corresponden, a través de los medios de comunicación de masas, en el marco de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y de la Ley General de Acceso a la Información Pública, se pone a disposición de la ciudadanía la siguiente información:

CONTACTO

☐ NEGATIVA EXPRESA ☐ NO RESPONDE ☐ OTRO: ICH

☐ DOMICILIO NO LOCALIZADO ☐ FALSO

INFORMACIÓN DE USO INTERNO

NIVEL DE ESTUDIOS: ☐ PRIMARIA ☐ PREPARATORIA ☐ BACHILLAR ☐ SECUNDARIA ☐ LICENCIATURA ☐ POST GRADO

LUGAR DE AFILIACIÓN: ☐ VENTA DOMICILIO ☐ MODULO ☐ OFICINAS DEL PARTIDO ☐ EVENTO

¿CAUSAS QUE TE MOTIVAN O CON LAS QUE TE IDENTIFICAS PARA AFILIARTE?

☐ JOVENES ☐ MUJERES ☐ PERSONAS CON DISCAPACIDAD ☐ PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALIE ☐ ADULTOS MAYORES ☐ INDÍGENAS ☐ RURALES Y MEDIO AMBIENTE ☐ DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO

Del cual, además se advierte una firma que fue reconocida por la persona denunciante, así como datos que resultan coincidentes con dicha persona, los cuales no fueron objetados por la quejosa, a pesar de haber tenido la oportunidad procesal de controvertir dichos datos, lo cual conduce a esta autoridad a la conclusión de que **la cédula de Selene Guadalupe López Sanz aportada por el denunciado debe tenerse como suficiente para acreditar la legalidad de la afiliación de la persona denunciante.**

Tampoco pasa desapercibido para esta autoridad que en el Formato Único de Afiliación o Refrendo relativo a **María Antonia Guerrero Ramírez** existe un **error evidente en el llenado del referido formato** por parte del partido denunciado, el cual, como se precisó previamente es el encargado de dar de alta las afiliaciones en el Sistema de Verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos, toda vez que en el Formato Único de Afiliación o Refrendo se asentaron a la inversa las fechas de la cédula y de datos partidistas.

Se considera lo anterior, en razón de que, respecto de dicha ciudadana, la *DEPPP* y el *PRI*, proporcionaron las siguientes fechas de afiliación:

Fecha de afiliación informada por la <i>DEPPP</i>	Fecha de afiliación informada por el <i>PRI</i>
28/10/2019	28/10/2019

Ahora bien, del Formato Único de Afiliación se advierte que la fecha de afiliación proporcionada por la *DEPPP* y el *PRI* **28/10/2019** fue colocada en el apartado *Datos partidistas* y que en el recuadro correspondiente al llenado del formato fue colocada una fecha anterior, **24/04/2019**, como se advierte en la siguiente imagen:

CONSEJO GENERAL
UT/SCG/Q/MMAR/JD01/AGS/176/2020

327

COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL

FORMATO ÚNICO DE AFILIACIÓN O REFRENDO

DATOS GENERALES

AFILIACIÓN ☐ **REFRENDO** ☒ **CATEGORÍA:** ☒ **MILITANTE** ☐ **CUADRO** ☐ **DIRIGENTE** ☐

NOMBRE (S) Maria Antonia **APELLIDO PATERNO** Guerrero **APELLIDO MATERNO** Ramirez

CLAVE DE ELECTOR **SECCIÓN ELECTORAL** **EMISIÓN**

OCR **FECHA DE NACIMIENTO** **GÉNERO**

CALLE **MANZANA** **NUM. EXTERIOR E INTERIOR** **CÓDIGO POSTAL**

COLONIA / BARRIO / PUEBLO **DELEGACIÓN / MUNICIPIO**

ESTADO **TELÉFONO FIJO** **CELULAR**

DATOS PARTIDISTAS

FECHA DE AFILIACIÓN **SECTOR / ORGANIZACIÓN** **ÚLTIMO CARGO PARTIDISTA**

FECHA DE INICIO DEL CARGO **FECHA DE TÉRMINO DEL CARGO**

REDES SOCIALES

WHATSAPP **CORREO ELECTRÓNICO**

FACEBOOK **TWITTER**

FIRMA Y/O HUELLA

Manifiesto bajo protesta de decir verdad, que yo me voluntariamente afilié al PRI, cumplir y hacer cumplir los documentos básicos del mismo, y que conforme al artículo 10 de la Ley General de Partidos Políticos, no pertenecí a ningún otro partido político y a por alguna causa no encuentro en el poder de otro partido, renuncio a dicha afiliación.

AVISO DE PRIVACIDAD: El Partido Revolucionario Institucional, a través de su Comité Ejecutivo Nacional y sus 32 Comités Directivos de entidades federativas es el responsable de tratamiento de los datos personales que se recogen por medio del presente formato y los mismos serán utilizados con el propósito de integrar el padrón de militantes, así como para elaborar estadísticas sociales. Serán protegidos de acuerdo a lo dispuesto en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Los titulares de datos personales registrados podrán manifestar su negativa para el tratamiento de sus datos mediante correo electrónico enviado a la siguiente dirección: datospersonales@pri.org.mx, o a través de escrito dirigido a la Secretaría Jurídica y de Transparencia a la dirección: Avenida Insurgentes Norte 32, Surroscilla, 06350, Cuauhtémoc, Ciudad de México. El aviso de privacidad integral se podrá consultar en la dirección electrónica: <http://pri.org.mx/seguridad-informacion>.

CONTACTO

☐ NEGATIVA EXPRESA ☐ NO VIVE AHÍ ☐ OTRO: _____

☐ DOMICILIO NO LOCALIZADO ☐ FALLECIÓ

NIVEL DE ESTUDIOS:

☐ PRIMARIA ☐ PREPARATORIA ☐ NINGUNO

☐ SECUNDARIA ☐ LICENCIATURA ☐ POST-GRADO

LUGAR DE AFILIACIÓN:

☐ VISITA-DOMICILIO ☐ MÓDULO

☐ OFICINAS DEL PARTIDO ☐ EVENTO

CAUSAS QUE TE MOTIVAN O CON LAS QUE TE IDENTIFICAS PARA AYUDAR?

De lo anterior, se advierte que existe un **error evidente en el llenado del referido formato** por parte del partido denunciado, no obstante se considera que la diferencia que se advierte entre las fechas precisadas, en modo alguno desvirtúa la certeza que proporciona dicha constancia de afiliación respecto de la voluntad de la quejosa de afiliarse al partido político denunciado.

Máxime que como se precisó previamente, la quejosa no controvertió frontalmente la firma plasmada en dicho documento y se limitó a señalar que no dio su autorización y que la afiliación fue realizada con engaños, lo anterior, no obstante

que, como se advierte de la imagen previamente inserta la misma contiene elementos que sin lugar a dudas permitían a la ciudadana tener conocimiento de que se trataba de una afiliación.

Finalmente, no pasa desapercibido para esta autoridad que, en el caso de **Azalia Francisca Torres Torres** existe discrepancia entre la fecha de afiliación reportada por la *DEPPP* y la señalada en el formato único de afiliación o refrendo aportado por el *PRI*, como se advierte a continuación:

Persona denunciante	Fecha de afiliación informada por la <i>DEPPP</i> [La cual es coincidente con la señalada por el <i>PRI</i>]	Fecha del Formato Único de Afiliación o Refrendo aportado por el <i>PRI</i>
Azalia Francisca Torres Torres	06/01/2006	05/06/2019

De lo anterior, se advierte que dicha inconsistencia ocurren por tratarse de una afiliación recabada en el marco del acuerdo INE/CG33/2019, con la que se subsanó un registro carecía de dicho soporte documental.

En ese sentido, como se precisó previamente, el acuerdo INE/CG33/2019 tenía como finalidad que los partidos políticos depuraran sus padrones, a través de la revisión de sus archivos para determinar respecto de cada uno de sus militantes, si contaban con la documentación que acreditara la legítima afiliación y, en caso de no contar con ella, buscar la ratificación de la militancia de las y los ciudadanos respectivos, a más tardar, el treinta y uno de enero de dos mil veinte.

En el caso, si bien el partido político denunciado no aportó la documental que amparara el registro de afiliación primigenia, lo cierto es que, en cumplimiento al referido acuerdo INE/CG33/2019, durante la vigencia de éste, en el año dos mil diecinueve, llevó a cabo las acciones necesarias para obtener la documentación comprobatoria de la afiliación.

Es decir, el *PRI* recabó la cédula de afiliación que ampara el registro de la militancia de la parte denunciante.

Ahora bien, más allá de que no se acreditó la infracción denunciada en el presente procedimiento, en el caso, es importante precisar que las personas denunciadas que se analizaron en el presente apartado alcanzaron su pretensión inicial, que consistía en ser dadas de baja del registro del padrón de afiliados del *PRI*, pues de lo manifestado por el propio instituto político, de lo señalado por la *DEPPP* y del acta

circunstanciada levantada por la *UTCE* se advierte que las mismas fueron dadas de baja del padrón de afiliados del partido denunciado

2. Apartado relativo a las personas denunciantes a quienes el PRI SÍ les conculcó su derecho de libre afiliación.

En el presente subapartado se realizará el estudio de los casos concernientes a **Omar Alejandro Cervantes Alcalá y América Crispín Martínez**, respecto de quienes el *PRI* si bien exhibió, respectivamente, documentación para justificar su afiliación a dicho instituto político, a juicio de este órgano colegiado no resulta idónea para su legal acreditación, por las razones que enseguida se exponen.

a) América Crispín Martínez

Para el caso de **América Crispín Martínez** de la información proporcionada por la *DEPPP* se advierte que dicha ciudadana fue dada de alta por el partido político denunciado en su padrón de afiliados en dos ocasiones, como enseguida se detalla:

N°	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRE	ENTIDAD	FECHA DE AFILIACIÓN	FECHA DE BAJA	FECHA DE CANCELACIÓN**
15	CRISPIN	MARTINEZ	AMERICA	MÉXICO	27/07/2010	21/11/2018	06/12/2018
					01/12/2019	30/10/2020	30/10/2020

Por su parte, el *PRI* aportó una cédula de afiliación elaborada el dos de febrero de dos mil dieciocho (02/02/2018) en la que se observa como fecha de afiliación al instituto político el veinticuatro de noviembre de dos mil diecisiete (24/11/2017), tal como se advierte de la siguiente imagen:

CONSEJO GENERAL
UT/SCG/Q/MMAR/JD01/AGS/176/2020

PRI
Partido Revolucionario de México
Estado de México

SÉ PARTE DE LA TRANSFORMACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO
Anexo 3
613

FORMATO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y ACTUALIZACIÓN AL REGISTRO PARTIDARIO

EL PRESENTE FORMATO DEBERÁ SER LLENADO CON LETRA DE MOLDE, ESCRIBIENDO LOS DATOS QUE SE SOLICITAN EN CADA CAMPO DE MANERA LEGIBLE Y CLARA.

☐ ACTUALIZACIÓN ☒ AFILIACIÓN 01/12/2019 [Redacted]

DATOS GENERALES

América *Crispín* *Marlene*

DIRECCIÓN, LLENAR CORRECTAMENTE LOS CAMPOS CON LOS DATOS SOLICITADOS

DATOS PARTIDARIOS: ES IMPORTANTE QUE ESCRIBA SU FECHA DE AFILIACIÓN AL PARTIDO

24/11/2017 [Redacted]

☒ MUTANTE ☐ MIEMBRO ☐ CUADRO ☐ GERENTE

OTROS

MANIFIESTA SU ADESIÓN AL PARTIDO REVOLUCIONARIO DE MÉXICO, CONFORME A LOS REQUISITOS DEL REGLAMENTO DE INTERIORES DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO, QUE SE ENCUENTRA EN LA PÁGINA 100 DEL LIBRO DE LEYES DEL ESTADO DE MÉXICO, Y QUE SE ENCUENTRA EN LA PÁGINA 100 DEL LIBRO DE LEYES DEL ESTADO DE MÉXICO.

En ese tenor, considerando que la queja presentada por **América Crispín Martínez** por su aparente indebida afiliación se realizó **el veintiséis de octubre de dos mil veinte (26/10/2020)**, es inconcuso que dicha ciudadana se dolió de la afiliación realizada por el partido político denunciado el uno de diciembre de dos mil diecinueve (01/12/2019).

En ese sentido, se arriba a la conclusión de que el *PRI* no exhibió la documentación idónea que justifique la debida afiliación de **América Crispín Martínez** al partido político denunciado, la cual fue realizada el uno de diciembre de dos mil diecinueve (01/12/2019), lo que vuelve ilegal su actuar.

Lo anterior es así, pues la fecha de elaboración de la cédula de afiliación exhibida por el *PRI* es del dos de febrero de dos mil dieciocho (02/02/2018), y en ella se refiere como fecha de afiliación el veinticuatro de noviembre de dos mil diecisiete (24/11/2017); además, acorde con el citado reporte de la *DEPPP*, la baja de la ciudadana respecto a dicha afiliación ocurrió el veintiuno de noviembre de dos mil

dieciocho (21/11/2018); es decir, todas las fechas contenidas en la cédula de afiliación proporcionada por el *PRI* son previas a la fecha de afiliación de la que se dolió la quejosa.

Por lo que, ante la falta de documentación idónea que permita acreditar de manera fehaciente la voluntad de la quejosa de referencia para afiliarse al partido político denunciado, el **01/12/2019** se considera que dicha afiliación fue producto de una acción ilegal por parte del *PRI*.

En efecto, como se demostró anteriormente, **América Crispín Martínez** apareció afiliada al *PRI*, y ante la negativa de la denunciante de haberse afiliado, dicho instituto político no aportó documento alguno para acreditar que la segunda afiliación fue realizada con el consentimiento de la quejosa, por lo que se actualiza la violación al derecho fundamental de libre afiliación garantizado desde la Constitución y la ley, según se expuso.

En conclusión, ante la falta de documento que permita acreditar la segunda afiliación de la quejosa se realizó con su consentimiento, este órgano colegiado tiene **por acreditada la infracción** en el presente procedimiento, pues se concluye que el *PRI* infringió las disposiciones electorales tendentes a demostrar la libre afiliación, en su modalidad positiva —afiliación indebida—, de **América Crispín Martínez**, quien apareció como afiliada a dicho instituto político, por no demostrar el acto volitivo para ser registrado como militante de ese partido.

b) Omar Alejandro Cervantes Alcalá

Como ha quedado precisado el *PRI* reconoció la afiliación de **Omar Alejandro Cervantes Alcalá**, situación que fue corroborada por la *DEPPP* quien, además, proporcionó la fecha en que esta persona fue afiliada al partido, la cual es coincidente con la que informó el denunciado a requerimiento expreso de esta autoridad.

Persona denunciante	Fecha de afiliación informada por la <i>DEPPP</i> [La cual es coincidente con la señalada por el <i>PRI</i>]	Fecha del Formato Único de Afiliación o Refrendo aportado por el <i>PRI</i>
Omar Alejandro Cervantes Alcalá	24/05/2019	07/06/2019

Esto resulta relevante, toda vez que, se reitera, la información con la que cuenta la *DEPPP* es alimentada por el propio denunciado en el *Sistema de Verificación del*

Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos; por lo que es válido concluir que, en atención a lo antes señalado, la búsqueda de esta persona se realizó conforme al padrón de afiliados capturados por el **PRI**.

En este sentido, la información proporcionada por la **DEPPP**, se trata de una documental pública expedida por una autoridad en el ejercicio de sus funciones sobre el registro de afiliación del denunciante, razón por la cual se tiene certeza de la afiliación de ésta al instituto político denunciado.

Ahora bien, corresponde señalar que si bien, en el caso, el partido político denunciado exhibió **el original del formato de afiliación** a nombre de la persona denunciante, a fin de acreditar que el registro de las mismas aconteció de forma libre, individual, voluntaria, personal y pacífica y que, además, para llevar a cabo ese trámite cumplió con los requisitos establecidos, para tal efecto, en su normativa interna, toda vez que en dicho documento consta firma autógrafa, lo cierto es que, en ella, **existe discordancia en la fecha de afiliación informada, tanto por la DEPPP como por el propio partido político y, la reflejada en la cédula aportada por dicho ente político**, como lo observamos en la tabla siguiente:

Persona denunciante	Fecha de afiliación informada a requerimiento expreso de la UTCE		Fecha que se aprecia en el original de la cédula de afiliación
	DEPPP	PRI	
Omar Alejandro Cervantes Alcalá	24/05/2019	24/05/2019	<u>07/06/2019</u>

En efecto, se considera que, en el caso, el medio de prueba esencial para acreditar la debida afiliación de la persona denunciante **es el formato de afiliación** o, en su caso, cualquier otra documentación establecida en la normativa del **PRI** en materia de afiliación, en la que constara el deseo de éste de afiliarse a ese partido político, al estar impresa de su puño y letra su firma, el nombre, domicilio y datos de identificación o cualquier otro que acredite que la persona denunciante desplegaba actos propios de un militante, como lo sería el pago de cuotas o la participación en asambleas, por citar algunos.

Sin embargo, una vez que esta autoridad examinó el cúmulo probatorio que obra en autos, identificó diversas inconsistencias en cuanto a la cronología de los hechos, pues en los casos que se analizan en el presente apartado se advierte lo siguiente:

- La fecha de registro que obra en los archivos de la *DEPPP*, difiere de la que consta en la cédula de afiliación aportada por el **PRI**.
- La fecha de afiliación que precisó el **PRI** difiere de la que consta en la cédula de afiliación aportada por dicho denunciado.
- La fecha que consta en la cédula de afiliación aportada por el **PRI**, es diferente y **posterior** a la fecha de registro con que cuenta la *DEPPP* y a la que informó dicho partido político a requerimiento expreso de la autoridad sustanciadora.

Al respecto, conviene precisar que el lineamiento Cuarto de los *LINEAMIENTOS PARA LA VERIFICACIÓN DEL PADRÓN DE AFILIADOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES PARA LA CONSERVACIÓN DE SU REGISTRO*, establece lo siguiente:

***Cuarto.** Entre el 1 de abril de 2013 y el 31 de marzo de 2014, los partidos políticos nacionales deberán capturar en dicho sistema los datos actuales de todos sus afiliados, consistentes en apellido paterno, materno y nombre (s); domicilio completo (calle, número exterior e interior, colonia, barrio, pueblo y/o localidad, delegación o municipio y entidad); clave de elector; género y fecha de ingreso al Partido Político. [Énfasis añadido]*

Respecto a este último requisito, los partidos políticos nacionales estarán obligados a proporcionar la fecha de ingreso de los afiliados que se registren a partir de la vigencia de los presentes Lineamientos. Lo anterior, sin perjuicio de que en caso de que al inicio de la vigencia de los presentes Lineamientos cuenten con este dato, deban incluirlo.

Con ello, se advierte que las fechas de afiliación que obran en el Sistema para la Verificación del Padrón de Afiliados del *INE*, son capturadas directamente por los partidos políticos, dato que a partir del catorce de septiembre de dos mil doce¹²⁶ fue obligatorio requisitar.

En consecuencia, se concluye que el formato de afiliación exhibido por el **PRI**, para acreditar la legalidad de la afiliación de **Omar Alejandro Cervantes Alcalá** no es el documento fuente del cual emana el registro de la persona quejosa como militante de ese instituto político.

Por tanto, a consideración de este órgano resolutor, el documento exhibido por el partido político denunciado, no es válido para acreditar la legal afiliación de Omar Alejandro Cervantes Alcalá toda vez que existe presunción fundada de que fue creado y/o alterado para atender lo requerido por la autoridad instructora, sin tener

¹²⁶ Fecha en que entraron en vigor los referidos Lineamientos.

coherencia respecto de la fecha de los hechos acreditados, como lo es la de afiliación registrada por el propio partido político denunciado en el Sistema para la Verificación del Padrón de Afiliados del *INE*.

Ahora bien, en los casos correspondientes a los **2 denunciantes** analizados en este apartado, el denunciado no demostró que las afiliaciones se realizaran a través del procedimiento que prevé su normativa interna, ni mediante algún otro procedimiento distinto en el que se hiciera constar que dichas personas hubieran dado su consentimiento para ser afiliadas, ni mucho menos que hubieran permitido o entregado datos personales para ese fin, los cuales se estiman necesarios para procesar las afiliaciones, dado que estos elementos se constituyen como insumos obligados para, en su momento, llevar a cabo una afiliación, de ahí que esto sea necesario e inescindible.

Con base en ello, y ante la negativa de las personas denunciantes de haberse afiliado al *PRI*, correspondía a dicho instituto político demostrar, a través de **pruebas idóneas**, que la afiliación de la que se dolieron se llevó a cabo a través de los mecanismos legales para ello, en donde constara fehacientemente la libre voluntad de los hoy promoventes, lo que no hizo en los casos de mérito.

Esto último es relevante, porque, como se expuso, la afiliación al *PRI* implica, además de un acto volitivo y personal, la exhibición o presentación voluntaria de documentos en los que se incluyen datos personales, siendo que, en el caso, no se demostró el consentimiento para el uso de ese tipo de información personal que pudiera haber servido de base o justificación al partido político para afiliar a las referidas personas denunciantes.

Entonces, podemos afirmar que el presunto uso indebido de datos personales tiene íntima vinculación con la afiliación indebida de dichas personas denunciantes respecto a quienes se tiene por acreditada la infracción en el presente procedimiento, lo cual ya quedó debidamente demostrado y, como consecuencia de ello, merece la imposición de las sanciones que se determinarán en el apartado correspondiente.

Ahora bien, no pasa desapercibido que el denunciado refiere que los quejosos no aportan pruebas para acreditar su dicho, no obstante contrario a lo sostenido por el denunciado, la carga de la prueba corresponde al denunciado, en tanto que el dicho de los denunciantes consiste en que no dieron su consentimiento para ser militantes del *PRI*, es decir, se trata de un hecho negativo, que en principio no es objeto de prueba.

Tampoco pasa desapercibido que para el caso de América Crispín Martínez el denunciado refiere que el doble registro es consecuencia de un refrendo de militancia el *PRI* refiere que el registro obedece a que no contaba con un elemento idóneo y que posteriormente recibió de la ciudadana su intención de afiliarse al *PRI*.

No obstante, como se precisó previamente, lo fundado radica en que no se aportaron constancias que permitan soportar la segunda afiliación realizada para la quejosa referida y no a que la misma apareciera con dos registros, en ese sentido, lo expresado por el denunciado en nada cambia la determinación de este Consejo General respecto de dicha ciudadana.

Finalmente, en relación a las excepciones y defensas expuesta por el partido denunciado en el sentido de que las personas denunciantes basan su denuncia en desconocer su participación como militantes sin ofrecer prueba alguna, para acreditar la indebida afiliación, la mismas resultan ineficaces, en atención a lo señalado en el apartado de *CARGA Y ESTÁNDAR PROBATORIO SOBRE INDEBIDA AFILIACIÓN A UN PARTIDO POLÍTICO* de la presente resolución.

Tampoco lo releva de responsabilidad el hecho de haberlas dado de baja de su padrón de militantes, ya que lo que se estudia es la afiliación de la que fueron objeto y no el momento en que fueron dadas de baja como sus militantes, además de que dicha acción ocurrió debido a una solicitud realizada por la *UTCE* dentro del presente procedimiento sancionador.

SÉPTIMO. CALIFICACIÓN DE LA FALTA E INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN.

Una vez que ha quedado demostrada plenamente la comisión de las faltas denunciadas, así como la responsabilidad por parte del *PRI*, en los casos detallados en el considerando que antecede se procede a determinar la sanción correspondiente.

En relación con ello, la *Sala Superior* ha sostenido que para individualizar la sanción a imponer a un partido político por la comisión de alguna irregularidad se deben tomar en cuenta los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en la acción u omisión que produjo la infracción electoral.

1. Calificación de la falta

A) Tipo de infracción

Partido	Tipo de infracción	Descripción de la conducta	Disposiciones jurídicas infringidas
<i>PRI</i>	La infracción se cometió por una acción del partido político denunciado, que transgrede disposiciones de la <i>Constitución</i> , la <i>LGIPE</i> y la <i>LGPP</i> , en el momento de su comisión.	La conducta fue la transgresión al derecho de libre afiliación (modalidad positiva) y el uso indebido de los datos personales de dos personas , por parte del <i>PRI</i> .	Artículos 6, apartado A, fracción II; 16, párrafo segundo; 35, fracción III, y 41, Base I, párrafo segundo, de la <i>Constitución</i> ; 443, párrafo 1, inciso a), y n) de la <i>LGIPE</i> ; 2, párrafo 1, inciso b) y 25, párrafo 1, incisos a), e) e y) de la <i>LGPP</i> .

B) Bien jurídico tutelado (trascendencia de las normas transgredidas)

Por bienes jurídicos se deben entender aquellos que se protegen a través de las normas jurídicas que pueden ser vulnerados con las conductas tipificadas o prohibidas.

En el caso, las disposiciones legales vulneradas tienden a preservar el derecho de las y los ciudadanos de decidir libremente si desean o no afiliarse a un partido político, dejar de formar parte de él o no pertenecer a ninguno, el cual se erige como un derecho fundamental que tienen los individuos para tomar parte en los asuntos políticos del país.

En el caso concreto, se acreditó que el partido ***PRI*** **afilió indebidamente** en su padrón de militantes a **Omar Alejandro Cervantes Alcalá y América Crispín Martínez** sin demostrar que para incorporarlos medió su voluntad de inscribirse como militantes de dicho instituto político, transgrediendo con ello la norma electoral, en específico las disposiciones precisadas en el recuadro inserto en el subapartado previo.

A partir de esta premisa, es válido afirmar que el bien jurídico tutelado por las normas transgredidas, radica en garantizar el derecho de los ciudadanos mexicanos, de optar libremente por ser o no militante de algún partido político, lo cual implica la obligación de éstos de velar por el debido respeto de la prerrogativa señalada, a través de los mecanismos idóneos que permitan generar certeza respecto de que quienes figuran en sus respectivos padrones de militantes, efectivamente consintieron libremente en ser sus agremiados.

A partir de esta premisa, es válido afirmar que el bien jurídico tutelado por las normas transgredidas radica en garantizar el derecho de las y los ciudadanos mexicanos de optar libremente en ser o no militantes de algún partido político, lo cual implica la obligación de éstos de velar por el debido respeto de la prerrogativa señalada, a través de los mecanismos idóneos que permitan generar certeza al respecto.

Por otra parte, como se analizó, para la indebida afiliación acreditada, se usaron los datos personales de los promoventes, sin que éste hubiese otorgado su consentimiento para ello.

Lo anterior, ya que, lógicamente se utilizaron datos personales como lo son, al menos el nombre y la clave de elector de dichos ciudadanos para ser afiliados, lo cual ocurrió en contra de su voluntad, de ahí que el uso de sus datos personales se constituya como un elemento accesorio e indisoluble de la infracción consistente en la afiliación indebida.

Esto es, si bien es cierto, a partir de las constancias que obran en autos no está demostrado que los datos personales hubieran sido utilizados con un propósito diverso infracción acreditada, o bien su difusión frente a terceros, lo es también que dicha información fue necesaria para materializar la incorporación de los datos de las personas quejas al padrón de militantes del partido político denunciado.

De ahí que esta situación debe considerarse al momento de fijar la sanción correspondiente al *PRI*.

C) Singularidad o pluralidad de la falta acreditada

Al respecto, se considera que existe singularidad de la falta pues aun cuando se acreditó que *el PRI* transgredió lo establecido en las disposiciones constitucionales y legales y aún las de la normativa interna del instituto partido político, en perjuicio de 2 ciudadanos, esta situación no conlleva a estar en presencia de una pluralidad de infracciones o de faltas administrativas, toda vez que, en el caso, únicamente se acreditó la infracción al derecho político electoral de libertad de afiliación, en su vertiente positiva, ya que el instituto político denunciado incluyó en su padrón de militantes a dos personas denunciantes, sin demostrar el consentimiento previo para ello.

D) Circunstancias de modo, tiempo y lugar de la infracción

Ahora bien, para llevar a cabo la individualización de la sanción, la conducta debe valorarse juntamente con las circunstancias objetivas que concurren en el caso, como son:

- a) Modo.** En el caso bajo estudio, las irregularidades atribuibles al *PRI*, consistieron en inobservar lo establecido en los artículos 6, apartado A, fracción II; 16, párrafo segundo; 35, fracción III, y 41, fracción I, de la *Constitución*; 443, párrafo 1, inciso a), de la *LGPE*; 2, párrafo 1, inciso b), y 25, párrafo 1, incisos a), e) e y) de la *LGPP*, al incluir en su padrón de afiliados a **Omar Alejandro Cervantes Alcalá y América Crispín Martínez**, sin tener la documentación soporte que acredite fehacientemente la voluntad de éstos de pertenecer a las filas del instituto político en el cual se encontraron incluidos, tal y como se advirtió a lo largo de la presente resolución de forma pormenorizada.
- b) Tiempo.** En el caso concreto, como se razonó en el considerando que antecede, las afiliaciones indebidas acontecieron en las siguientes fechas:

Persona	Fecha de Afiliación proporcionada por la DEPPP
América Crispín Martínez	01/12/2019
Omar Alejandro Cervantes Alcalá	24/05/2019

Al respecto debe tenerse presente que los registros de afiliación se llevaron a cabo en una temporalidad en la que el *PRI* ya tenía conocimiento de las previsiones establecidas en el acuerdo INE/CG33/2019.

- c) Lugar.** Con base en las razones plasmadas en los escritos de denuncias, se deduce que la falta atribuida al *PRI* se cometió en:

Persona	Entidad federativa
América Crispín Martínez	Estado de México
Omar Alejandro Cervantes Alcalá	Michoacán

E. Intencionalidad de la falta (comisión dolosa o culposa)

Se considera que en el caso existe una conducta **dolosa** por parte del *PRI*, en transgresión a lo previsto en los artículos 6, apartado A, fracción II; 16, párrafo

segundo; 35, fracción III, y 41, fracción I, de la *Constitución*; 443, párrafo 1, inciso a), de la *LGPE*; 2, párrafo 1, inciso b), y 25, párrafo 1, incisos a), e) e y) de la *LGPP*.

La falta se califica como **dolosa**, por lo siguiente:

- El partido *PRI* es un partido político nacional y, por tanto, tiene el estatus constitucional de **entidad de interés público**, de conformidad con lo previsto en el artículo 41 constitucional.
- Los partidos políticos son el resultado del ejercicio de la libertad de asociación en materia política, previsto en los artículos 9°, párrafo primero; 35, fracción III, y 41, párrafo segundo, fracción I, de la *Constitución*; 22 y 25, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como 16 y 23, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
- El *PRI* está **sujeto al cumplimiento de las normas que integran el orden jurídico nacional e internacional** y está obligado a conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta a los principios del Estado democrático, respetando los derechos de los ciudadanos, de acuerdo con lo previsto en el artículo 25, párrafo 1, inciso a), de la *LGPP*.
- El de libre afiliación a un partido político es un **derecho fundamental** cuyo ejercicio requiere de la manifestación personal y directa de voluntad de cada ciudadano, en términos del precitado artículo 41 constitucional.
- Los partidos políticos son un espacio para el ejercicio de derechos fundamentales en materia política-electoral, partiendo de los fines que constitucionalmente tienen asignados, especialmente como promotores de la participación del pueblo en la vida democrática y canal para el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público, por lo que a su interior el ejercicio de tales derechos no solo no se limita, sino por el contrario, **se ensancha y amplía**.
- Todo partido político, tiene la **obligación de respetar la libre afiliación** y, consecuentemente, de cuidar y vigilar que sus militantes sean personas que fehacientemente otorgaron su libre voluntad para ese efecto.
- El ejercicio del derecho humano a la libre afiliación a cualquier partido político, conlleva un **deber positivo a cargo de los institutos políticos**, consistente

no sólo en verificar que se cumplen los requisitos para la libre afiliación a su padrón, sino en **conservar, resguardar y proteger la documentación o pruebas en donde conste la libre afiliación** de sus militantes, en términos de lo dispuesto en los artículos 35, fracción III, y 41, Base I, párrafo segundo, de la *Constitución*; 2, párrafo 1, inciso b), y 25, párrafo 1, inciso a) y e), de la *LGPP*.

- El derecho de participación democrática de la ciudadanía, a través de la libre afiliación a un partido político, supone que éste sea el receptáculo natural para la verificación de los requisitos y para la guarda y custodia de la documentación o pruebas en las que conste el libre y genuino ejercicio de ese derecho humano, de lo que se sigue que, en principio, ante una controversia sobre afiliación, **corresponde a los partidos políticos involucrados, demostrar que la afiliación atinente fue libre y voluntaria.**
- La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.
- Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y a su cancelación, así como a manifestar su oposición (para el caso de solicitudes de desafiliación), en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger derechos de terceros.
- La transgresión a la libertad de afiliación es de orden constitucional y legal que **requiere o implica para su configuración, por regla general, la utilización indebida de datos personales de la persona o ciudadano que aun cuando haya manifestado su voluntad de ser dado de baja de un padrón de afiliados, se conserve su registro injustificadamente.**
- El *PR* tenía conocimiento de los alcances y obligaciones que se establecieron a los partidos políticos en el acuerdo INE/CG33/2019, y sobre la necesidad de depurar sus padrones de militantes a fin de que estos fuesen confiables y se encontraran amparados por los documentos que demostraran la libre voluntad de sus agremiados de pertenecer a sus filas. Asimismo, conocía a cabalidad las etapas en que se dividió el acuerdo y las cargas y obligaciones que debía observar en todo su desarrollo.

Tomando en cuenta las consideraciones jurídicas precisadas, en el presente caso la conducta se considera dolosa, porque:

- 1) Las personas quejasas aluden que no solicitaron en momento alguno su registro o incorporación como militante al *PRI*.
- 2) Quedó acreditado que las personas quejasas aparecieron en el padrón de militantes del *PRI*.
- 3) El partido político denunciado no demostró con los medios de prueba idóneos que la afiliación de las personas quejasas se hubiera realizado a través de los mecanismos legales y partidarios conducentes, ni mucho menos que ello se sustentara en la expresión libre y voluntaria de las personas denunciantes.
- 4) El partido denunciado no demostró ni probó que la afiliación de las personas quejasas fuera consecuencia de algún error insuperable, o derivado de alguna situación externa que no haya podido controlar o prever, ni ofreció argumentos razonables, ni elementos de prueba que sirvieran de base, aun indiciaria, para estimar que la afiliación de las personas quejasas fue debida y apegada a Derecho, no obstante que, en principio, le corresponde la carga de hacerlo.
- 5) El registro de afiliación de **Omar Alejandro Cervantes Alcalá y América Crispín Martínez** se efectuó en una temporalidad en la que el *PRI* ya tenía conocimiento de lo establecido en el acuerdo INE/CG33/2019; de ahí que cualquier afiliación ocurrida después de esa temporalidad, debía de estar soportada con los documentos necesarios que demostrasen la voluntad de afiliación.

Sobre este último punto, debe tenerse presente que en términos de las previsiones establecidas en el acuerdo INE/CG33/2019, los partidos políticos tenían la obligación de llevar a cabo la revisión de sus padrones, en el entendido de que, de no contar con la documentación soporte, debían reservar dichas afiliaciones a fin de intentar conseguir el refrendo o ratificación por parte del militante.

Bajo esa lógica y de conformidad con las razones que motivaron la instrumentación del citado acuerdo, todas aquellas afiliaciones obtenidas por los partidos políticos con fecha posterior al veintitrés de enero de dos mil diecinueve, es decir, aquellas consideradas nuevas, debían, indefectiblemente, contar con los documentos comprobatorios de la libre voluntad de afiliación, ya que la facultad de reservar el

registro, solo estaba previsto para los casos derivados del padrón existente a la fecha de emisión del acuerdo; lo que en el caso no ocurrió.

De ahí que esta circunstancia sea relevante para la presente individualización, habida cuenta que esa omisión pone de manifiesto el actuar indebido del denunciado, aún y cuando tenía conocimiento de la obligación contraída, primero de contar con la documentación soporte de la libre voluntad de las partes denunciadas de ser sus militantes, de conformidad con la obligación constitucional y legal que se le impone, y luego, derivado del conocimiento que tuvo sobre los alcances de la suscripción del acuerdo INE/CG33/2019, y de la necesidad y compromiso de regularizar su padrón de personas afiliadas, en los términos impuestos en este acuerdo.

F. Condiciones externas (contexto fáctico)

Resulta atinente precisar que la conducta desplegada por el *PRI* se cometió al afiliar indebidamente a **Omar Alejandro Cervantes Alcalá y América Crispín Martínez** sin demostrar al acto volitivo de estas tanto de ingresar en su padrón de militantes como de haber proporcionado sus datos personales para ese fin.

Así, se estima que la finalidad de los preceptos transgredidos consiste en garantizar el derecho de libre afiliación y la protección de los datos personales de las y los ciudadanos mexicanos, mediante la conservación de los documentos atinentes que permitan demostrar el acto de voluntad de la persona quejosa de militar en ese partido político.

Además, como se indicó, la afiliación de las personas denunciadas **Omar Alejandro Cervantes Alcalá y América Crispín Martínez** se realizó sin contar con la documentación que amparara su voluntad para ser registrados como militantes, ya que, aconteció en una fecha en la que el *PRI* tenía pleno conocimiento de las obligaciones que se imponían en el acuerdo INE/CG33/2019, entre ellas, el depurar sus padrones existentes **y, evidentemente, registrar a sus nuevos agremiados, con la manifestación previa y documentada de su libre intención de ser militantes.**

Así pues, respecto a dichos registros, el *PRI* debió contar y/o verificar que contaba con la respectiva cédula de afiliación para realizar el registro, a fin de evitar una contravención a la norma electoral, lo cual no aconteció.

2. Individualización de la sanción.

Una vez sentadas las anteriores consideraciones, **y a efecto de individualizar apropiadamente la sanción**, se procede a tomar en cuenta los siguientes elementos:

A) Reincidencia

Por cuanto a la **reincidencia** en que pudo haber incurrido el partido **PRI**, este organismo electoral autónomo considera que **Sí se actualiza en los casos de Omar Alejandro Cervantes Alcalá y América Crispín Martínez.**

De conformidad con el artículo 458, párrafo 6, de la *LGPE*, se considerará reincidente a quien, habiendo sido declarado responsable del incumplimiento a alguna de las obligaciones a que se refiere la mencionada *ley*, incurra nuevamente en la misma conducta infractora.

Al respecto, la *Sala Superior* ha establecido que los elementos mínimos que se deben tomar en cuenta a fin de tener por actualizada la reincidencia, como agravante de una sanción en el procedimiento administrativo sancionador, son los siguientes:

1. Que el infractor haya cometido con anterioridad una infracción (repetición de la falta);
2. Que la infracción sea de la misma naturaleza a la anterior, lo que supone que ambas protegen el mismo bien jurídico; y,
3. Que en ejercicios anteriores el infractor **haya sido sancionado por esa infracción mediante resolución o sentencia firme.**

Lo anterior se desprende del criterio sostenido por el *Tribunal Electoral*, a través de la Tesis de Jurisprudencia **41/2010**, de rubro **REINCIDENCIA. ELEMENTOS MÍNIMOS QUE DEBEN CONSIDERARSE PARA SU ACTUALIZACIÓN.**¹²⁷

De lo expuesto, se advierte que un infractor es reincidente siempre que habiendo sido declarado responsable de una infracción por resolución ejecutoria, vuelva a

¹²⁷ Consultable en la página de internet del *Tribunal Electoral*, o bien en la dirección electrónica: <http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=41/2010&tpoBusqueda=S&sWord=41/2010>

cometer una falta de similar naturaleza a aquella por la que fue sancionado con anterioridad.

En ese tenor, la reincidencia, en el ámbito del derecho administrativo sancionador se actualiza, cuando el infractor que ha sido juzgado y condenado por sentencia firme incurre nuevamente en la comisión de la misma falta.

Precisado lo anterior, debe decirse que, en los archivos de esta autoridad administrativa electoral, se encuentra la resolución INE/CG218/2015, aprobada por el Consejo General, el veintinueve de abril de dos mil quince, la cual fue emitida dentro del procedimiento sancionador ordinario identificado con la clave UT/SCG/Q/MCHA/CG/9/PEF/24/2015, a efecto de sancionar al *PRI*, por haber inscrito a su padrón de afiliados a una ciudadana sin su consentimiento.

Con base en ello, y tomando en consideración que la afiliación indebida de **Omar Alejandro Cervantes Alcalá y América Crispín Martínez**, cuyas infracciones quedaron demostradas en el presente procedimiento, fueron realizadas en los **años dos mil diecinueve y dos mil veinte**, es decir, con fecha **posterior** al dictado de la referida resolución, se estima que en el caso **SÍ** existe reincidencia en ese caso.

B. Calificación de la gravedad de la infracción en que se incurra

En el presente caso, atendiendo a los elementos objetivos anteriormente precisados, la infracción debe calificarse dependiendo de las circunstancias particulares de cada caso concreto, contando con una amplia facultad discrecional para calificar la gravedad o levedad de una infracción.

Bajo este contexto, una vez acreditada la infracción, esta autoridad electoral debe determinar, en principio, si la falta fue levísima, leve o grave, y en caso del último supuesto, precisar si se trata de una gravedad ordinaria, especial o mayor.

Luego entonces, debe mencionarse que el criterio que esta autoridad ha considerado para la imposición de la calificación de la infracción, en el presente asunto, tomará en consideración los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en la acción que produjo la infracción electoral, tales como el tipo de infracción; el bien jurídico tutelado; singularidad y pluralidad de la falta; las circunstancias de tiempo, modo y lugar; el dolo o culpa; la reiteración de infracciones; las condiciones externas y los medios de ejecución.

En este sentido, para la graduación de la falta, se deben tomar en cuenta las siguientes circunstancias:

- Quedaron acreditadas las infracciones al derecho de libre afiliación de dos personas denunciantes al partido político, pues se comprobó que el **PRI** afilió a las personas referidas, sin demostrar contar con la documentación soporte correspondiente, que medió la voluntad de sus agremiados de pertenecer o estar inscritos a dicho instituto político.
- El bien jurídico tutelado por las normas transgredidas es garantizar el derecho de libre afiliación de las y los ciudadanos mexicanos, de optar por ser o no militante de algún partido político, y la obligación de éstos de velar por el debido respeto de la prerrogativa señalada, a través de los mecanismos idóneos que permitan generar certeza respecto de la voluntad de quienes deseen pertenecer agremiados a los distintos partidos políticos.
- Para materializar la transgresión a la libertad de afiliación de las personas denunciantes, se utilizaron indebidamente sus datos personales, pues los mismos eran necesarios para mantenerla de forma indebida dentro del padrón de afiliados del partido denunciado.
- No existió un beneficio por parte del partido denunciado, o lucro ilegalmente logrado, ni tampoco existió un monto económico involucrado en la irregularidad.
- No existió una vulneración reiterada de la normativa electoral.
- No implicó una pluralidad de infracciones o faltas administrativas, toda vez que se configuró una sola conducta infractora.
- No se afectó en forma sustancial la preparación o desarrollo de algún proceso electoral.
- **Sí existe reincidencia por parte del **PRI** en el caso Omar Alejandro Cervantes Alcalá y América Crispín Martínez.**

Por lo anterior, y en atención a los elementos objetivos precisados con antelación, se considera procedente **calificar la falta** en que incurrió el partido **PRI** como de **gravedad ordinaria**, toda vez que como se explicó en el apartado de intencionalidad, el partido denunciado dolosamente infringió el derecho de libre

afiliación de las personas quejosas, lo que constituye una transgresión al derecho fundamental de los ciudadanos reconocidos en la *Constitución*.

C. Sanción a imponer

La mecánica para la individualización de la sanción, una vez que se tenga por acreditada la falta y la imputabilidad correspondientes, consiste en imponer al infractor, por lo menos, el mínimo de la sanción y, hecho lo anterior, ponderando las circunstancias particulares del caso, determinar si es conducente transitar a una sanción de mayor entidad, con el objeto de disuadir tanto al responsable como a los demás sujetos de derecho, de realizar conductas similares, que pudieran afectar el valor protegido por la norma transgredida.

Así, el artículo 456, párrafo 1, inciso a) de la *LGIPE*, prevé el catálogo de sanciones a imponer a los partidos políticos, mismas que pueden consistir en amonestación pública; multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para la Ciudad de México (ahora calculado en UMAS); reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda; interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral y, en casos de graves y reiteradas conductas transgresoras de la *Constitución* y la *LGIPE*, la cancelación de su registro como partido político.

Ahora bien, es preciso no perder de vista que el artículo 458, párrafo 5, de la *LGIPE* establece que, para la individualización de las sanciones, esta autoridad electoral nacional deberá tomar en cuenta, **entre otras** cuestiones, la gravedad de la conducta; la necesidad de suprimir prácticas que afecten el bien jurídico tutelado por la norma transgredida, las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la infracción; las condiciones socioeconómicas del infractor; las condiciones externas y los medios de ejecución de la falta; la reincidencia en que, en su caso, haya incurrido el infractor; y, el monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio involucrado en la conducta, en caso que esta sea de contenido patrimonial.

Así, la interpretación gramatical, sistemática y funcional de este precepto, a la luz también de lo establecido en el artículo 22 de la *Constitución*, el cual previene que toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado, con el criterio sostenido por la Sala Superior a través de la Tesis **XLV/2002**, de rubro **DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. LE SON APLICABLES LOS PRINCIPIOS DEL IUS PUNIENDI DESARROLLADOS POR EL DERECHO PENAL**, conduce a estimar que si bien este *Consejo General* no puede soslayar el análisis de los elementos precisados en el párrafo que antecede,

éstos no son los únicos parámetros que pueden formar su convicción en torno al *quántum* de la sanción que corresponda a una infracción e infractor en particular.

En efecto, reconociendo el derecho fundamental de acceso a una justicia completa a que se refiere el artículo 17 de la Ley Suprema, este *Consejo General*, como órgano encargado de imponer sanciones (equivalentes a la *pena* a que se refiere el artículo 22 constitucional, entendida como expresión del *ius puniendi* que asiste al estado) **está compelido a ponderar, casuísticamente, todas las circunstancias relevantes que converjan en un caso determinado**, partiendo del mínimo establecido en el artículo 458 de la *LGIPE*, que como antes quedó dicho, constituye la base insoslayable para individualizar una sanción.

Esto es, el *INE*, en estricto acatamiento del principio de legalidad, **está obligado** al análisis de cada uno de los elementos expresamente ordenados en la *LGIPE*, en todos los casos que sean sometidos a su conocimiento; sin embargo, la disposición señalada no puede ser interpretada de modo restrictivo, para concluir que dicho catálogo constituye un límite al discernimiento de la autoridad al momento de decidir la sanción que se debe imponer en un caso particular, pues ello conduciría a soslayar el vocablo “entre otras”, inserta en artículo 355, párrafo 5, del *COFIPE*, cuyo contenido es congruente con el diverso 458, párrafo 5, de la *LGIPE*, y la tesis antes señalada y consecuentemente, a no administrar una justicia **completa**, contrariamente a lo previsto por la Norma Fundamental.

Lo anterior es relevante porque si bien es cierto la finalidad inmediata de la sanción es la de reprochar su conducta ilegal a un sujeto de derecho, para que tanto éste como los demás que pudieran cometer dicha irregularidad se abstengan de hacerlo, lo es también que la finalidad última de su imposición estriba en la prevalencia de las disposiciones que integran el ordenamiento jurídico, para que, en un escenario ideal, el estado no necesite ejercer de nueva cuenta el derecho a sancionar que le asiste, pues el bien jurídico tutelado por cada precepto que lo integra, permanecería intocado.

En ese tenor, este *Consejo General* ha estimado en diversas ocasiones que por la infracción al derecho de libertad de afiliación como el que ha quedado demostrado a cargo del *PRI*, justifican la imposición de la sanción prevista en el artículo 456, párrafo 1, inciso a), fracción II, de la *LGIPE*, consistente en una **MULTA unitaria por cuanto hace a cada ciudadana y ciudadano sobre quienes se cometió la falta acreditada.**

Otro elemento a considerar para la imposición de la sanción es el relativo a que, como se refirió en el Considerando denominado “Efectos del acuerdo del Consejo General INE/CG33/2019” tanto esta máxima autoridad electoral administrativa como los propios partidos políticos, entre ellos el *PRI*, advirtieron que a la transgresión del derecho de libertad de afiliación que dio lugar a los precedentes a que se refiere el párrafo anterior, subyacía un problema de mayor extensión, reconociendo la necesidad de iniciar un procedimiento de regularización de sus padrones de afiliación, ya que éstos se conformaban sin el respaldo de la información comprobatoria de la voluntad ciudadana.

Ante tales circunstancias, y de conformidad con las previsiones establecidas en el citado Acuerdo, se implementó un procedimiento extraordinario de revisión, actualización y sistematización de los padrones de militantes de los Partidos Políticos Nacionales, para garantizar, en un breve período, que solamente aparezcan en éstos las y los ciudadanos que en realidad hayan solicitado su afiliación, y respecto de quienes, además, los institutos políticos **cuenten con el soporte documental atinente a la militancia.**

Lo anterior, obedece justamente a la vigencia del orden jurídico, incluso más allá de la imposición de sanciones que reprochen a los partidos políticos la transgresión al derecho fundamental ciudadano a decidir si desean o no militar en una fuerza política, además de fortalecer al sistema de partidos, el cual se erige indispensable y necesario para el sano desarrollo del régimen democrático de nuestro país, permitiendo que los institutos políticos cuenten con un padrón de militantes depurado, confiable y debidamente soportado, en cumplimiento al principio de certeza electoral.

Por estas razones, en dicha determinación, específicamente en el punto TERCERO, se ordenó que en el caso de las quejas que se llegasen a presentar con posterioridad a la aprobación del Acuerdo en cita, los partidos políticos nacionales tendrían un plazo de diez días, para dar de baja de forma definitiva a la persona que presentara la queja.

Además, es de suma importancia destacar que el citado Acuerdo implicó para todos los partidos políticos nacionales, aparte de la baja de las personas hoy quejasas de su padrón de afiliados, una serie de cargas y obligaciones de carácter general, tendentes a depurar sus listados de militantes y, a la par, inhibir los registros de afiliaciones que no encuentren respaldo documental sobre la plena voluntad y consentimiento de cada ciudadano.

En sintonía con lo expuesto, en ese acuerdo se estableció que la realización de las obligaciones a cargo de los partidos políticos podría tomarse en cuenta como atenuante al momento de individualizar la sanción correspondiente, de resultar acreditada la infracción en los respectivos procedimientos sancionadores y de acuerdo con la valoración y circunstancias particulares de cada expediente.

No obstante, en el caso concreto, es importante tomar en cuenta que existen circunstancias particulares a través de las cuales **se acreditaron las infracciones** materia del presente procedimiento sancionador ordinario incoado en contra del *PRI*, ya que aún a sabiendas del contenido, alcances y consecuencias de la emisión del acuerdo INE/CG33/2019 de veintitrés de enero de dos mil diecinueve se realizaron las afiliaciones referidas.

Ello, evidentemente denota una conducta dolosa por parte del denunciado, de infringir el acuerdo adoptado al que se refieren los párrafos precedentes, en contravención a la razón que subyacía a su aprobación, que es precisamente contar con padrones de militantes que dotaran de certeza a la autoridad electoral y a la ciudadanía en general sobre la integración de sus registros de agremiados, en beneficio del derecho de libre afiliación que deben observar todos los institutos políticos

Por ello, esta autoridad considera que previo a determinar la sanción que corresponde al *PRI*, por la comisión de la infracción que ha sido materia de estudio en la presente Resolución, es por demás trascendente valorar también las circunstancias particulares del caso, con el objeto de acatar cabalmente el mandato constitucional de administrar justicia de manera completa, inserto en el artículo 17 de la *Constitución*.

En efecto, como antes quedó dicho, al aplicar una norma jurídica abstracta a un caso concreto, el juzgador está obligado a considerar todas las circunstancias que concurren en el particular, inclusive la conducta observada por el responsable con posterioridad a la comisión del ilícito, respecto a lo cual, resulta orientadora la jurisprudencia que se cita enseguida:

“INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA. CORRESPONDE AL ARBITRIO JUDICIAL DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL DE INSTANCIA Y, POR ENDE, EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO NO DEBE SUSTITUIRSE EN LA AUTORIDAD RESPONSABLE.”¹²⁸ *Acorde con el tercer párrafo del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos*

*Mexicanos, la autoridad judicial es la encargada de imponer las penas, al ser la que valora las pruebas para acreditar el delito y la responsabilidad penal del acusado, quien mediante el ejercicio de la inmediación debe analizar los elementos descritos en los artículos 70 y 72 del Código Penal para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México, que se refieren a las condiciones de realización del delito, las calidades de los sujetos activo y pasivo, la forma de intervención del sentenciado, la situación socioeconómica y cultural de éste, **su comportamiento posterior al evento delictivo**, así como las circunstancias en que se encontraba en su realización; **todas esas condiciones deben percibirse por el juzgador de instancia, al ser quien tiene contacto directo con el desarrollo del proceso penal** y no por el tribunal constitucional, el cual tiene como función salvaguardar derechos humanos y no verificar cuestiones de legalidad, en virtud de que su marco normativo para el ejercicio de sus facultades lo constituyen la Carta Magna, los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, la Ley de Amparo y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por lo que el Tribunal Colegiado de Circuito no debe sustituirse en la autoridad responsable, toda vez que no podría aplicar directamente los preceptos de la codificación penal indicada al no ser una tercera instancia, máxime que el tema del grado de culpabilidad del sentenciado y el cuántum de las penas no implica que la responsable se hubiese apartado de la razón y la sana lógica, no es una infracción a la interpretación de la ley, no es una omisión de valoración de la prueba y no consiste en la apreciación errónea de los hechos.”*

Del modo anterior, este *Consejo General* considera que **la actitud adoptada por el PRI, no puede excluirlo de la responsabilidad en que incurrió**, y por el contrario, su actitud en cuanto a este procedimiento debe ser agravado, permitiendo modificar el criterio de sanción que se había venido sosteniendo, hacia un nivel superior de las sanciones previstas por la *LGPE*, toda vez que dicha actitud redundaba en la vigencia del orden jurídico, en la protección al derecho de libre afiliación de las y los ciudadanos tutelada, incluso, por parte de las propias entidades de interés público, como lo es el sujeto denunciado y la prevalencia del Estado de Derecho.

Lo anterior se considera así, ya que, no obstante que, en esa temporalidad el *PRI* tenía pleno conocimiento de las razones y motivos que dieron sustento al acuerdo INE/CG33/2019, cuyo propósito central era que los partidos políticos realizaran una depuración de sus padrones de militantes, con el objeto de contar, **únicamente, con registros de afiliación sustentados con cédulas de afiliación**, en el modo tradicional o, en su caso, con el correspondiente registro electrónico, tratándose de la aplicación móvil, lo cierto es que dicho instituto político incurrió en una afiliación indebida por demás contumaz.

Además, se debe mencionar que el ocho de octubre de dos mil diecinueve, el *PRI* firmó convenio con el *INE* para el uso de la aplicación móvil diseñada para realizar los nuevos registros de afiliación a los partidos políticos, mismo que fue suscrito con antelación, a la fecha en que el instituto político denunciado llevó a cabo el nuevo registro de afiliación materia de controversia. En este sentido, puede concluirse que

en la temporalidad en que realizó el registro de afiliación que ha quedado acreditado como ilegal, el partido ya contaba con las herramientas tecnológicas para, en su caso, preservar la información que demostrara que ese registro fue legal.

Con lo anterior, se evidencia la reiteración de conductas contrarias a la normativa electoral con pleno conocimiento de ello y, sobre todo, de las consecuencias jurídicas que producirían el cometer, de nueva cuenta, un registro de afiliación en contravención a la normatividad electoral y sus propias normas estatutarias.

Es decir, como se indicó, dicho partido político con pleno conocimiento de las razones y motivos que dieron sustento al dictado del acuerdo INE/CG33/2019 y conocedor de las consecuencias jurídicas que traerían aparejado un actuar indebido en materia de afiliaciones, realizó los nuevos registros sin acreditar, en modo alguno, que los denunciante tuvieran la voluntad de pertenecer a su padrón de militantes, cumpliendo con la normatividad atinente y con la documentación comprobatoria para tal efecto.

Es por lo que, en el caso, se advierte la existencia de circunstancias extraordinarias, pues, como se precisó en el apartado respectivo, las personas denunciante manifestaron que en ningún momento se afiliaron a dicho instituto político, situación que no fue desvirtuada por el *PRI*, en los casos de **Omar Alejandro Cervantes Alcalá y América Crispín Martínez** al **no exhibir el documento idóneo** para acreditar que las afiliaciones fueron debidas, por el contrario, el hecho de que el partido político denunciado hubiera realizado un nuevo registro de afiliación sin contar con la cédula de afiliación respectiva y en una temporalidad en la que *PRI* tenía pleno conocimiento de las obligaciones que se imponían en el acuerdo INE/CG33/2019, tanto de depuración de su padrón militantes, como de la forma en que debía realizar los nuevos registros, su actuar es evidentemente doloso y persistente para contravenir la norma electoral.

Dicha situación cobra especial relevancia y no puede pasar desapercibida para este Consejo General, pues el *PRI*, no solo vulneró el derecho de libertad de afiliación y la utilización de los datos personales de las **personas denunciante**, sino que, además, actuó dolosamente y realizó, de nueva cuenta, registros de afiliación sin contar con la documentación soporte, en el contexto del desarrollo del procedimiento de depuración de padrones de militantes de los partidos políticos establecido en el acuerdo INE/CG33/2019.

Lo que denota, como se precisó previamente, un actuar indebido por parte del *PRI* y que evidentemente contraviene los fines y objetivos que debe observar una

entidad de interés público, como lo son los partidos políticos, quienes, en términos de los artículos 41, de la *Constitución* y 25, párrafo 1, inciso a), de la *LGPP*, deben conducir sus actividades dentro de los cauces legales, respetando, entre otros, los derechos de los ciudadanos.

Por lo anterior, no obstante, lo establecido en el Acuerdo INE/CG33/2019 y los cumplimientos dados a dicho Acuerdo por parte del *PRI*, tomando en cuenta las circunstancias particulares del caso concreto, este *Consejo General* considera necesario transitar a una sanción de mayor entidad, con el objeto de disuadir tanto al responsable como a los demás sujetos de derecho, de realizar conductas similares.

En ese orden de ideas, este órgano resolutor se encuentra investido con una potestad sancionadora que le permite valorar a su arbitrio las circunstancias que se actualizaron en la comisión de la infracción, así como su gravedad, máxime si se toma en cuenta que la *LGIPE*, no determina pormenorizada y casuísticamente, todas y cada una de las condiciones del ejercicio de dicha potestad; por el contrario, solo establece las bases genéricas para el ejercicio de la misma, dejando que sea la autoridad quien determine el tipo de sanción que debe aplicarse y, en su caso, el monto de la misma.

En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo tercero, del artículo 21 Constitucional, que prevé que la imposición de las penas, su modificación y su duración, son propias y exclusivas de la autoridad judicial, a juicio de este órgano electoral derivado de las circunstancias que concurrieron a la infracción atribuida al *PRI*, **se justifica** la imposición de la sanción prevista en el artículo 456, párrafo 1, inciso a), fracción II, de la *LGIPE*, consistente en **UNA MULTA**, por cada sujeto afiliado indebidamente, toda vez que se considera que tal medida permitiría cumplir con la finalidad correctiva de una sanción administrativa.

Lo anterior, ya que una amonestación pública sería insuficiente e inadecuada para prevenir la comisión futura de estas infracciones; mientras que las consistentes en reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución y la cancelación del registro como partido político resultarían de carácter excesivo, y la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral sería inaplicable en el presente asunto.

Ahora bien, es de explorado derecho que las autoridades al momento de imponer una sanción pecuniaria deben respetar los límites que la propia ley establece, al fijar un monto mínimo y uno máximo, dejando al arbitrio de la autoridad determinar cuál es el aplicable, y por otra parte, deberá expresar las circunstancias de hecho que justifiquen el monto determinado; valoración en la que la autoridad deberá atender tanto a la afectación que la conducta ilícita ha generado al bien jurídico tutelado en el respectivo ordenamiento, como a la capacidad económica del infractor, la reincidencia o cualquier otro elemento del que pueda inferirse la graduación de la sanción a imponer.

Bajo esta óptica, y tomando en consideración que la acreditación de las afiliaciones indebidas de **Omar Alejandro Cervantes Alcalá y América Crispín Martínez** estuvo precedida de circunstancias particulares, como lo fue que en una época en la que los nuevos registros de afiliación que los partidos político realizaran, ya debían contar con la respectiva cédula de afiliación en el modo tradicional o, en su caso, con el cumplimiento de los requisitos establecidos para la afiliación vía aplicación móvil.

Por ello, esta autoridad considera adecuado, en el caso concreto, partir de una multa por el equivalente a 963 (novecientos sesenta y tres) Unidades de Medida y Actualización¹²⁹, no obstante, toda vez que en el presente asunto se actualiza la reincidencia, la misma se aumenta hasta llegar a 1,284 (mil doscientos ochenta y cuatro) Unidades de Medida y Actualización, por cada uno de los dos casos mencionados, lo que daría un total de **2568 (dos mil quinientos sesenta y ocho) UMAs** vigentes en el año de cada una de las conducta.

Sanción que también ha sido impuesta por este *Consejo General* en los casos de reincidencia, como lo fue las identificadas con las claves **INE/CG168/2021** e **INE/CG470/2022**.

En ese tenor, tomando en cuenta las particularidades que acontecen en esta causa y las condiciones socioeconómicas del instituto político denunciado, y no simplemente los hechos denunciados y acreditados en el presente procedimiento, a fin de que la sanción que se imponga resulte efectivamente proporcional sin ser excesiva.

¹²⁹ En lo sucesivo *UMA*.

En efecto, para que una multa no resulte excesiva o desproporcionada, la autoridad debe determinar su monto o cuantía, **tomando en cuenta** las circunstancias objetivas y subjetivas que rodean la infracción, entre otras, la capacidad económica del infractor, la reincidencia, y el resto de los elementos por los cuales esta autoridad arribó a la calificación de gravedad del hecho infractor, para así determinar de forma individual la multa que corresponda.

De esta manera, la aplicación del principio de proporcionalidad se traduce en una actuación reglada, consistente en tomar en consideración, de manera razonada y con la motivación precisa, los elementos, criterios y pautas que para tal fin se deduzcan del ordenamiento en su conjunto o del sector de éste afectado, y en particular, los que se hubiesen podido establecer de la norma jurídica aplicable.

A efecto de lo anterior, esta autoridad goza de cierta discrecionalidad para individualizar la sanción derivada de una infracción, tomando en consideración la graduación de la sanción, es eminentemente casuístico y depende de las circunstancias concurrentes del caso concreto, partiendo siempre del monto mínimo, que corresponde a la simple demostración de la conducta ilegal, cuestión que tiene sustento en la Tesis relevante **XXVIII/2003**,¹³⁰ emitida por el *Tribunal Electoral*, misma que a letra establece:

“SANCIÓN. CON LA DEMOSTRACIÓN DE LA FALTA PROCEDE LA MÍNIMA QUE CORRESPONDA Y PUEDE AUMENTAR SEGÚN LAS CIRCUNSTANCIAS CONCURRENTES.-

En la mecánica para la individualización de las sanciones, se debe partir de que la demostración de una infracción que se encuadre, en principio, en alguno de los supuestos establecidos por el artículo 269 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, de los que permiten una graduación, conduce automáticamente a que el infractor se haga acreedor, por lo menos, a la imposición del mínimo de la sanción, sin que exista fundamento o razón para saltar de inmediato y sin más al punto medio entre los extremos mínimo y máximo. Una vez ubicado en el extremo mínimo, se deben apreciar las circunstancias particulares del transgresor, así como las relativas al modo, tiempo y lugar de la ejecución de los hechos, lo que puede constituir una fuerza de gravitación o polo de atracción que mueva la cuantificación de un punto inicial, hacia uno de mayor entidad, y sólo con la concurrencia de varios elementos adversos al sujeto se puede llegar al extremo de imponer el máximo monto de la sanción.”

¹³⁰ Consultable en la página de internet del *Tribunal Electoral*, o bien en la dirección electrónica: <http://sief.te.gob.mx/IUSE/tesisjur.aspx?idtesis=XXVIII/2003&tpoBusqueda=S&sWord=XXVIII/2003>

Así, a juicio de esta autoridad y atendiendo a la gravedad de las faltas, con base en lo dispuesto en la fracción II del numeral citado, lo procedente es imponer una multa de **1,284** (mil doscientos ochenta y cuatro) Unidades de Medida y Actualización vigentes en dos mil diecinueve por cada una de las dos conductas realizadas, lo que daría un total de **2568** (dos mil quinientos sesenta y ocho) Unidades de Medida y Actualización, **por las dos personas que se considera fueron afiliadas indebidamente, así como por el uso indebido de sus datos personales, considerando que se acreditó la reincidencia.**

Lo anterior, conforme a lo que se señala a continuación:

Persona	Multa en Unidad de Medida y Actualización	UMA	Multa
América Crispín Martínez	1,284	\$84.49 2019	\$108,485.16 (ciento ocho mil cuatrocientos ochenta y cinco pesos 16/100 M.N.)
Omar Alejandro Cervantes Alcalá	1,284	\$84.49 2019	\$108,485.16 (ciento ocho mil cuatrocientos ochenta y cinco pesos 16/100 M.N.)

Lo anterior, tiene sustento en la Tesis de Jurisprudencia **10/2018**, emitida por el Tribunal Electoral, de rubro **MULTAS. DEBEN FIJARSE CON BASE EN LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN VIGENTE AL MOMENTO DE LA COMISIÓN DE LA INFRACCIÓN.**¹³¹

Cabe precisar que, iguales sanciones han sido impuestas por este *Consejo General*, al emitir diversas resoluciones que han resuelto procedimientos ordinarios sancionadores por indebidas afiliaciones y, que además han sido confirmadas por la *Sala Superior*, entre ellas, la identificada con la clave INE/CG483/2021, confirmada a través del **SUP-RAP-143/2021**.

¹³¹ Consultable en la [liga electrónica](http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=10/2018&tpoBusqueda=S&sWord=UNIDAD,DE,MEDIDA,DE,ACTUALIZACI%C3%93N)
<http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=10/2018&tpoBusqueda=S&sWord=UNIDAD,DE,MEDIDA,DE,ACTUALIZACI%C3%93N>

Debe precisarse que se considera que la multa impuesta al *PRI* constituye una medida suficiente para disuadir la posible comisión de infracciones similares en el futuro, ya que tomando en consideración los factores objetivos y subjetivos, se concluye que la misma resulta eficaz y proporcional.

D) El monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio económico derivado de la infracción

Se estima que la infracción cometida por parte del *PRI*, aun cuando causó un perjuicio a los objetivos buscados por el legislador, no se cuenta con elementos objetivos para cuantificar el monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio económico ocasionado con motivo de la infracción.

E) Las condiciones socioeconómicas del infractor

Del oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/03246/2022, emitido por la *DEPPP*, se advierte que al *PRI* le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias para el mes de **noviembre** de dos mil veintidós, la cantidad de **\$83,508,309.50** [ochenta y tres millones, quinientos ocho mil, trescientos nueve 50/100 M.N]

F) Impacto en las actividades del sujeto infractor

En este sentido, a consideración de esta autoridad, la sanción impuesta se encuentra dentro de los parámetros mínimos y máximos que impone la ley y no constituye una afectación a las actividades ordinarias del partido político sancionado, dado que representa el porcentaje siguiente:

PERSONA DENUNCIANTE	MONTO DE LA SANCIÓN POR PERSONA	% DE LA MINISTRACIÓN MENSUAL POR PERSONA ¹³²
América Crispín Martínez	\$108,485.16	0.12%
Omar Alejandro Cervantes Alcalá	\$108,485.16	0.12%

¹³² Cantidades expresadas hasta el segundo decimal.

Por consiguiente, la sanción impuesta al *PRI* no es de carácter gravoso, si se toma en cuenta el porcentaje que representa con relación a la ministración mensual correspondiente al mes que transcurre.

De esta forma, debe señalarse que esta autoridad considera que la multa impuesta constituye una medida suficiente para disuadir la posible comisión de infracciones similares en el futuro, tomando en consideración los elementos objetivos y subjetivos de la infracción cometida por el *PRI* (especialmente los bienes jurídicos protegidos y los efectos de la falta); su grado de responsabilidad en el actuar ilegal, y su capacidad socioeconómica.

Dada la cantidad que se impone como multa al partido antes citado, comparada con el financiamiento que recibe del *INE* para el presente mes, para cumplir con sus obligaciones ordinarias, resulta evidente que en modo alguno se afecta sustancialmente el desarrollo de las actividades del partido político sancionado.

En efecto, la sanción económica que por esta vía se impone resulta adecuada, pues el mencionado partido político—tal como quedó explicado con anterioridad— está en posibilidad de pagarla sin que ello afecte su operación ordinaria, además que la sanción es proporcional a la falta cometida y se estima que, sin resultar excesiva ni ruinosa, puede generar un efecto inhibitorio, lo cual —según lo ha establecido la Sala Superior del *Tribunal Electoral* en la sentencia del SUP-RAP-114/2009—¹³³ es precisamente la finalidad que debe perseguir una sanción.

De conformidad con el artículo 458, párrafo 7, de la *LG/PE*, las cantidades objeto de las multas serán deducida por este Instituto de las ministraciones mensuales del financiamiento público que por concepto de actividades ordinarias permanentes reciba el *PRI*, una vez que esta resolución haya quedado firme.

OCTAVO. MEDIO DE IMPUGNACIÓN.

A fin de garantizar el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, amparado en el artículo 17 de la *Constitución*, se precisa que la presente determinación es impugnabile, tratándose de partidos políticos, a través del **recurso de apelación**

¹³³ Consultable en la liga de internet:
http://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-0114-2009.pdf.

previsto en el precepto 42 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, así como del **juicio para la protección de los datos personales de los ciudadanos** previsto en el artículo 79 del mismo ordenamiento, cuando se impugne por ciudadanos.

Por lo expuesto y fundado, se emite la siguiente:

R E S O L U C I Ó N

PRIMERO. Se **sobresee** el procedimiento sancionador ordinario, respecto de **María Isabel García Ortega** en términos del Considerando **SEGUNDO** de la presente Resolución.

SEGUNDO. Se **escinde** el procedimiento respecto de **Sebastián Miguel Martínez Miranda y Ariznoe Lizdebeth Zazueta Márquez** en términos de lo señalado en el considerando **TERCERO**.

TERCERO. No se **acredita la infracción** atribuida al **Partido Revolucionario Institucional**, consistente en la afiliación indebida y uso de datos personales para tal efecto, en perjuicio de **Madison Monserrat Álvarez Romo, Aldryn Chamú Márquez, Onivia Mateo Rodríguez, Esmirna Sumukey Hernández Medina, Ángel Jair Macías Padilla, Griselda Ortiz Ortiz, Zaira Brigitt Bernal Arellano, Griselda Malvaez García, Brenda Yadira Muñoz Galindo, Aracely Castillo Hernández e Irving Adán Popoca Guzmán** en términos de lo establecido en el Considerando **SEXTO Numeral Sexto, Apartado 1, Subapartado A.** de la presente Resolución.

CUARTO. No se **acredita la infracción** atribuida al **Partido Revolucionario Institucional**, consistente en la afiliación indebida y uso de datos personales para tal efecto, en perjuicio de **Selene Guadalupe López Sanz, María Antonia Guerreño Ramírez y Azalia Francisca Torres Torres** en términos de lo establecido en el Considerando **SEXTO, Numeral Sexto, Apartado 1, Subapartado B.** de la presente Resolución.

QUINTO. Se acredita la infracción consistente en la indebida afiliación y uso de datos personales para tal efecto, de **Omar Alejandro Cervantes Alcalá y América Crispín Martínez** en términos de lo establecido en el Considerando **SEXTO**, Numeral Sexto, Apartado 2 de la presente Resolución.

SEXTO. En términos del Considerando SÉPTIMO de la presente resolución, se impone al **Partido Revolucionario Institucional** las multas que se indican a continuación:

Nº	Por la afiliación indebida y uso indebido de datos personales de:	Sanción a imponer en Unidad de Medida y Actualización	Sanción a imponer
1	América Crispín Martínez	1,284 (mil doscientos ochenta y cuatro) Unidades de Medida y Actualización, calculado al segundo decimal [ciudadana afiliada en 2019]	108,485.16 (ciento ocho mil cuatrocientos ochenta y cinco pesos 16/100 M.N.)
2	Omar Alejandro Cervantes Alcalá,	1,284 (mil doscientos ochenta y cuatro) Unidades de Medida y Actualización, calculado al segundo decimal [ciudadana afiliada en 2019]	108,485.16 (ciento ocho mil cuatrocientos ochenta y cinco pesos 16/100 M.N.)

SÉPTIMO. En términos de lo establecido en el artículo 458, párrafo 7, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el monto de las multas impuestas al **Partido Revolucionario Institucional** será deducidas de las siguientes ministraciones mensuales del financiamiento público que por concepto de actividades ordinarias permanentes reciba dicho instituto político, una vez que esta resolución haya quedado firme, conforme a lo dispuesto en el considerando OCTAVO.

OCTAVO. La presente Resolución es impugnabile a través del recurso de apelación previsto en el artículo 42, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, así como del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano previsto en el artículo 79, del mismo ordenamiento.

Notifíquese personalmente a los quejosos que han sido señalados a lo largo de la presente determinación.

CONSEJO GENERAL
UT/SCG/Q/MMAR/JD01/AGS/176/2020

Al **Partido Revolucionario Institucional** por conducto de su respectivo representante ante este Consejo General, en términos del artículo 68 numeral 1, incisos d), q) y w), del Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral; y, por estrados, a quienes les resulte de interés.

En su oportunidad, **archívese** el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido.

La presente Resolución fue aprobada en lo general en sesión ordinaria del Consejo General celebrada el 29 de noviembre de 2022, por votación unánime de las y los Consejeros Electorales, Norma Irene De La Cruz Magaña, Doctor Uuc-kib Espadas Ancona, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Maestro José Martín Fernando Faz Mora, Carla Astrid Humphrey Jordán, Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello.

Se aprobó en lo particular por lo que hace al criterio de sobreseimiento, en los términos del Proyecto de Resolución originalmente circulado, por diez votos a favor de las y los Consejeros Electorales, Norma Irene De La Cruz Magaña, Doctor Uuc-kib Espadas Ancona, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Maestro José Martín Fernando Faz Mora, Carla Astrid Humphrey Jordán, Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, y un voto en contra del Consejero Electoral, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña.

Se aprobó en lo particular por lo que hace al criterio de omisión de investigar dádivas, en los términos del Proyecto de Resolución originalmente circulado, por diez votos a favor de las y los Consejeros Electorales, Norma Irene De La Cruz Magaña, Doctor Uuc-kib Espadas Ancona, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Maestro José Martín Fernando Faz Mora, Carla Astrid Humphrey Jordán, Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, y un voto en contra del Consejero Electoral, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña.

CONSEJO GENERAL
UT/SCG/Q/MMAR/JD01/AGS/176/2020

Se aprobó en lo particular por lo que hace al criterio de reiteración, en los términos del Proyecto de Resolución originalmente circulado, por ocho votos a favor de las y los Consejeros Electorales, Norma Irene De La Cruz Magaña, Doctor Uuc-kib Espadas Ancona, Carla Astrid Humphrey Jordán, Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, y dos votos en contra de los Consejeros Electorales, Maestro José Martín Fernando Faz Mora y Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, no estando presente durante la votación la Consejera Electoral, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera.

Se aprobó en lo particular por lo que hace al criterio de objeción de pruebas, en los términos del Proyecto de Resolución originalmente circulado, por ocho votos favor de las y los Consejeros Electorales, Doctor Uuc-kib Espadas Ancona, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Carla Astrid Humphrey Jordán, Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, y tres votos en contra de la Consejera y los Consejeros Electorales, Norma Irene De La Cruz Magaña, Maestro José Martín Fernando Faz Mora y Doctor José Roberto Ruiz Saldaña.

**EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL
CONSEJO GENERAL**

**EL SECRETARIO DEL
CONSEJO GENERAL**

**DR. LORENZO CÓRDOVA
VIANELLO**

**LIC. EDMUNDO JACOBO
MOLINA**